



Facultad de Trabajo Social
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

TESIS DE MAESTRÍA

***Desplazamiento forzado intraurbano en contextos de
violencia: impactos y representaciones en los grupos sociales
afectados en la ciudad de Santiago de Cali, 2014-2016***

MAESTRANDA: Lic. Luisa Fernanda Riascos Sánchez

DIRECTORA: Dra. Verónica Cruz

Maestría en Trabajo Social, FTS UNLP
La Plata, 20 de Abril de 2020

AGRADECIMIENTOS

*A mi familia, de la que aprendí
sobre empatía y solidaridad.*

A la fuerza creadora que guió mis pasos hacia Argentina, un país que tuve la oportunidad de recorrer y admirar desde la Patagonia, en el sur, hasta sus tierras andinas en el norte, al que declaro mi amor y gratitud por las inolvidables experiencias vividas.

A mi madre, a mi padre y a mi hermano por su amor infinito, por ser el motor constante e incondicional en este proyecto académico y en todos los aspectos de mi vida.

A mi compañero de vida, que con amor, paciencia y entendimiento me acompañó en este largo camino, animándome cuando creí que no iba a poder culminar la escritura de este trabajo.

A los protagonistas de las Historias de Vida, Carlos y María, a quienes admiro por su valentía y capacidad de resiliencia, por ser la voz de la Otredad invisibilizada, por permitirse soñar algo mejor para sus vidas.

A mi directora de tesis, Dra Verónica Cruz por su perseverante guía a través de estos años, por no dejarme desfallecer con cada entrega de los avances del trabajo y por sus valiosos aportes para con éste.

A todo el equipo de la maestría en Trabajo social de la Universidad Nacional de la Plata, de quien valoro su calidad humana y profesional. A Susana Malacalza y María del Pilar fuentes por su apreciable gestión, permitiéndonos a los cursantes de la maestría el aprendizaje e intercambio con un maravilloso grupo de maestros y maestras.

A los funcionarios de la Defensoría del pueblo que accedieron amablemente a ser entrevistados y que enriquecieron este trabajo con sus contribuciones.

A la fundación servicio juvenil Bosconia Marcelino-Cali, especialmente a su equipo psicosocial, que además de propiciar las condiciones para establecer lazos con una de las fuentes orales para este trabajo, también posibilitó que mi acompañamiento en calidad de practicante a varios procesos de protección y restitución de derechos a niños y jóvenes fuese posible durante 7 meses.

A mis entrañables amigos de siempre, los que están y los que ya partieron, y a los que conocí en el transcurso de esta travesía, porque su esencia hace amable la existencia.

INDICE

Resumen	6
Justificación.....	7
Introducción.....	12
Objetivos	18
Estrategia Metodológica	18
CAPITULO I: Desplazamiento forzado intraurbano: un problema social.....	26
I.1 Caracterizaciones sobre Santiago de Cali y el distrito Aguablanca.....	26
I.2 Conflicto armado en Colombia: su incidencia en las dinámicas de poblamiento en Cali.....	32
I.3 desplazamiento forzado en contextos de violencia... ..	35
CAPITULO II: Desplazamiento forzado, políticas sociales y Trabajo Social: entramando conceptos	40
II.1 Conceptualización del desplazamiento forzado intraurbano.....	44
II.2 Aproximaciones sobre el concepto de ciudad	49
II.3 El desplazamiento intraurbano como expresión de violencia: sus efectos.....	52
II.4 Estado Social de Derecho, ciudadanía y reconocimiento de las víctimas	62
II.5 Políticas sociales y desplazamiento forzado.....	69
II.6. El Estado neoliberal en Colombia, una <i>monocultura de la productividad</i>	74

CAPITULO III: cuando lo ausente se vuelve presente: Población desplazada y su reconocimiento 78

III.1 Marcos normativos y protocolos para la atención de población desplazada por la violencia.....79

III.2. Ejercicio de ciudadanía y visibilización del desplazamiento intraurbano 88

CAPITULO IV: Desplazamiento intraurbano en la cotidianidad de las víctimas: dos Historias de Vida..... 98

IV.1. Brisas de Comuneros: el inicio del desplazamiento forzado intraurbano para Carlos y María 98

IV.2. La huella del re-desplazamiento forzado en las Historias de vida de María y Carlos... 107

IV.3. Impactos de la violencia urbana y del desplazamiento forzado intraurbano en la ciudad de Cali desde la perspectiva de las víctimas..... 118

IV.4. La *revictimización* como manifestación de la razón indolente 132

IV.5. Construcciones locales: las redes de apoyo desde y para la comunidad..... 137

IV.6. La importancia del Trabajo Social en el rescate de las Historias de Vida 141

CONCLUSIONES: La reivindicación de otros saberes para la generación de una política social del desplazamiento intraurbano en la ciudad de Cali..... 144

Anexo 1 151

Anexo 2 152

Anexo 3 153

BIBLIOGRAFÍA 154

RESUMEN

Esta tesis es el resultado del trayecto de formación en la Maestría en Trabajo Social de la Universidad Nacional de la Plata; e indaga el desplazamiento forzado intraurbano en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, en el marco de la violencia urbana, a través de un estudio cualitativo de carácter descriptivo-exploratorio, utilizando como herramienta metodológica central las Historias de vida de personas impactadas por la problemática.

De manera que la tesis plantea la importancia de visibilizar estos relatos, a fin de elaborar una caracterización del fenómeno que permita -a partir de esas voces,- construir conocimientos necesarios acerca del fenómeno en la ciudad de Cali, reflexionando sobre los impactos que éste acarrea en la cotidianidad de las víctimas. Asimismo, la tesis procura problematizar y reconocer el rol de las políticas sociales como medio para intervenir y contrarrestar la vulneración de derechos que este tipo de desplazamientos produce; además de ofrecer una mirada sobre las estrategias que las personas vulneradas despliegan para hacer frente a la problemática mientras esperan la respuesta institucional.

Palabras clave: Historia de vida, Víctimas, desplazamiento forzado intraurbano, violencia urbana, exclusión, derechos, política social.

JUSTIFICACIÓN

El interés por este tema de investigación surgió de dos maneras. La primera fue durante las prácticas docentes que son requisito en el tercer año del pregrado en Licenciatura en Historia, en el año 2008; que fueron desarrolladas en una escuela ubicada en uno de los barrios periféricos de la ciudad, Siloé. Allí trabajábamos algunas horas vespertinas con estudiantes de grado 4 y 5 de primaria, desarrollando un proyecto educativo ambiental. El compartir y la alegría de las tardes se fueron tornando en afecto entre el grupo de trabajo y los niños. Había uno de ellos que se acercaba a nosotros con frecuencia, en los minutos de descanso, a contarnos anécdotas o hacernos preguntas. Una tarde el niño llegó bastante acongojado, una maestra nos comentó que el fin de semana anterior habían asesinado a su padre. Unos días después, supimos a través de su abuela, que el niño no regresaría más a la escuela pues él y su familia tuvieron que abandonar el barrio. La abuela comentaba que la casa, de su propiedad, también había quedado abandonada y que, por recomendación de la policía del sector, decidieron irse del lugar. Esa fue la respuesta que obtuvieron al hacer la denuncia formal y exponer su situación de vulnerabilidad.

La segunda experiencia que motivó las indagaciones sobre el tema estudiado fue la investigación realizada en la tesis de pregrado, entre el año 2009 y 2010, sobre la Etnoeducación afrocolombiana, en un contexto específico de la ciudad de Cali: el Distrito de Aguablanca. Se trató de un estudio etnográfico, razón por la que el trabajo de campo, la observación y entrevistas fueron la base del mismo. Durante el trabajo de campo realizado en las instituciones educativas, estableciendo lazos con directivas, maestros y estudiantes, duró cuatro meses. En esa instancia, empezó a ser notoria la “deserción escolar” de algunos estudiantes en diferentes grados de escolaridad. Por la frecuencia con la que asistíamos a la institución como observadores y realizando entrevistas ya se había creado familiaridad con varios estudiantes, por lo que resultaban llamativas sus ausencias. Cuando se indagó al respecto con los docentes encargados nos hacían saber que la razón de esas ausencias se debía al abandono intempestivo del lugar de residencia,

efectuado junto a sus familias, por amenazas relacionadas a “problemas de pandillas.” Supimos que algunos de ellos se reasentaron en sectores de la ciudad o áreas metropolitanas. También nos llamó la atención conocer -a través de los mismos estudiantes, en especial de secundaria,- que algunas de las casas de sus compañeros desplazados habían sido vandalizadas “las cogieron a roca” o tomadas por expendedores, conocidos en el barrio como “jíbaros” para vender narcóticos.

Al indagar con algunos maestros, resultaba inquietante también, que miembros de las familias afectadas acudiesen a ellos y directivos de la institución educativa para informar la situación, pedir algún consejo sobre dónde acudir para recibir atención o pedir ayuda con el traslado del cupo educativo de los estudiantes a otros colegios de la ciudad.

A saber, fueron dos situaciones que si bien se presentaron dentro de la trama educativa, como docente en formación, fueron motivo de reflexión sobre las condiciones que trascienden la escuela, y que de alguna forma reflejaban una realidad más amplia: la de familias impactadas por formas de violencia en la ciudad, que se veían obligadas a abandonar sus residencias, entendidas éstas no solo como lugares para asentarse, sino como el espacio donde tejieron lazos comunales con vecinos, amistades del colegio, proyectos de vida, dinámicas familiares, laborales, entre otras cuestiones que se vieron perjudicadas por la situación. Así pues, los antecedentes expuestos, generaron un interés particular en el tema que llevó a indagar en artículos de prensa, comunicaciones de entidades como alcaldía o personería de la ciudad de Cali. Aparecían notas cortas en portales de noticias que mencionaban escuetamente el término “desplazamiento intraurbano” y que de cierta forma, interpelaban a conocer el fenómeno en la ciudad, sobre todo a partir de las experiencias de las personas afectadas cuyas voces incrementaron el interés hacia el tema, respecto del cual la información proveniente de fuentes institucionales era escasa y no daba cuenta de una sistematización y análisis del mismo.

A razón de ello se derivaron otros cuestionamientos como ¿cuál era el contexto en el que se generaban esos desplazamientos; qué tan frecuentes eran; a qué entidades podían o habían recurrido en busca de atención, apoyo y protección las familias afectadas? También, si existía alguna tipificación para este tipo de problemática que permitiera, primero su visibilización, y segundo la intervención efectiva por parte de instituciones gubernamentales a través de políticas públicas destinadas a ello. Este escenario posibilitó, de alguna manera, repensar la idea sobre realizar también estudios desde el Trabajo Social. En algunos semestres, cursamos materias conjuntas con los estudiantes de esta profesión, como el seminario de Constitución política y Derechos Humanos y el seminario de Problemas Colombianos, y en el compartir de saberes, se destacaba la riqueza de conocimiento generada a partir de la intervención social¹, las lecturas pertinentes de escenarios locales, posibles a partir del trabajo en el territorio, que permitía no sólo ejecutar programas sociales, sino también pensar su pertinencia de acuerdo a las necesidades contextuales.

Por consiguiente, luego de realizar la licenciatura, cursar la maestría en Trabajo Social fue otra motivación para explorar la problemática del desplazamiento intraurbano en la ciudad de Cali. Dada la experiencia previa con el método etnográfico, el acercamiento al tema en el marco de la investigación fue dándose mediante la reconstrucción de las voces de personas afectadas, con la intención de visibilizar el problema como un asunto público. En la segunda mitad del año 2011 los intercambios con trabajadores sociales que ejercían dentro del Distrito de Aguablanca, aportaron al relevamiento de datos siendo ellos fuentes primarias que

¹ Durante la maestría en Trabajo Social, el debate sobre la conceptualización de la intervención social fue constante. Remitiéndose a antecedentes históricos, se le destaca como un conjunto de mecanismos de control y regulación (Carballeda, 2002) establecidos también de acuerdo al proyecto social dictado por el poder hegemónico para mantener gobernabilidad (Galaz y Montenegro, 2015); Pero también concebida, en especial después de la década del 60 del siglo XX, como la posibilidad de establecer relaciones dialógicas con los sujetos de intervención para impulsar acciones transformadoras dentro de un sistema generador de desigualdad.

De manera que, a partir de los intereses y preocupaciones particulares expuestos sobre la cuestión social, me inclino a realizar una lectura desde la intervención social entendida como "interpretación de la complejidad social, en la que se incluyen perspectivas de intervención que emergen como interpretación de sentidos por aproximación a contextos, narraciones y testimonios."

compartían sus experiencias, explicitando cómo en algún momento de sus trayectorias se vieron impactados por el desplazamiento intraurbano, desde su ejercicio profesional. A través de ellos se realizó el primer contacto, el cual fue con una madre, cabeza de hogar, quien había sido recientemente desplazada desde el barrio El vergel, ubicado en el Distrito, y que terminó asentada en otro barrio del mismo sector, llamado Marroquín. A través de ella se pudo establecer contacto con un sacerdote de una iglesia del barrio mencionado, quien de manera espontánea fue organizando una red de apoyo para familias afectadas por este tipo de desplazamiento, conformada en especial por madres y abuelas sostén de hogar. Estos dos primeros acercamientos posibilitaron conocer que la ruta que suelen seguir los desplazados intraurbanos es buscar redes de apoyo cercanas, en este caso la parroquia del barrio, más allá de instaurar denuncias en comisaría de policía, donde generalmente catalogaban la problemática como una manifestación de la delincuencia común, desde allí los instaban a acudir a la Fiscalía y ésta entidad los remitía a Personería o Defensoría del pueblo, donde tampoco encontraban respuesta eficaz. Por consiguiente, se generó otra preocupación para ser abordada: indagar sobre rutas de atención o interpelar por la generación de políticas públicas desde las necesidades de los sectores perjudicados por el desplazamiento intraurbano. Especialmente en ese último aspecto, cursar la maestría en Trabajo Social permitió un panorama más amplio dónde poner a dialogar elementos aportados por la Licenciatura en Historia con la complejidad de una profesión interventiva que genera puentes entre las demandas sociales de las comunidades y los actores políticos, a partir del conocimiento de la cuestión social, en constante tensión y dinamismo.

Sintetizando, el transcurso de la maestría, los debates y las monografías realizadas llevaron a explorar aspectos del Trabajo Social, su relación con la cuestión social, sectores subalternos y políticas sociales, con la finalidad de comprender su sentido desde cuestiones epistemológicas y políticas. Este último aspecto incidió de manera importante en la elaboración de esta tesis en el marco de la cual el trabajo de campo se realizó desde 2014 en la ciudad de Cali, y hasta

2016.² Además de las historias de vida también se realizaron entrevistas etnográficas semi-estructuradas, fundamentales en este trabajo. Aquello fue similar a la acción de tejer: ir paciente, recabando información, visitando entidades públicas, conociendo a las personas que posibilitaron este trabajo y sus entornos, estableciendo conexiones a través de la confianza y el respeto que les permitieron hacer a un lado el temor para transformarlo en valor manifestado en la palabra.

También es importante realizar algunas acotaciones sobre el periodo trabajado: Los años 2012 y 2013 corresponden al inicio del proyecto de tesis para cursar la maestría con los primeros acercamientos al tema a través de la recopilación de fuentes secundarias y en especial, a los primeros pronunciamientos institucionales sobre el desplazamiento intraurbano en la ciudad de Cali a través de medios de comunicación. El trabajo de campo fue realizado durante los años 2014 y 2016, el cual consistió en la recopilación de las Historias de vida, visitas a diferentes sectores del Distrito de Aguablanca, en especial al asentamiento desde donde se generaron los desplazamientos descritos en dichas historias y que tuvieron lugar entre los años 2013 e inicios del 2014, visitas a entidades como la Defensoría del pueblo y entrevistas a algunos de sus funcionarios, además de visitas a uno de los barrios receptores de familias desplazadas (El vergel) y Comisaría de policía del sector. Es importante destacar que paralelo al trabajo de campo, se registró un incremento de denuncias de desplazamiento intraurbano, lo que produjo pronunciamientos de la personería de Cali a través de los medios de comunicación y un informe relevante en el año 2014 sobre violencia de pandillas barriales, datos que serán mencionados en el transcurso del trabajo. Finalmente, cabe mencionar que fue durante el último tramo del trabajo de campo, a partir de las entrevistas con los asesores para el desplazamiento forzado en la región, que se obtuvo información sobre política social para el desplazamiento intraurbano en Cali.

² Ese trayecto fue favorecido por la experiencia profesional construida durante siete meses en la Fundación Servicio Juvenil Bosconia, que permitió una mejor comprensión de la profesión, y el acercamiento a una de las fuentes.

INTRODUCCIÓN.

El desplazamiento forzado constituye una violación al derecho internacional humanitario –es decir, una vulneración directa a los derechos básicos de las personas que se encuentran al margen de un conflicto armado- por ello es alarmante que Colombia sea uno de los países con mayor cantidad de víctimas de este fenómeno. Según la Agencia de la ONU para los refugiados –ACNUR- en el 2014 el país fue el segundo en el mundo con mayor número de desplazados, después de Siria.³

Aunque se han venido generando políticas para la atención de dichas víctimas, éstas no brindan el apoyo ni la cobertura suficiente para atender la magnitud del problema en sus diferentes dimensiones. Por razones como éstas se han creado diferentes organizaciones no gubernamentales que agrupan tanto víctimas del desplazamiento forzado, como a académicos, juristas y otros profesionales (algunos ex miembros de instituciones oficiales) con el fin de reclamar y hacer seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas destinadas a la atención de las víctimas del fenómeno, tal es el caso de la Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado.

Pese a ello, resulta positivo que el tema haya sido abordado en numerosos estudios elaborados por académicos y centros de investigación social nacionales e internacionales para ponerlo en conocimiento de la opinión pública y de la sociedad en general, como un llamado para que se tomen las medidas necesarias para mitigar el impacto del fenómeno. Con respecto a ello podemos mencionar algunos estudios sobre el fenómeno patrocinados por CODHES (consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento), como el realizado en la ciudad de Santiago de Cali en el año de 1996 en coordinación con la arquidiócesis de la misma ciudad, titulado “Desplazados en Cali: entre el miedo y la pobreza” (Arquidiócesis: 1997).

³ La cifra presentada por ACNUR en el informe “Tendencias globales”, estima que 6.044.151 de personas han sido desplazadas por el conflicto armado colombiano hasta el año 2014 (ACNUR: 2014: 23).

Sin embargo, resulta preocupante que otro tipo de desplazamientos forzados -diferentes al rural/urbano- no reciban la misma atención y por consiguiente no sean ampliamente difundidos como un problema social que necesita respuestas. Este es el caso del desplazamiento forzado intraurbano que, a pesar de que afecta en gran medida a las poblaciones residentes en barrios populares de la periferia de las ciudades, ha sido poco abordado, y por ende poco debatido y conocido. Conscientes de esta situación, investigadores sociales se han dado a la tarea de iniciar el estudio de esta problemática desde el año 2004 aproximadamente (Ospina y Zapata: 2004.); aunque estos esfuerzos, valiosos por el aporte que realizan, se han centrado especialmente en la ciudad de Medellín (donde se registra el mayor índice de desplazados intraurbanos del país, lo que ha impulsado la caracterización del fenómeno como sistemático). Estos estudios constituyen antecedentes para investigaciones posteriores en otros centros urbanos del país, teniendo en cuenta el aumento en las cifras de este tipo de desplazamiento en algunas de las principales ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Buenaventura, Barrancabermeja, entre otras⁴ a partir del año 2012. Situaciones que se configuran en una alerta sobre la necesidad de abordarlas a partir de análisis juiciosos que permitan explicar la problemática e intervenir con la planeación y ejecución de políticas públicas.

El desplazamiento intraurbano forzado se configura a partir de situaciones en las cuales individuos o grupos de personas residentes en barrios periféricos de la ciudad, deben abandonar sus lugares de residencia hacia otros asentamientos de condiciones similares en la misma ciudad, por acción de pandillas barriales, grupos alzados en armas al margen de la ley y en otros casos, debido a la acción de entidades gubernamentales que, atendiendo a los planes de desarrollo establecidos en las diferentes administraciones de turno, ejecutan desalojos para llevar a cabo la construcción de obras de infraestructura; o por ser terrenos que se encuentran por fuera del plan de ordenamiento territorial (POT) siendo

⁴ El medio de comunicación Caracol, en su portal de noticias web informó que en algunas ciudades del país, incluyendo Cali, se reportó -por parte de la agencia presidencial de Acción social- un aumento del desplazamiento forzado intraurbano entre un 4 y 5 por ciento con respecto a años anteriores (Caracol: 2012).

inadecuados para la construcción de viviendas. Sobre estas formas de entender el fenómeno se profundizará más adelante. Sin embargo cabe resaltar que en esta investigación se trabajará el desplazamiento intraurbano forzado por acciones de pandillas barriales asociadas con actores armados al margen de la ley, (principalmente de miembros del paramilitarismo a los que, desde el sector oficial, se les ha denominado Bacrim –bandas criminales- a partir del proceso de desmovilización adelantado por el gobierno de Álvaro Uribe en el año 2005 y en menor medida de milicias urbanas de las guerrillas Farc y Eln) en el marco de la violencia urbana vivenciada en la ciudad de Cali: “Con base en el ejercicio de monitoreo llevado a cabo por CODHES, desde 1996 el fenómeno del desplazamiento forzado intraurbano ha tenido un crecimiento constante, con un incremento dramático en 2012, año en el que al menos 20.490 personas se vieron obligadas a desplazarse dentro de una misma ciudad por la acción de grupos armados ilegales” (Romero: 2014: 15).

Así pues, además de registrar y describir el desplazamiento intraurbano en la ciudad en contextos de violencia, el interés de esta investigación radica en centrar la atención en dos experiencias de las personas que han sido afectadas por el mismo, utilizando principalmente la Historia de vida, pues a través de esta herramienta es posible retratar el fenómeno desde las vivencias de quienes resultan afectados en la cotidianeidad. Asimismo, concierne puntualizar que tales hechos configuran una clara vulneración de derechos humanos, y exigen en consecuencia intervenciones activas por parte del Estado, vía políticas públicas que restituyan y protejan esos derechos inalienables de toda la ciudadanía colombiana. Al referirnos a las situaciones de vulneración de derechos humanos, interesa señalar que en esta investigación se recuperan los aportes del enfoque de derechos, instituido con fuerza a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la segunda pos guerra (1948). Este enfoque marca la necesidad de que los Estados produzcan legislaciones y políticas que garanticen y promuevan el reconocimiento y ejercicio efectivo de derechos universales, obligatorios, inalienables, inviolables e irreversibles, concertados por los Estados miembros de las Naciones Unidas para proporcionar a las personas el status de

igualdad jurídica y libertad, que les permita acceder a un bienestar ligado al goce y no sólo a suplir necesidades.

Por lo antes dicho, resulta fundamental resaltar la importancia del enfoque basado en los derechos humanos puesto que, en el marco de políticas públicas destinadas al desarrollo social, se centra en los sectores que han sido objeto de mayor exclusión y discriminación, distanciándose de su concepción como receptores pasivos de asistencia, sino, por el contrario, como sujetos con capacidad de empoderamiento.

En líneas generales, este enfoque considera que el primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos es reconocer que ellos son titulares de derechos que obligan al Estado. Al introducir este concepto se procura cambiar la lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas. Las acciones que se emprendan en este campo no son consideradas sólo como el cumplimiento de mandatos morales o políticos, sino como la vía escogida para hacer efectivas las obligaciones jurídicas, imperativas y exigibles, impuestas por los tratados de derechos humanos. Los derechos demandan obligaciones y las obligaciones requieren mecanismos para hacerlas exigibles y darles cumplimiento (Abramovich: 2006: 36).

La población desplazada de manera violenta dentro de la ciudad de Santiago de Cali, ha sido portadora de la exclusión y marginación referida anteriormente, por ejemplo, al estar residiendo en asentamientos informales, con infraestructura inadecuada, expuesta a altos índices de violencia y vulneración de derechos. Al respecto, en una de las dos historias de vida interesa indagar la manera en que las víctimas hacen frente a la situación e intentan disponer de los mecanismos estatales para exigir la restitución y garantía de sus derechos. Asimismo, se hará referencia a los procesos implementados por las instituciones del Estado, vía políticas públicas, para brindar rutas de atención a los sectores impactados por el desplazamiento forzado intraurbano.

En este escenario, la problemática objeto de investigación adquiere relevancia para el Trabajo Social en tanto conforma parte del universo de demandas que le son conferidas a los profesionales en pos de generar intervenciones reparatorias. De este modo, la profesión puede ser pensada como vehículo que además de ejecutar políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales de la población afectada, realiza aportes en la construcción teórica de la problemática del desplazamiento forzado intraurbano a fin de enriquecer el análisis y el planteamiento de diferentes herramientas para intervenir al respecto. En este sentido, cobra especial relevancia el planteamiento de Miranda, quien afirma que mientras desde la profesión no se hagan los esfuerzos teóricos por comprender y actuar respecto a las causas originales de las problemáticas sociales

estaríamos rescatando cuerpos, poniendo parches a las situaciones (...) el poder analizar concienzudamente el camino recorrido por la profesión permite generar reflexiones como el considerar que el trabajo social aparece como consecuencia de hacerse una serie de preguntas sobre el porqué de los problemas sociales, de la desigualdad social, de la pobreza” (2004: 23).

Esta investigación define al Trabajo Social como una práctica profesional especializada, inscrita en la división socio-técnica del trabajo, abocada a desplegar intervenciones frente a los problemas sociales. Además la profesión es convocada no sólo para desplegar un acervo de prácticas -en el sentido más instrumental de la palabra- destinadas a mitigar los impactos negativos de dinámicas sociales, políticas o económicas, a través de las políticas públicas creadas para tal fin, sino también a repensar su quehacer desde los contextos en los cuales se desempeña. En el mismo sentido, la interdisciplinariedad de las ciencias sociales resulta relevante para leer la complejidad del problema y diseñar respuestas desde la articulación de los saberes disciplinares en los diferentes escenarios, siendo a su vez dicha intervención, otra fuente de producción de conocimientos.

uno de los mayores desafíos que el trabajador social vive en el presente es desarrollar su capacidad de descifrar la realidad y construir propuestas de trabajos creativos y capaces de preservar y efectivizar derechos, a partir de demandas emergentes en el cotidiano. En fin, un profesional propositivo y no sólo ejecutivo” (Iamamoto: 2003: 20).

En este orden de ideas, resulta vital que el conjunto de las ciencias sociales aborde el tema de los desplazamientos intraurbanos como objeto de reflexión y análisis, a fin de producir conocimientos que contribuyan a una mejor comprensión del problema, y orienten la revisión y reformulación de políticas sociales, puesto que las personas y familias que sufren este tipo de desplazamiento son ciudadanos con derechos vulnerados, y el Estado debe reconocerlos como tal, asegurando el acceso a programas que garanticen su bienestar y restituyan sus derechos.

De igual manera, es fundamental comprender la complejidad inherente a las políticas sociales, en este caso dirigidas a atender el problema del desplazamiento forzado, en tanto las mismas resultan de un interjuego generado a partir de la capacidad de presión de los grupos afectados, los sesgos culturales, la tradición en cuanto a la intervención pública, las actitudes y valores de los decisores públicos, el rol de los medios de comunicación y la competencia política, entre otros. Es importante entonces reafirmar que en ese mismo movimiento, la definición de un problema social implica una toma de decisión no aséptica, que da inicio al proceso de construcción de las políticas, formulando alternativas de solución desde una visión estratégica y racional que le otorga viabilidad a las mismas (Cruz, 2008).

OBJETIVOS.

Objetivo general

- Analizar los múltiples efectos del fenómeno del desplazamiento intraurbano en la ciudad de Santiago de Cali, como proceso que vulnera derechos fundamentales de los grupos poblacionales.

Objetivos específicos

- Contextualizar y describir el fenómeno del desplazamiento intraurbano en la ciudad de Santiago de Cali, como expresión de violencia y vulneración de derechos de los grupos sociales afectados.
- Identificar la configuración de las políticas públicas dirigidas al abordaje de la problemática del desplazamiento forzado intraurbano en la ciudad de Cali, a fin de contribuir a su reformulación en clave de derechos.
- Describir, a partir de dos Historias de vida, la experiencia de personas desplazadas, con el propósito de conocer sus percepciones así como las estrategias desplegadas para enfrentar y mitigar el problema.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA.

En virtud de las consideraciones planteadas, la tesis describe y analiza el fenómeno del desplazamiento forzado intraurbano en la ciudad de Santiago de Cali, a través de un estudio cualitativo de carácter exploratorio-descriptivo que procura relevar e interpretar información desde fuentes primarias, utilizando principalmente las Historias de vida de dos víctimas -una de ellas al mismo tiempo perpetrador de violencia urbana- de este tipo de desplazamiento; y apreciaciones logradas a partir de entrevistas semi-estructuradas de personas representantes de instituciones oficiales como la Defensoría del pueblo.⁵

⁵ La defensoría del pueblo, cuya autoridad está representada en la figura del defensor del pueblo, es una entidad establecida como consecuencia de la Constitución de 1991, que en el artículo 162 describe a esta entidad como encargada de defender los derechos constitucionales y fundamentales de los individuos y colectividades habitantes en la nación, supervisar el

Se aborda la problemática a partir de las voces de quienes han sido afectados por ésta, teniendo en cuenta su condición de ser habitantes de barrios vulnerables o de “alto riesgo”. Este sector de la población al que le han sido vulnerados sus derechos es entonces denominado *víctimas*, que según la ONU son las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo substancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe, el abuso de poder. En la expresión víctima se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a su cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir su victimización (ONU: 1985:12).

A lo anterior debe añadirse un elemento fundamental y es que en varias ocasiones, las personas que han sido víctimas de la problemática, son también desplazados del conflicto armado desde las zonas rurales hacia la ciudad, generándose una repetición en la condición de ser desplazado por la violencia y también una revictimización de las mismas instituciones estatales que en el marco del Estado de derecho, deben garantizar su bienestar. Por el contrario, en múltiples ocasiones estas instituciones han incurrido en tratos inadecuados para con las víctimas, negándoles información sobre los procesos de restitución de derechos e inclusive acusándolos por su condición de doble desplazamiento, como es el caso de una de las historias de vida aportadas para este trabajo.

Por consiguiente, puede entenderse la *revictimización* o *victimización secundaria* como la circunstancia en la que un sujeto es puesto en una condición no libre ni voluntaria sino impuesta por el ejercicio de otro poder, que ejerce fuerza o presión. Se trata de un alguien que ha sido víctima, pero el prefijo re, advierte

cumplimiento de los deberes del Estado y velar por la prestación de servicios públicos a la ciudadanía. Así como se hará mención de esta entidad en el desarrollo del trabajo, también se mencionará la Personería municipal, cuya cabeza, el personero municipal, es el representante de la comunidad. El rol de esta última entidad es ejercer control y vigilancia sobre las respectivas entidades territoriales del Ministerio público y encargarse de la defensa y promoción constante de los derechos humanos, así como recibir declaraciones y denuncias sobre vulneración de éstos.

sobre la característica de esa condición su repetición. Por lo tanto, la revictimización es una palabra derivada que hace referencia a la experiencia que victimiza a una persona en dos o más momentos de su vida.” (Equipo Psicosocial. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2010).

De acuerdo al tema central de esta tesis, interesa subrayar que esa condición revictimizante es ejercida por las diferentes representaciones del Estado sobre las víctimas. De manera que, cuando estas últimas buscan acceder a procesos institucionales reparatorios, tras ser afectados por alguna situación que vulnere sus derechos, experimentan una nueva violación de los mismos por parte de las entidades a las que recurren, evidenciada, por ejemplo, en omisión de información necesaria, señalamientos que cuestionan o ponen en tela de juicio la situación de las víctimas por su condición socioeconómica, política, cultural, etc. Tales acciones impiden reparar su situación a nivel económico, social, físico y psicológico (Beristain, 1999). La revictimización, además

propicia detrimento en la salud de la víctima, generando afectaciones e implicaciones -como si fuese la impronta de una huella- que en ocasiones es más dolorosa que la misma consecuencia derivada del delito padecido. Puesto que, estas secuelas producen deterioro psíquico y físico en la víctima, así como retraimiento social, empobrecimiento de las redes de apoyo, hasta llegar al detrimento general de la víctima” (Mantilla: 2015: 10)

A partir de lo anterior, interesa señalar la importancia sustantiva que reviste el rescate de las memorias que frecuentemente se encuentran en el olvido y que son aportadas por los propios sujetos en el marco de la construcción de las Historias de Vida, que a su vez se traducen como actos de resistencia luchando por afianzar una identidad no excluyente que les permita encontrar su lugar en el tejido social urbano :“La memoria comprendida como resistencia y reconstrucción de la identidad ayuda a las personas víctimas del desplazamiento forzado a comenzar un precario proceso de inclusión ciudadana” (Figuerola: 2014: 62).

Las historias de vida son una interpretación que realiza el investigador, producida a partir de la reconstrucción de relatos de vida en función de distintas categorías conceptuales, y en consecuencia

permiten conocer cómo los individuos crean y reflejan el mundo social que les rodea. ofrecen un marco interpretativo a través del cual el sentido de la experiencia humana se revela en relatos personales de modo que da prioridad a las explicaciones individuales de las acciones más que a los métodos que filtran y ordenan las respuestas en categorías conceptuales predeterminadas (Chárriez cordero: 2012: 52)

Durante la fase de relevamiento de datos, se toman en cuenta las alertas presentadas por la Personería y el Observatorio Social de Cali, que expresan un aumento del fenómeno, registrando un creciente número de víctimas de este tipo de desplazamiento, focalizando en el sector de la ciudad de Cali conocido como el Distrito de Aguablanca.⁶

Finalmente se presentan las Historias de vida analizadas conforme a los conceptos trabajados en el marco teórico, además de los datos obtenidos de otras fuentes, para analizar desde la perspectiva de Derechos Humanos, los impactos que el fenómeno abordado genera en las dinámicas cotidianas de las personas afectadas, además de las conclusiones correspondientes a los objetivos de conocimiento planteados en la investigación.

Teniendo en cuenta que el tema escogido ha sido poco estudiado y sistematizado en la ciudad de Cali, y en ese sentido constituye un área de vacancia; el diseño de tipo cualitativo, de carácter exploratorio-descriptivo que asume esta investigación, permite realizar un primer acercamiento al objeto de estudio. Para ello el trabajo de indagación se centra principalmente en la reconstrucción e interpretación de la percepción que tienen las personas que

⁶ Al respecto, los comunicados alertando sobre este tipo de desplazamiento se han realizado a través de la página oficial de la personería y la prensa local: Personería de Cali denuncia desplazamiento intraurbano de familias en el barrio El Vergel por amenazas y enfrentamiento ente pandillas (Personería de Cali, 2013)

vivencian el fenómeno, reconociendo la significación del mismo dentro de sus dinámicas cotidianas:

La investigación cualitativa se caracteriza por ser inductiva, abierta, flexible, cíclica y emergente; es decir, surge de tal forma que es capaz de adaptarse y evolucionar a medida que se va generando conocimiento sobre la realidad estudiada (...) sostiene que la realidad es construida socialmente mediante definiciones individuales o colectivas de una determinada situación, es decir, se interesa por el entendimiento del fenómeno social, desde la visión del actor. De ahí que los datos obtenidos al utilizar la metodología cualitativa constan de ricas descripciones verbales sobre los asuntos estudiados. Además, toma en consideración el significado afectivo que tienen las cosas, situaciones, experiencias y relaciones que afectan a las personas (Rivera, 2000)

La exploración cualitativa aborda el objeto de estudio mediante la técnica de “Historias de vida,” para dar cuenta de las trayectorias de las personas que han vivenciado la problemática, y sobre todo para analizar los efectos subjetivos que la misma produce. Asimismo, se busca comprender las formas en las que ha impactado este tipo de desplazamiento en la organización de las dinámicas colectivas, comunitarias. Teniendo en cuenta que la Historia de vida no sólo subraya una experiencia personal conforme a una situación específica, sino que también pone en evidencia la inscripción del fenómeno en un contexto histórico-social; dejando entrever rasgos de la estructura social en la que se encuentra inmersa la propia subjetividad que narra. De este modo, las historias de vida, permiten entender la colectividad de la que hace parte el informante, quien encarna a la sociedad de su tiempo como representante de la misma, revelando en su trayectoria, rasgos del imaginario social. O dicho en otros términos, según Pereira de Queiroz (1999:9-10). aunque el investigador sólo registre una sola historia de vida, su objetivo es captar el grupo, caracterizar la sociedad de la que hace parte; busca encontrar la colectividad a partir del individuo Así pues

la Historia de vida permite conocer mejor al grupo, la colectividad, la sociedad. El individuo es un medio, un recurso para alcanzar aquella finalidad última, y partiendo del entendimiento del individuo como un fenómeno social, es que aspectos importantes de su sociedad, de su tiempo, comportamientos, valores e ideologías pueden ser recogidos a través de su historia” (Pereira de Queiroz: 1999:14)

La investigación cualitativa puede ser realizada desde distintos enfoques teórico-metodológicos, tales como la historiografía que, a partir de la historia oral, reconstruye las nociones de experiencia, datos autobiográficos y biográficos, testimonios directos entre otros, que resultan cruciales, por ejemplo, para reconocer el modo en que los fenómenos son significados “desde abajo”. En este sentido, Hernandez Sandioca define a la historia oral como

una apuesta combativa, que rescata las voces que permanecen al margen de la historia oficial. La historia oral sería de esta manera, el medio más potente para incorporar a la memoria viva del presente a múltiples testigos procedentes de sectores y grupos de la sociedad cuyas acciones, en caso de faltarnos su testimonio, hubieran de quedar por siempre ocultas y en la ignorancia de la posteridad. (2004:22)

Retomando a Pereira de Queiroz (1991), éste define a la historia oral como una cantidad de relatos respecto a hechos no registrados por otro tipo de documentación, o cuya documentación se desea completar, recogida por medio de entrevistas de variadas formas. La autora registra la experiencia de un individuo o de diversos individuos de una misma colectividad. En este último caso, busca la convergencia de relatos sobre un mismo acontecimiento o sobre un mismo periodo de tiempo. En concordancia con estas ideas, Sebe Bom (1992) plantea vertientes que conforman el conjunto de la Historia oral: la tradición oral, historia oral de vida, historia oral temática e historia oral híbrida.

Esta investigación apela a la historia oral de vida entendida como relatos que se producen con una intención: elaborar y transmitir una memoria, personal o

colectiva, que hace referencia a las formas de vida de una comunidad en un período histórico concreto; y se generan a petición de un investigador (Plano: 2002). También toma la concepción híbrida que recoge aspectos de las demás vertientes: si bien se concentra en la experiencia de vida de las personas entrevistadas, inclina su atención por un tema específico sobre el que interesa conocer la experiencia particular del narrador, complementando dicha narración con otro tipo de información. Hace referencia a la recolección de testimonios en combinación con otras fuentes, vinculándolos con un tema específico de interés por parte del investigador. Esta aborda también cuestiones externas, objetivas, que son complementadas con la historia oral de vida, de carácter más subjetivo (Sebe Bom:1992:12).

Sobre esta forma de implementar las historias de vida en relación con la perspectiva de historia oral híbrida, Hammer y Wildavsky, citados por Cecilia Plano proponen la definición de unos ejes temáticos que guíen la entrevista, pero que deben ser manejados habilidosamente por el investigador-entrevistador para brindar flexibilidad y comodidad a la fuente: “A pesar de la importancia que hemos concedido a tener una idea formada sobre los temas que se quieren abordar, y en qué orden vamos a plantearlos, debemos encarar la preparación de estos en forma provisional. El entrevistador debe ser ante todo flexible” (Plano: 2003: 6).

Teniendo en cuenta las apreciaciones anteriores, la tesis aborda dos historias de vida de personas -hombre y mujer, cuyas edades oscilan entre los 17 y 45 años- desplazadas de barrios periféricos por la acción de grupos delincuenciales, hacia otros con similares condiciones -siendo ésta una característica del fenómeno del desplazamiento intraurbano, como se podrá observar más adelante.- En estas Historias de vida, la víctimas narran sus trayectorias personales en un contexto social determinado, que permite analizar sus experiencias a la luz de la información obtenida de otras fuentes indagadas sobre el fenómeno del desplazamiento forzado intraurbano.

La historia de vida del joven de 17 años puede ser comprendida desde una doble dimensión del desplazamiento intraurbano. La primera, dada por su pertenencia a una pandilla barrial cooptada por una organización criminal

que lo sitúa como generador de desplazamientos junto a otros jóvenes allí agrupados. Y la segunda refiere a su condición de víctima de la problemática, al ser desplazado junto a su familia. Además, su trayectoria de vida expone vínculos con el conflicto armado, pero también demuestra características de la violencia urbana, relacionadas con un contexto de carencias y exclusión sistemática que lo habrían llevado a integrar una pandilla, lo que podría interpretarse como un acto de transgresión hacia esa condición estructural de privaciones.

Entretanto, la historia de vida de la mujer de 45 años expone otras dos dimensiones del problema, pues ha sido afectada por un doble desplazamiento: el primero, producido desde el campo hacia las ciudades por causa del conflicto armado, visibilizado por el Estado a partir de la producción de cierta legislación como la ley 387 y la Ley de Víctimas 1448. El segundo es el desplazamiento intraurbano en la ciudad de Cali, causado por la violencia ejercida por pandillas barriales y bandas criminales. También, su trayectoria de vida, en especial a partir de su último desplazamiento, pone en evidencia la revictimización a la que fue expuesta por parte de una de las entidades estatales encargadas de ejecutar la política pública dispuesta para atender la problemática, cuestión que esta tesis tematiza en el capítulo III. Este hecho tomado como analizador, posibilita problematizar los alcances de dicha política para hacer frente a la vulneración de derechos de las personas afectadas por el desplazamiento intraurbano en la ciudad.

Ambas experiencias y la información aportada por otras fuentes primarias a través de entrevistas semiestructuradas también permiten exponer y analizar estrategias alternativas a la respuesta estatal, desplegadas por las personas afectadas para afrontar los impactos generados por la problemática analizada.

CAPITULO I

DESPLAZAMIENTO FORZADO INTRAURBANO: UN PROBLEMA SOCIAL

I.1.- Caracterizaciones sobre Santiago de Cali y el distrito de Aguablanca⁷.

Santiago de Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca, ubicado al suroccidente de Colombia, sobre la costa pacífica. La ciudad se constituye como la tercera más importante del país, después de Bogotá -capital de la República- y Medellín, debido a que se encuentra en una de las áreas de mayor desarrollo económico y expansión demográfica del territorio nacional. Actualmente, según estimaciones del DANE -Departamento Administrativo Nacional de Estadística, responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia- (DANE, 2010)- Cali alberga a 2.319.684 habitantes aproximadamente, de los cuales el 26% se reconocen como pertenecientes a la etnia afrocolombiana, lo que la instala como la ciudad con más población afro de Colombia y la segunda con mayor presencia afro en Latinoamérica (Alcaldía de Santiago de Cali, 2013). Además, teniendo en cuenta el registro poblacional, es importante señalar algunos aspectos que dan cuenta de algunas dimensiones de las dinámicas de la ciudad. En cuanto a la esfera económica, las actividades de industria y comercio son las principales aportantes de capital para el desarrollo de Cali, sobre todo en materia de infraestructura; sin embargo se registran niveles de pobreza que oscilan entre el 25 y 26% y una tasa de desocupación del 13,5% para el año 2014. En materia educativa, la tasa de analfabetismo alcanza el 6%, mientras que la del promedio de otras ciudades principales del país es de 4.9%.

La división territorial de la ciudad se delimita por la existencia de 22 comunas, las cuales albergan a un total de 250 barrios y alrededor de 200

⁷ Ver anexos, mapas de Santiago de Cali y el distrito de Aguablanca.

asentamientos irregulares⁸ que han expandido los límites territoriales de la ciudad. Además de ello, esta división es complementada por la estratificación socio-económica que configura a la ciudad en 6 estratos según las condiciones de vivienda y terrenos aledaños que permitan reflejar calidad de vida, siendo 1 el más bajo y 6 el más alto. En este sentido, de acuerdo al censo realizado por el DANE en el año 2005, no existen muchas diferencias al interior de las comunas en cuanto a su estratificación, un ejemplo de ello se manifiesta en la concentración del estrato 1 en las comunas 1, 14, 20 y 21, ubicadas al oriente de la ciudad constituyendo uno de los sectores más deprimidos, vulnerables y con mayor presencia de asentamientos irregulares (Alonso C, 2007) ; aspectos que representan factores fundamentales para analizar las dinámicas de violencia en la ciudad y que tienen incidencia directa con el fenómeno objeto de investigación en este trabajo, el desplazamiento forzado intraurbano, por lo que se profundizará en ellos más adelante.

Procurando una breve reseña de la historia de Santiago de Cali, se encuentra que la ciudad, a comienzos del siglo XX, manifestó un incremento poblacional debido a las migraciones provenientes del sector rural del departamento del Valle, en especial de la zona norte, y de otros departamentos como Caldas, Antioquia, Chocó y Nariño, debido al crecimiento industrial que experimentaba la ciudad, sobre todo hacia la década del veinte, lo cual resultaba atractivo para las personas migrantes en búsqueda de mejores oportunidades de vida, quienes en gran número arribaron a sectores periféricos de la ciudad adquiriendo lotes para construir viviendas a muy bajo costo. Sin embargo, muchas de estas ventas se realizaron de manera fraudulenta de modo que, al verse desposeídos, estos grupos de personas empezaron un proceso de invasión en zonas pantanales, aledañas a un sistema de lagunas denominado Aguablanca

⁸ Los asentamientos informales o invasiones son instalaciones de vivienda en áreas libres o baldías de carácter público o privado, no aptas para ser pobladas, según disposición del Plan de Ordenamiento Territorial, ya que en su mayoría no disponen de las condiciones idóneas en materia de suelos para implementar la infraestructura básica para otorgar servicios (como energía, acueducto, alcantarillado, pavimentación de vías, entre otros aspectos); y en otros casos corresponden a terrenos considerados de alto riesgo para ser habitados (García, 2006)

(Urrea Giraldo & Murillo Cruz, 1999), nombre con el que sería denominado el sector más adelante, y otras zonas ubicadas en los alrededores del río Cauca⁹.

Estos acontecimientos marcaron el inicio del proceso de poblamiento de la zona, que continuó en constante crecimiento debido a la expansión de la ciudad y a la llegada de más foráneos. En este sentido, finalizando los años 40" se registró otra oleada importante de migrantes debido a la coyuntura social derivada del conflicto bipartidista entre Liberales y Conservadores que registró sus picos más altos de violencia, hasta ese entonces, tras el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán¹⁰ en el año 1948. Esta oleada, en su mayoría proveniente del Pacífico colombiano, marcaría paulatinamente los rasgos socio-culturales que caracterizan al distrito de Aguablanca hoy: esta región de Colombia alberga a la mayor cantidad de personas pertenecientes a comunidades negras o afrodescendientes, fenómeno que se rastrea desde el periodo colonial, puesto que los colonizadores españoles insertaron a los africanos esclavizados en estas zonas específicas por ser las que aglutinaban la mayor cantidad de minas de oro, de modo que los esclavizados eran empleados como mano de obra para la explotación del metal precioso en estos territorios que actualmente conforman los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, los cuales concentran el 44% de la población afrocolombiana del territorio nacional (DANE, 2007).

Durante buena parte del siglo XX, las tierras aptas para el cultivo del Distrito de Aguablanca fueron propiedad de hacendados dedicados al cultivo de arroz, frijol, maíz, entre otros productos, hasta la reforma administrativa de Santiago de Cali en el año 1988 que, por factores que serán expuestos a continuación, reconoció a varias zonas del sector como barrios en condición de regularidad. Sin embargo, antes de dicha reforma y también después de ella, Aguablanca se ha caracterizado por un proceso de urbanización carente de planeación puesto que a los asentamientos instaurados por los migrantes se debe añadir la venta a bajo

⁹ El Río Cauca es la segunda fuente hídrica más importante de Colombia. Atraviesa los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Antioquia, Sucre y Bolívar.

¹⁰ Sobre este aspecto se profundizará sobre algunos elementos de este periodo denominado por la historiografía como La Violencia, dada su importancia para comprender los fenómenos desencadenados de esta coyuntura y sus mutaciones en otros tipos de violencia, como la urbana, fundamental para analizar el contexto en el que se da el desplazamiento intraurbano.

costo de predios no aptos para la construcción de vivienda por ser humedales o pantanales –como ya se dijo- incluso por parte de funcionarios públicos y la continuación de urbanizaciones piratas (aspecto al que ya se hizo mención, referido a la venta fraudulenta de lotes por personas no propietarias que se hicieron pasar por dueñas de los terrenos). Complementario a lo anterior:

a finales de los años sesenta del siglo XX, producto de un primer proceso de migración interna en la ciudad, debido a la falta de alternativas de vivienda para amplios sectores sociales que se concentraban en inquilinatos del centro y los bordes de la ciudad se generó una significativa expansión de la frontera urbana copada por barrios populares que fueron paulatinamente potenciados por el fenómeno de las colonias arraigadas, a partir del desplazamiento forzado y la migración regional procedente en su mayoría de Pacífico y el suroccidente colombiano. (González Bolaños: 2012: 13).

Tomando en cuenta los factores mencionados, referidos a las formas paulatinas de poblamiento del Distrito, y debido a la presión generada por estos movimientos de numerosos grupos de personas en busca de techo, organizados -varios de ellos- en redes comunitarias reivindicando permanentemente y a través de diversas formas de movilización su derecho a la vivienda, apoyados por otras organizaciones de base y religiosas, desde las entidades oficiales del municipio se empezó un proceso incipiente de reconocimiento de varios de los asentamientos de Aguablanca como parte de la ciudad. Estos procesos de regularización de los asentamientos informales se inscriben dentro del marco legal aportado por la Constitución de 1991. Al respecto, Clichevsky menciona que Colombia cuenta con una de las disposiciones legales más avanzadas en la región con relación a que el Estado debe promover y garantizar el acceso a la vivienda digna, reconociendo y regulando las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos (2006: 24). Sin embargo es preciso subrayar que este poblamiento, en los años setenta se dio en medio de condiciones muy difíciles para la población puesto que se fueron desarrollando construcciones en lotes que no contaban con

los servicios públicos básicos, obligando a los habitantes del sector a alumbrar con velas, hacer filas para extraer el agua de aljibes o de mangueras provenientes de carro tanques, sin zonas verdes ni otros espacios comunitarios, ausencia de vías pavimentadas por lo que los medios de transporte frecuentes eran camperos o carretillas aladas por las mismas personas o en el mejor de los casos por animales de tracción. (González Bolaños, 2012)

Partiendo de las condiciones descritas que atravesaron el poblamiento y expansión de Aguablanca, acompañadas de la movilización constante de la comunidad, ese incipiente reconocimiento por parte de las autoridades municipales derivó en el acogimiento de la política nacional denominada *vivienda de interés social*, a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, como mecanismo para frenar la ocupación informal del territorio y posibilitar el acceso a la vivienda por parte de sectores empobrecidos a través de subsidios (Chiappe de Villa, 1999, pág. 6), situación que posibilitó el mejoramiento de las vías de comunicación, acceso a servicios públicos y cierta presencia de instituciones oficiales a través de puestos de policía, centros médicos, escuelas, etc. Pese a ello, resulta de vital importancia para comprender la problemática del desplazamiento intraurbano enmarcada en un escenario conflictivo que hace parte de la cotidianidad de Aguablanca, que el sector continúa siendo objeto de exclusión marcada y sistemática: el 59.4% de los asentamientos de estrato socioeconómico 1 se encuentra en Aguablanca, al igual que el 43% de los clasificados dentro del estrato 2 y sólo un 5.8% pertenece al estrato 3. Sumado a ello:

En el censo del 2005 se hizo una pregunta que intentaba indagar por las condiciones de privación de alimentos, al respecto se encontró que de cada 1000 habitantes del Distrito 68 habían padecido hambre, esto es, 43.216 personas no habían podido comer por falta de dinero (...) la demanda de educación básica y media se concentra en este sector del oriente de la ciudad debido a la gran magnitud poblacional infantil, adolescente y juvenil, y que a su vez el mayor déficit de infraestructura pública de educación se sitúa en el Distrito de Aguablanca, además de

la débil oferta de educación especial de extra-edad, educación de adultos, técnica, tecnológica y superior. Todos estos aspectos generan una gran problemática de expulsión de la escuela de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que pasan a formar cuadros que atentan contra la convivencia, en pandillas juveniles y también, en ocasiones, llegan a formar parte de agentes ilegales y grupos de violencia urbana altamente letales (González Bolaños, 2012: 13).

En síntesis, este breve recorrido sobre características generales de Santiago de Cali y sobre la formación de algunos asentamientos en la ciudad como resultado de acontecimientos y procesos históricos, es fundamental para entender la conformación de uno de los sectores más importantes de la ciudad: el Distrito de Aguablanca. Dicha importancia reside en varios aspectos: el sector concentra al 30% del total de la población de Santiago de Cali, cerca de 700.000 habitantes en su mayoría afrocolombianos. Del total de esta población, el 7.1% corresponde a personas migrantes producto del desplazamiento rural-urbano provenientes principalmente de la costa Pacífica colombiana¹¹, cifra que constituye al Distrito como el sector de Cali donde reside la mayor cantidad de desplazados por el conflicto armado en la ciudad, según González Bolaños (2012) aproximadamente el 80% del total de la población en condición de desplazamiento reside en este sector, y lo que resulta más importante para los fines de este trabajo, registra altos índices de desplazamiento intraurbano en el marco de la violencia urbana, escenificada en la acción de las pandillas barriales y también- como se podrá observar en una de la historias de vida- dicha acción se encuentra ligada a las actividades delictivas de las denominadas Bandas Criminales (Bacrim), quienes ostentan nexos con actores del conflicto armado interno.

¹¹ Según la personería de Cali, en el municipio residen 154.489 desplazados aproximadamente, información basada en los datos suministrados por el registro único de población desplazada (RUPD) y por la unidad para la atención y reparación integral de las víctimas (Unidad para la atención y reparación integral de las víctimas., 2015)

I.2.- Conflicto armado en Colombia: su incidencia en las dinámicas de poblamiento en Cali.

El estudio de la violencia en Colombia reviste gran complejidad y un abordaje de diferentes líneas de investigación para comprender la diversidad de matices que comprende este fenómeno. No en vano, ha sido el principal objeto de estudio que comprende la historia reciente del país por parte de las ciencias sociales. A propósito del actual proceso de paz en la Habana entre la guerrilla de las Farc-Ep (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia- Ejército del pueblo) y el gobierno nacional iniciado en el año 2013, un grupo de intelectuales nacionales que hacen parte del Centro de Memoria Histórica, fue designado para conformar la comisión histórica del conflicto y sus víctimas con el objetivo de retomar los estudios sobre la violencia para reelaborar y profundizar en las explicaciones sobre las causas que dieron origen a este fenómeno que aún perdura.

De acuerdo con ello, la historiografía colombiana -representada por académicos como Renan Vega- ha consensuado que, a partir de la muerte del candidato a la presidencia por el partido liberal Jorge Eliecer Gaitán -que da inicio al periodo denominado como La Violencia bipartidista- se establece el origen del conflicto armado contemporáneo¹², cuyo punto de inflexión estaría marcado por el surgimiento del grupo guerrillero Farc-Ep, quienes, como se dijo anteriormente, están siendo partícipes de un proceso de paz con el gobierno nacional en búsqueda de lograr una salida política negociada al conflicto armado. Este punto de partida, según Fals Borda y otros autores, debe leerse como una consecuencia de diferentes fases de transición política que trajeron consigo cambios en las formas de organización política y económica, jalonadas por los partidos políticos

¹²Resulta pertinente hacer las siguientes aclaraciones sobre los términos “violencia” y “conflicto armado”. En este sentido no todos los investigadores concuerdan en referirse a las confrontaciones derivadas desde el asesinato de Gaitán hasta la actualidad como **violencia**. El historiador Marco Palacios afirma al respecto que dicho termino debe centrarse en el periodo de hostilidades ente el partido conservador y liberal desde 1948 hasta 1958 cuando es creado el Frente Nacional, entendiéndose este último como una coalición política en la que ambos partidos se repartían el poder cada cuatro años. El termino conflicto armado sería entonces el más apropiado para designar la guerra desatada a partir de la misma fecha en la que es asesinado Gaitán, abarcando el surgimiento de las Farc-Ep, el EPL, ELN, etc. y los escuadrones paramilitares y que continua vigente hasta hoy (Palacios, 2012: 25)

tradicionales -Liberal y Conservador-; situación que a su vez tuvo como trasfondo un reacomodamiento en las formas de desarrollo del Estado acorde a factores internos y especialmente externos, concernientes a políticas internacionales que incidieron en dichas fases de transición política. (Guzmán C, Fals Borda, & Umaña Luna, 2005)

Es decir, el conflicto armado en Colombia tiene sus orígenes en los rezagos de la violencia bipartidista, a partir de la cual campesinos afiliados al liberalismo radical en primera medida y simpatizantes de corrientes comunistas -que no vieron resueltas sus demandas sociales encontrando además resistencia por parte del establecimiento para ejercer desde la legalidad oposición política y protesta,- deciden formar repúblicas independientes, como el caso de Marquetalia (departamento de Tolima). La respuesta militar por parte del gobierno a estas repúblicas tildadas de “separatistas” a través de la toma o asalto a Marquetalia en el año de 1958 impulsó el levantamiento en armas de los defensores del proceso campesino en la zona, que más adelante se agruparían bajo el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)¹³, constituido oficialmente el 1964 bajo un programa político influenciado por la revolución cubana y la doctrina marxista-leninista. (Castro Lee, 2005, pág. 46) Después surgirían otros grupos subversivos como el EPL, ELN y M-19, caracterizados por la construcción de programas políticos inspirados en la combinación de todas las formas de lucha para obtener el poder y, entre otros aspectos, generar mayor equidad con respecto a la sistemática desigualdad en la acumulación de riquezas, expresada con mayor intensidad en las zonas rurales del país.

Las mencionadas políticas internacionales correspondieron a la implementación de un modelo económico capitalista en el país, donde primara el desarrollo industrial sobre la base del mercado de tierras, de modo que la tenencia de éstas constituyó un factor esencial en todos los ámbitos del funcionamiento del país y de igual manera resulta un elemento de análisis fundamental para entender las dinámicas del conflicto armado. Sobre este aspecto, en el informe de la comisión histórica del conflicto para el proceso de paz se afirma que:

La preocupación en torno a esta guerra ha sido motivada en gran parte, por las magnitudes de víctimas humanas producidas pero también han recibido atención las confrontaciones alrededor de los “proyectos de sociedad” asociados al conflicto, en los cuales están involucrados profundas divergencias en torno al acceso y el aprovechamiento de la tierra. Es un tema sobre el cual existe consenso entre quienes han investigado el proceso, como “factor desencadenante” del conflicto social y armado. Con estas confrontaciones han estado asociados fenómenos como las usurpaciones frecuentemente violentas de tierras y territorios de campesinos e indígenas, apropiaciones indebidas de baldíos de la nación, imposiciones privadas de arrendamientos y otros cobros por el acceso a estas tierras, en no pocas ocasiones con el apoyo de agentes estatales (Fajardo: 2014: 4).

En este sentido, señala el mismo informe, el Estado ha privilegiado históricamente la acumulación de tierras por parte de hacendados o terratenientes, excluyendo la posibilidad del acceso a la tierra por parte de los pequeños propietarios, promoviendo inclusive dentro del periodo de conflicto armado situaciones de despojo a través de escuadrones paraestatales o paramilitares, acción de la que no se encuentran exentos los movimientos guerrilleros que también han practicado el despojo con fines, por ejemplo, de utilizar las parcelas para la siembra de cultivos ilícitos, como parte de la actividad del narcotráfico. Estas situaciones desencadenaron uno de los matices -o consecuencias si se quiere- del conflicto armado colombiano: el desplazamiento forzado del que han sido víctimas habitantes de las zonas rurales del país por parte de los actores armados al margen de la ley.

Interesa para este trabajo aportar algunos apuntes sobre este fenómeno, pues ha incidido de forma determinante en la conformación de asentamientos en las periferias de la ciudad de Cali, especialmente en el sector en el que se centra la investigación por ser el escenario donde tienen lugar las historias de vida, el distrito de Aguablanca.

I.3 Desplazamiento forzado en contextos de violencia.

Analizar el desplazamiento forzado para intentar explicarlo supone acoger diferentes dimensiones de orden político, económico, geográfico (en cuanto a la existencia de factores que hacen que se presente mayor número de desplazamientos en determinadas zonas del territorio nacional) y social en contextos específicos. Aun así, en la bibliografía sobre el tema se pueden encontrar diferentes posiciones con respecto al papel del desplazamiento como tal, como por ejemplo sí éste se puede caracterizar como el efecto de un problema de violencia, o resulta más bien un mecanismo para lograr ciertos fines en un panorama más amplio de intereses, como el avance de megaproyectos en las zonas rurales o el proceso de urbanización-modernización en zonas urbanas, teniendo como común denominador el problema de la tenencia de la tierra en el marco del sistema capitalista (Ospina Gómez & Zapata hoyos, 2004, pág. 12). De modo que el tema se ha convertido en objeto de estudio y constante debate en el que participan tanto las organizaciones comunitarias conformadas por víctimas del desplazamiento, como círculos académicos e instituciones oficiales¹⁴.

La problemática del desplazamiento forzado, en relación con el conflicto armado en Colombia ha marcado la historia reciente del país, especialmente desde la década de los ochenta hasta la actualidad. Aunque bien puede precisarse que los fenómenos de desplazamiento han estado presentes en diferentes periodos del acontecer de la vida nacional, sobre todo en momentos coyunturales donde la violencia se maximiza, como el caso de La guerra de los mil días. La violencia bipartidista de mitad del siglo XX, entre otros sucesos¹⁵.

¹⁴ Para complementar la información anterior se puede revisar el informe *“El reto ante la tragedia humanitaria del desplazamiento forzado: reparar de manera integral el despojo de bienes”* de la Comisión de seguimiento a la política pública sobre el desplazamiento forzado, donde se expone que aproximadamente 5,5 millones de hectáreas (más 98 pertenecientes a la titulación de propiedades colectivas realizadas a grupos étnicos) han sido objeto de despojo en el territorio nacional por parte de grupos armados al margen de la ley.

¹⁵ Básicamente, ambos sucesos -La Guerra de los mil días y el periodo conocido como La Violencia- respectivamente, se desencadenaron por conflictos de poder entre los dos partidos tradicionales en la historia de Colombia: el Partido Conservador y el Partido Liberal, los cuales terminaron en enfrentamientos armados, siendo el último el de mayor duración. Para profundizar

De acuerdo a lo anterior, la temporalidad a la que se hace mención al inicio está ligada específicamente a la aparición de grupos denominados de “autodefensa” (mejor conocidos como paramilitares) cuyo objetivo era realizar acciones contrainsurgentes, es decir, frenar las acciones de los grupos guerrilleros y acabar con sus estructuras. Acorde con ello, la acción de los grupos armados ilegales (guerrilla y paramilitares) y legales (ejército nacional) se ha desarrollado mayormente en los espacios rurales del territorio colombiano generando olas de desplazamientos masivos de la población campesina y perteneciente a grupos étnicos hacia cabeceras municipales y ciudades capitales, derivando en el suceso que se conoce como desplazamiento forzado rural/urbano e incidiendo en los procesos de poblamiento de las zonas periféricas de los centros urbanos.

Sin embargo, a partir de mediados de la década del ochenta y durante los años noventa, la violencia en Colombia debe ser redefinida teniendo en cuenta la fuerte influencia del narcotráfico cuya aparición en el país se remonta hacia mediados de la década del setenta. La importancia que tiene este fenómeno para comprender la vida nacional, desde su aparición hasta la actualidad reside, entre otras cosas, en que el poder económico proveniente de esta actividad ilícita logró penetrar y socavar los cimientos del ordenamiento del Estado e incluso de la sociedad misma. Además derivó en el surgimiento de nuevas estructuras armadas ilegales para “garantizar” la producción y la distribución de narcóticos, especialmente de cocaína: “la violencia actual se incrementó a partir de 1985 cuando el narcotráfico y sus secuelas se hicieron más evidentes con sus recursos y sus procedimientos violentos, consolidándose como un actor más del conflicto.” (Castro Lee, 2005: 55).

Dentro de este panorama, el narcotráfico se instaló como un negocio con altísimos dividendos, por lo que tanto guerrillas como paramilitares vieron en éste un mecanismo para financiar sus guerras. De manera que, primero, la situación de violencia se agravó en las zonas rurales debido a los conflictos por el control de la

sobre el tema ver: Caballero Calderón, Lucas Klim. *Memorias de la guerra de los mil días*. Colombia, Aguila Negra, 1939. Y Fals Borda, Orlando; Gusmán Campos Germán; Umaña Luna, Eduardo. *La violencia en Colombia* (Vol I, Vol II). España, Taurus, 1962.

tierra, en este caso utilizada para sembrar hoja de coca, marihuana e instaurar rutas de exportación, lo cual agudizó el desplazamiento forzado; y segundo, dicha violencia se expandió hacia las zonas urbanas para desestabilizar la institucionalidad y ganar territorio para traficar y establecer puntos de expendio de narcóticos en sectores deprimidos de las ciudades.

Específicamente, el sector de Aguablanca, como se mencionó con anterioridad, en los últimos cuarenta años se ha ido forjando a través de las múltiples olas de migrantes provenientes de los departamentos que componen la región Pacífico de Colombia, expulsados de sus territorios por las vicisitudes del conflicto armado y el narcotráfico, y obligados a incorporarse –también a la fuerza– en las dinámicas de la urbe caleña. De este modo, han aportado identidades atravesadas por la preeminencia de la cultura afrocolombiana y la remembranza de una vida campesina en los campos, en la selva, en los ríos que se choca con una realidad inmediata en la que, en su calidad de desplazados y desposeídos de su tierra, deben buscar la supervivencia. Contemplando este panorama, los nuevos integrantes de la ciudad se han ido estableciendo en el Distrito de Aguablanca y otras zonas periféricas, conformando asentamientos humanos de desarrollo incompleto ante la imposibilidad de obtener una vivienda en barrios conformados dentro de la planeación de la ciudad.

Lo que interesa ponderar es que los factores derivados del conflicto armado y del narcotráfico, ligados en apariencia a diferentes motivos (en apariencia porque estos fenómenos encuentran relación en problemas estructurales como la distribución inequitativa de la tierra, del PIB, etc.), ya no convergen sólo en las zonas rurales, sino que por el contrario se han ido prolongando hacia los centros urbanos, incluso los más importantes del país, entre los que se encuentra Santiago de Cali. La ciudad sufrió un crecimiento acelerado en los años setenta debido al proceso de industrialización que se extendía por las principales ciudades del país y a la inyección de capital proveniente del narcotráfico. A partir de entonces Cali –y el valle del Cauca en general– ha sido epicentro de actividades sujetas a este negocio ilícito, hecho que, sumado a la recepción de grandes olas de desplazados, hace de la ciudad un espacio de confrontación.

Esta situación, ligada a los problemas sociales ya existentes en la ciudad, forjaron otro tipo de dinámicas y formas de relación marcadas por la violencia, que se evidencian en ciertos sectores o barrios de la localidad, especialmente en el distrito de Aguablanca: formación de pandillas, presencia de miembros de guerrillas y paramilitares, incursiones de policía y ejército, se encuentran entre los elementos que están generando un desplazamiento forzado diferente del que se hizo mención anteriormente y al cual se le ha denominado como intraurbano. Aunque este no es un fenómeno reciente en el país, se está incrementando en varias ciudades, según la hipótesis que manejan las autoridades, debido a una registrada intensificación de la violencia atribuida a la reorganización de los desarticulados carteles de la droga junto con la desmovilización de grupos guerrilleros y, en mayor medida, de grupos paramilitares que han vuelto a rearmarse en estructuras al margen de la ley denominadas BACRIM (bandas criminales), con el fin de continuar llevando a cabo la actividad del narcotráfico. Estos procesos han impactado en las ciudad a través del establecimiento de centros o zonas de microtráfico de estupefacientes a cargo de pandillas juveniles, con las que han consolidado alianzas para tal fin y que operan en los sectores donde se ejerce la actividad, por lo general, ubicadas en barrios de estratos socioeconómicos 1 y 2, catalogados como “de alto riesgo” por el grado de vulnerabilidad al que están expuestos sus habitantes por los índices de violencia, carencia de servicios públicos y redes de infraestructura, entre otros factores característicos de las zonas marginadas de la ciudad.¹⁶

Dentro del marco de los aspectos anteriores, resulta necesario señalar la relación existente entre el conflicto armado nacional y el desplazamiento intraurbano en la ciudad de Cali, la cual:

¹⁶ Dichas hipótesis no hacen parte de algún informe oficial, sino de comunicados realizador por representantes de la policía nacional y la personería de Cali a medios de comunicación. El diario El País emitió dos artículos titulados “Policía advierte que en Cali el microtráfico es disputado por 24 grupos” (Redacción de El País, 2013) y “Urabeños y rastrojos controlan pandillas en Cali” (Redacción de El País, 2013). En ambos se asegura que las investigaciones de la policía sobre el microtráfico en Cali han arrojado que bandas criminales como “los rastrojo” y “los urabeños” controlan un gran porcentaje de las pandillas en los barrios de sectores periféricos de la ciudad, grupos a los que se le atribuyen extorsiones, expendio de droga, hurtos y homicidios, situaciones que se encuentran dentro de las principales causas de desplazamiento de la población que habita estos sectores hacia otras partes de la ciudad.

ha sido escenario de factores de violencia ligados al conflicto armado interno como la presencia de milicias de la guerrilla en sus sectores aledaños, la influencia de estructuras armadas pos-desmovilización de las AUC y el incremento de grupos delictivos que son cooptados por los grupos armados ilegales, situación que ha mantenido en un nivel alto los índices de violencia y afectación sobre la población, particularmente de aquella ubicada en las zonas hondamente vulnerables donde se concentran los mayores índices de pobreza y de presencia de víctimas de la violencia -bien sea afrodescendientes, indígenas o campesinos provenientes de otras zonas del suroccidente del país, como Valle del Cauca, Chocó, Cauca, Nariño y Putumayo- (Personería municipal de Santiago de Cali, 2015: 4).

En consecuencia, el desplazamiento forzado intraurbano puede interpretarse entonces como

el hecho victimizante de mayor impacto dentro de las expresiones urbanas del conflicto armado en Colombia, que se alimenta tanto de las condiciones endémicas de pobreza y fractura social en los barrios marginales como de las expresiones de la violencia en las ciudades y de los intereses estratégicos de los grupos armados por establecer economías ilegales. El desplazamiento intraurbano no es simplemente la consecuencia del accionar y las disputas entre los grupos armados sino que también funciona como método directo encaminado a expulsar a la población de un territorio que se considera estratégico (CODHES: 2013: 22)

CAPITULO II

DESPLAZAMIENTO FORZADO, POLITICAS SOCIALES Y TRABAJO SOCIAL: ENTRAMANDO CONCEPTOS

El desarrollo analítico que aquí se presenta procura explicitar el entramado de categorías conceptuales que permiten comprender y explicar la problemática del desplazamiento forzado intraurbano. La complejidad de los procesos implicados en esta forma particular de violencia, impactan en las realidades regionales, locales, periféricas, que requieren ser leídas teóricamente, reconociendo la diversidad de actores sociales que se constituyen desde estos lugares en temporalidades específicas. En consecuencia, se vuelve imperativo sustentar estos procesos en bases epistemológicas que evidencien una criticidad regional -si se quiere- tomando como referencia los tiempos y espacios que se habitan y desde los cuales se construyen identidades, formas de concebir el mundo y proyectos de sociedad. Para ello resultan fundamentales los posicionamientos de Dussel (2007) sobre replantear la Historia y la Filosofía política, transgrediendo parámetros que parecen inamovibles, como por ejemplo el occidentalismo histórico y filosófico, el eurocentrismo y el colonialismo *teórico-mental* que prevalece aún en la Historia y Filosofía de los países periféricos, desarrollando lecturas carentes de criticidad.

Boaventura de Sousa Santos (2006) presenta un planteamiento similar, denominando a ese predominio teórico occidental en las ciencias sociales como una *razón indolente*, a la que cuestiona al considerársele única, exclusiva, absoluta, obviando la existencia de una multiplicidad de saberes que dan cuenta de “la riqueza inagotable del mundo”, que a su vez manifiesta “una diversidad epistemológica inagotable, y nuestras categorías son muy reduccionistas” (2006: 20). Si bien estos planteamientos cuestionan el pensamiento colonial y propenden su descolonización a partir de la construcción de una epistemología que emerja desde los saberes diversos de los territorios, de acuerdo con el tema plantado en este trabajo, interesa centrar la atención en estas propuestas en cuanto ofrecen la

posibilidad de subrayar la experiencia empírica de los sujetos invisibilizados, como una fuente de conocimiento valiosa y necesaria, frecuentemente excluida por el discurso institucional-hegemónico que plantea formas de intervenir sobre sus realidades, desconociendo sus imaginarios.

De Sousa propone *La Sociología de las Ausencias* como categoría, a la que define como un procedimiento transgresor por su carácter insurgente, puesto que su objetivo sería mostrar que lo que no existe es producido de tal forma, como algo no existente, de modo que si se le reconoce es para negarlo, para encubrirlo (haciendo alusión al “encubrimiento del Otro” para descartarlo como alternativa ante la realidad hegemónica del mundo (Dussel: 1994).¹⁷ De modo que la tarea de esta sociología sería volver visible lo encubierto, habría que “hacer que lo que está ausente esté presente, que las experiencias que ya existen pero son invisibles o no creíbles estén disponibles; transformar lo ausente en presente. (De Sousa; 2006: 26) Para ello este autor propone la existencia de *cinco monoculturas* construidas por la razón occidental -indolente- que deben ser desmontadas, dando paso a otras alternativas que reivindiquen los saberes basados en las experiencias, iniciativas y movimientos producto de la riqueza social propia de un mundo diverso:

Monocultura del saber, que cree que el único saber es el saber riguroso, eminentemente científico; *monocultura del progreso*, del tiempo lineal, que entiende la historia como un camino de dirección única: por delante va el mundo avanzado, desarrollado; lo demás es residual, obsoleto; *monocultura de la naturalización* de las jerarquías, que considera un fenómeno inscripto en la naturaleza, y por tanto, cree inmodificable las jerarquías por razones de raza, etnia, clase, género; *monocultura de lo universal* como único válido, al margen del

¹⁷ El reconocimiento del “Otro” no siempre supone una acción afirmativa. Así lo vemos cuando Enrique Dussel nos plantea dicho reconocimiento como “El encubrimiento del otro”, cuyo momento histórico se establece a partir de la llegada de los españoles al territorio americano. De modo que, ese reconocimiento del “otro” durante la modernidad se ha sustentado a partir de la negación (es decir, descartando de facto la posibilidad de que el “otro”, que existe y es diferente, pueda ser de entrada igual) y por tanto su invisibilización de forma sistemática (Dussel: 1994)

contexto; lo opuesto a lo universal es vernáculo, carece de validez; lo global toma precedencia sobre lo local; *monocultura de la productividad*, que define la realidad humana por el criterio del crecimiento económico como objetivo racional incuestionable; criterio que se aplica al trabajo humano, pero también a la naturaleza, convertida en objeto de explotación y depredación (Tamayo: 2011).

En este sentido, teniendo en cuenta que el objeto de estudio de esta Tesis es el desplazamiento forzado intraurbano por la acción de pandillas barriales en la ciudad de Cali, éste mismo asume un carácter local y puede ser comprendido de acuerdo a las características propias del contexto en el que se desarrolla y a partir de los imaginarios de quienes son afectados por éste, en contravía de la *monocultura de lo universal*. Asimismo, aludiendo a una posible *monocultura del progreso*, a pesar de la concepción universal sobre la obligatoriedad del cumplimiento de las disposiciones sobre derechos humanos producto de una serie de procesos históricos, el progreso en este sentido no es lineal, puesto que paralelo a estas disposiciones a las que Colombia como Estado social de derecho se ha acogido, se continúan violando derechos fundamentales de las víctimas de este tipo de desplazamiento, en muchos casos, sin la garantía y protección estatal de los mismos.

Por último, la problemática en cuestión ha tendido a ser invisibilizada, encubierta por la institucionalidad al no priorizar de manera oportuna su comprensión a través de la investigación relevando la perspectiva de quienes son afectados, en aras de proponer alternativas eficaces para su intervención. También, dicha invisibilización se hace extensiva al resto de la sociedad que desconoce o es indiferente a este tipo de desplazamiento a pesar de habitar la misma ciudad, por lo cual las dinámicas y formas de vida de los sectores sociales afectados que suelen ser aquellos “otros” marginados histórica y sistemáticamente de los beneficios del progreso económico –de la *monocultura de la productividad*– se tornan ausentes, excluidos del imaginario colectivo, producto de los efectos de ese encubrimiento.

En entrevista con el defensor regional para el desplazamiento forzado asignado para la ciudad, Luis Osorio, éste expresa:

En el tiempo que llevo trabajando aquí, he notado gran indiferencia sobre el tema del desplazamiento no sólo desde el campo hacia los centros urbanos, sino especialmente en el que se da dentro de la misma ciudad por acciones violentas de pandillas en los barrios, porque desde la misma institucionalidad hay carencias, primero que todo en cuanto al reconocimiento de las víctimas, y segundo en cuanto a la puesta en marcha -de forma articulada- de las políticas públicas que aseguren primordialmente asistencia humanitaria a las mismas (...) entonces estamos cayendo en una revictimización del desplazado intraurbano que viene desde las instituciones y que lastimosamente se extiende hacia el resto de la sociedad en la ciudad. (Osorio, L. comunicación personal, julio de 2016)

La no visibilización del problema, la indiferencia, la ausencia de políticas públicas pertinentes, refleja la *monocultura del saber* y dentro de la esfera de *la razón indolente*, puesto que excluye *otros* saberes que permitan reconstruir y comprender la problemática y las experiencias de los sujetos que la han vivenciado. Así pues, esta tesis pretende volver la mirada sobre el desplazamiento intraurbano forzado, motivado por la violencia urbana manifestada en la acción de pandillas barriales en la ciudad de Cali, desde la perspectiva de los actores involucrados: afectados, perpetradores del desplazamiento y funcionarios de entidades públicas, en aras de rescatar de la ausencia y del olvido una realidad que debe interpelar a la institucionalidad, a disciplinas como el Trabajo Social y a la sociedad en general.

II.-1 Conceptualización del desplazamiento forzado intraurbano

La referencia al desplazamiento forzado intraurbano alude a una movilidad que se genera en las grandes ciudades, donde por motivos relacionados con la violencia común u organizada personas y/o familias se ven obligadas a trasladarse desde un sector de la periferia de la ciudad hacia otro con características similares (Instituto popular de capacitación: 1998). Otro modo de comprender este fenómeno es centrando la atención en los casos de desplazamientos urbanos masivos en la ciudad de Medellín, casos en los que organizaciones no gubernamentales interpusieron acciones de tutela para lograr el reconocimiento de las personas afectadas como víctimas de desplazamiento forzoso. En este sentido,

El desplazamiento no puede leerse bajo parámetros rígidos, sino que debe adaptarse a las diferentes circunstancias que existen en el país, y asume que dichas particularidades pueden llegar a variar de una persona a otra tornándose, en algunos casos, como singulares para quien las vive” por tanto el desplazamiento forzado intraurbano se constituye en “el retiro del lugar natural que los desplazados tenían, y la ubicación no previamente deseada en otro sitio. Debido a la coacción injusta de grupos armados” (Atehortúa Arredondo: 2009: 246)

Entretanto, interesa señalar que la mayoría de estudios realizados por investigadores sociales sobre el desplazamiento intraurbano han sido efectuados en la ciudad de Medellín; de los cuales se mencionan a continuación dos de estas investigaciones realizadas en colaboración con la Consultoría para los Derechos Humanos y el desplazamiento, CODHES.

La primera de ellas titulada “*Contexto e intereses del desplazamiento intraurbano en Medellín 2002-2003* (Ospina Gómez & Zapata Hoyos: 2004) fue realizada por estudiantes de sociología de la universidad de Antioquia, en coordinación con la corporación no gubernamental y comunitaria *Convivamos*, ubicada en la comuna 7 del nororiente de Medellín. Es una de las primeras

investigaciones académicas registradas sobre el fenómeno en esta ciudad, que explora los aspectos que se conocían en ese entonces sobre este tipo específico de desplazamiento vinculando este fenómeno con otros similares acaecidos a nivel mundial- y contextualizándolo en Medellín. El estudio instala una mirada sobre la institucionalidad y sobre las comunidades barriales y sociedad civil en general, ahondando su mirada en factores de tipo político, económico y territorial como catalizadores de este tipo de desplazamiento en la ciudad.

De ese modo, las indagaciones abarcan diferentes focos que causan el desplazamiento intraurbano, uno de ellos se enmarca dentro de la esfera del conflicto armado, dentro del cual se atribuyen los desplazamientos en la ciudad de Medellín especialmente a uno de los actores participantes en el conflicto, a saber, los paramilitares (Autodefensas Unidas de Colombia). En este sentido, el trabajo expone cómo el paramilitarismo tomó determinados asentamientos en la ciudad, denominados comunas, de la mano del Ejército Nacional, quienes en conjunto realizaron operaciones militares en estos territorios (operación “Mariscal, Antorcha, Orión) con el objetivo de combatir a las facciones urbanas guerrilleras, generando cruentos enfrentamientos que terminaban con el desplazamiento en forma masiva de grupos familiares residentes en estos sectores, específicamente en la comuna 13. A partir de estas operaciones, los territorios afectados y todas sus dinámicas poblacionales fueron controlados por los paramilitares, entre los años 2002 y 2005, bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

La urbanización y reconfiguración de la ciudad en relación con los procesos de modernización, como las construcciones de mega-obras como puentes, estaciones del metro, etc., son focos causantes del desplazamiento intraurbano en Medellín, según este estudio. También el fenómeno denominado *gentrificación*, que describe cómo los residentes históricos de los centros de las ciudades o barrios populares resultan desplazados de sus hogares debido a la ejecución de proyectos urbanísticos encaminados a atraer a personas con alto poder adquisitivo es otro factor identificado como causante del desplazamiento. Por último esta investigación concluye señalando que el desplazamiento es un fenómeno estructural, articulado a las dinámicas del sistema capitalista en cuanto a

problemas como la distribución desigual de la tierra, del PIB, la seguridad alimentaria, entre otros factores.

El segundo estudio titulado *Análisis del contexto y la dinámica del desplazamiento forzado intraurbano en la ciudad de Medellín* (Alcaldía de Medellín: 2010), es realizado por un conjunto de entidades adscritas a la alcaldía y al gobierno departamental¹⁸ y puede comprenderse como respuesta a la preocupación de las autoridades locales por la agudización del fenómeno y su impacto en la alteración del orden público y la convivencia en la ciudad. Esta investigación da prioridad tanto al registro de las diferentes características del desplazamiento forzado intraurbano, sus posibles causas, su intensidad de acuerdo al desarrollo histórico, entre otros aspectos; como al seguimiento de las políticas públicas que han sido implementadas para mitigar los efectos de este tipo de desplazamiento. Y a diferencia de la investigación antes citada, presenta el fenómeno como de carácter coyuntural exponiendo las diferentes dimensiones que rodean el mismo en relación con la violencia generada por grupos armados ilegales, especialmente por las redes reconfiguradas al servicio del narcotráfico, después de procesos de desmovilización de guerrilleros que se acogen a programas de reinserción en la vida civil y especialmente de paramilitares. De acuerdo con ello y en relación con las políticas de asistencia a las víctimas, se realiza una crítica a dichos procesos de desmovilización liderados por el gobierno nacional a partir del primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, en el marco de ley 975 de 2005.¹⁹ De modo que, siendo una rearticulación de ex miembros-desmovilizados de una de las partes, estas bandas criminales no fueron consideradas como organizaciones armadas al margen de la ley revestidas de carácter político, como se expone en la ley 418 de 1997, situación de gran impacto

¹⁸ Gerencia para la coordinación y atención a la población desplazada, Unidad permanente de derechos humanos de la personería de Medellín, entre otras.

¹⁹ Conocida como ley de justicia y paz, por no resultar lo suficientemente contundente para contener la reorganización de estos actores armados ilegales y por la falta de apoyo a los gobiernos locales para la implementación de programas de ayuda a los afectados por la acción de dichas redes, específicamente las denominadas por las entidades gubernamentales como Bacrim, caracterizadas según el Concejo de Seguridad Nacional como bandas criminales o grupos de crimen organizado conformados a partir de la reagrupación de miembros del paramilitarismo (Dirección de registro y gestión de información: 2013), actor armado dentro del conflicto sujeto a desmovilización, como se acabó de mencionar, en el año 2005.

porque dejaron por fuera el reconocimiento como víctimas del conflicto armado colombiano a las personas y comunidades afectadas por los delitos de estas bandas, excluyéndolas del marco jurídico para la restitución de derechos de la población víctima de dicho conflicto, destacándose las leyes 387 y 418 de 1997; ley 1448 de 2011.²⁰

Las dos investigaciones resultan importantes en dos aspectos. El primero es que son abordadas desde miradas diferentes; la primera desde la relación entre un sector académico y una organización comunitaria de base en la que se agrupan principalmente víctimas de este desplazamiento; y la segunda es desarrollada por organizaciones gubernamentales: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Bienestar Social y Gerencia para la coordinación y atención de la población desplazada. En ese sentido se puede establecer la intención y los intereses que motivan cada una de estas investigaciones, que no resultan antagónicas necesariamente, pero sí existen diferencias al menos en el primer plano. El segundo aspecto es que en cuanto al campo teórico-metodológico, ambas ofrecen líneas de investigación desde la sociología, la historia y la antropología, articulando métodos cuantitativos como las encuestas y estadísticas sobre población desplazada en el contexto urbano, permitiendo situar qué cantidad de esa población ha podido acceder a las rutas de atención dispuestas para abordar la problemática, y métodos cualitativos como la etnografía, entrevistas y análisis de datos. Además, los estudios mencionados aportan un marco de referencia que permite desarrollar estudios posteriores sobre el fenómeno en otras ciudades.

Retomando las definiciones presentadas sobre el desplazamiento forzado intraurbano, es pertinente mencionar que constituyen esfuerzos para intentar construir el concepto y darle legitimidad, tomando como marco general las

²⁰ En este sentido resulta fundamental señalar que dichas disposiciones en cuanto a excluir del marco jurídico a las víctimas de delitos de estas bandas criminales -aludiendo al desplazamiento rural-urbano y desplazamiento intraurbano- han sido, a partir del 2013, objeto de revisión y replanteamiento por parte de la corte constitucional a través del AUTO 119 de 2013 donde se hace seguimiento a las acciones adelantadas por el gobierno nacional en materia de clasificación y registro de víctimas, como también se disponen mecanismos necesarios para mejorar la atención de la población desplazada a causa de la violencia, incluyendo desplazamientos impulsados por la acción de las Bacrim (Vargas Silva: 2013).

disposiciones teóricas y jurídicas sobre desplazamiento forzado en el contexto internacional y nacional. Este punto resulta de gran importancia puesto que desde entidades gubernamentales se consideraba hace algunos años (2000-2012) que este fenómeno era “reciente” y que este tipo de “migración” no cumplía los cánones para ser reconocida como desplazamiento forzado, y por lo tanto no estaba cobijada por los estatutos existentes para atender a las víctimas de desplazamiento forzoso rural/urbano en Colombia. (Caracol radio: 2010)²¹ Es importante retomar esta concepción junto con los estudios que ya se han adelantado en otras ciudades, para expandir la investigación del problema a otras ciudades (en el caso del presente trabajo, en la ciudad de Cali).

Asimismo, es necesario tomar en cuenta los parámetros que se han fijado desde organismos como CODHES, la Corte Suprema de Justicia y distintos sectores académicos para comprender y explicar el fenómeno, como las diferentes variables que lo causan, de modo que deje de ser comprendido como de carácter meramente coyuntural.

Partiendo pues, del esfuerzo por conceptualizar la problemática y desarrollar investigaciones al respecto en algunas ciudades de Colombia, se reafirma la relevancia de comprender y analizar el conjunto de dimensiones que conforman las diferentes realidades sociales, en especial las latinoamericanas.

De modo que, ante el desafío que representa analizar las problemáticas sociales expresadas en distintas formas de violencia, en este caso escenificadas en el espacio urbano de Cali; este estudio en términos metodológicos, sustenta un diseño basado principalmente en los desarrollos de la antropología social, específicamente en la etnografía. El investigador Gildardo Vanegas Muños ofrece una mirada interesante sobre las distintas manifestaciones de la violencia en la ciudad de Cali a partir de este enfoque investigativo, que prioriza el sentido que los

²¹ En la noticia, el director de la entidad gubernamental Acción social, Diego Molano, reconoce en el año 2010 la existencia e incremento del desplazamiento intraurbano; además lo caracteriza como una situación nueva a la que el gobierno le está prestando atención. Sin embargo en el mismo año, un delegado de la personería de Medellín critica al gobierno nacional “por no reconocer a estos desarraigados como víctimas del conflicto armado, bajo el argumento de que “los responsables (del desplazamiento forzado) son delincuencia común” (Semana: 2010).

habitantes urbanos construyen acerca de la violencia, a partir de sus experiencias cotidianas para intentar comprender las distintas dimensiones del fenómeno dentro del contexto en el que ocurre:

Era la distancia entre el discurso académico y el mundo real en que los “actores” matan y también mueren, hieren y son heridos, amenazan y son amenazados. Era la insatisfacción ante esa mediación volatilizadora de unos conceptos “duros”, en ocasiones difíciles de pronunciar, que daban cuenta de manera muy distante de un fenómeno complicado que logramos abordar con muchas limitaciones. (Vanegas: 1998: 16)

En este sentido, aún cuando se subrayan los ejercicios de corte cualitativo para comprender este tipo de problemáticas, se incluye la mirada etnográfica para entender la complejidad del entramado social que se construye cotidianamente dentro del espacio urbano; procurando visibilizar la voz de los protagonistas de las historias urbanas, portadores de sensaciones e imaginarios. Desde esa posición, se rescata el periodismo investigativo con enfoque social en el país, cuyo insumo principal es el testimonio de estos protagonistas, puesto que, según Vanegas (1998) abre otras posibilidades metodológicas para comprender las múltiples manifestaciones de la violencia, a partir de una perspectiva cultural que reconstruya los relatos de quienes resultan afectados. En este sentido podría decirse que esta propuesta, guarda correspondencia con lo que Boaventura de Sousa (2006) ha denominado *Sociología de las Ausencias*, donde cobra fundamental relevancia la voz de las víctimas para volver visible, no-ausente los impactos del desplazamiento forzado intraurbano en las dinámicas de los diferentes grupos sociales afectados a partir de las experiencias, de los saberes de estos últimos.

II.2. Aproximaciones sobre el concepto de ciudad.

Prosiguiendo con el análisis categorial, interesa puntualizar una conceptualización en torno de “lo urbano,” centrando la atención en *la ciudad*, como un escenario revestido de complejidad en tanto construcción social, está

atravesada por el dinamismo, las contradicciones, las tensiones, las expectativas y proyectos de vida de quienes residen en ella: “la ciudad conjuga opulencia y riqueza, oportunidad y exclusión, violencia, inseguridad y convivencia (...) la selva de cemento es cada vez más agresiva e invivible: injusticia y desigualdad signan los lugares” (Vanegas Muñoz: 1998: 41). Sin embargo, este espacio urbano expresa confrontaciones, pues los sujetos que allí se congregan no viven de la misma manera, ni poseen las mismas oportunidades de inclusión y equidad. Sobre la concepción de ciudad, De Certeau (1997), plantea que esta “se vive de formas muy diferentes, en torno a prácticas en el espacio que remiten a una forma específica de operaciones (formas de hacer)”. Desde lo urbanístico, la ciudad significa pensar en operaciones concretas, que encierran el ideal de un espacio propio, una historia oficial, un sujeto universal, y sobre todo un campo de tensiones entre esa lógica oficial urbana y la pluralidad de sentidos practicados socialmente allí, desde donde se forman *discontinuidades o desviaciones* que constituyen fuerzas enunciatoras que diversifican el espacio, haciendo uso de los símbolos, de los rituales, de las prácticas sociales, corporales y lingüísticas cotidianas, relatos, mitos, narraciones, historias, etc.

Santiago de Cali, referencia empírica de este estudio, puede vislumbrarse como una ciudad caracterizada por la fragmentación, producto de la marginación y la exclusión a la que son sometidos grupos de pobladores rotulados de acuerdo a su condición de desplazamiento y a las características étnicas y culturales, nivel socioeconómico, etc. Es decir, son considerados *parias* de una modernidad que los rezagó por su incapacidad de insertarse idóneamente en el sistema económico, son los “daños colaterales” del progreso (Bauman: 2005).

En el mismo sentido, es posible comprender la exclusión como fragmentación social expresada no sólo en términos clasistas o de una determinada categoría social que genera actores en conflicto por su integración, como fue la característica de la industrialización o de la modernización y reformas agrarias; sino también en concordancia con otras categorías y sectores sociales que generan identidades y acciones colectivas (empresarios, trabajadores, rurales,

urbanos, mujeres, etnias), dividiéndolos en los de “dentro” y los de “fuera” siendo éstos últimos quienes aportan los insumos para la comprensión etnográfica de la violencia urbana desde su cotidianidad (Garreton: 1995). Partiendo de allí, Vanegas Muñoz (1998) resalta en las continuidades y rupturas históricas, las causalidades, los acontecimientos ligados a los contextos sociales, algunos de los factores que impulsan la violencia en la ciudad, entendida como producto de relaciones sociales profundamente asimétricas, con desequilibrios en la disponibilidad y en el ejercicio del poder entre los diferentes sectores sociales.

En sintonía con lo anterior, la exclusión sistemática y la generación de violencia en la ciudad van configurando cultural y económicamente, la existencia de *otras ciudades* dentro de la misma ciudad. El distrito de Aguablanca ejemplifica esa idea de *otredad* donde los *otros* son reconocidos por la sociedad hegemónica a partir de la negación, es decir, no como iguales, sino a través de categorías que determinan jerarquizaciones y fragmentación (Dussel: 1994). Allí donde los barrios de invasión o asentamientos son un panorama normalizado, al igual que las condiciones en las que viven sus pobladores mayoritariamente negros y empobrecidos, numerosos hogares a cargo de mujeres, desplazados desde el campo hacia la ciudad por el conflicto armado, nominados como “los parias, los de afuera,” se registra la ausencia de la acción Estado social de derecho, garantizando el acceso a servicios públicos básicos como salud y educación de calidad. Al respecto, Vanegas Muñoz afirma que:

Al conversar con los pobladores del Distrito se revela el sentimiento de marginación y segregación que la sociedad impone. Se trata de algo semejante a hijos bastardos, despreciados y no pocas veces humillados. La negación se aprecia en la falta de instituciones de educación y en la precariedad de las que existen, en la imposibilidad de alcanzar trabajos dignos, en los empleos precarios que logran y en los estigmas y estereotipos que los marcan (1998: 62).

Así, este panorama de carencias e inestabilidades contribuye a que grupos poblacionales, especialmente de jóvenes que se han criado bajo estas

circunstancias, se vean convocados a pertenecer a bandas o pandillas dedicadas a actividades delictivas como el hurto o microtráfico, no sólo con el objetivo de obtener ganancias económicas, puesto que han quedado por fuera de la estructura productiva de la ciudad modernizada, sino también buscando sobrevivir en un contexto hostil donde la violencia juega un papel fundamental en dichos objetivos. De este modo se genera una práctica simbólica que asegura el reconocimiento de esos territorios como propios de ciertas pandillas, cuyas dinámicas son desarrolladas bajo su control, sus reglas, sus propias leyes, dando lugar a esas *otras ciudades*, que distan de la representación impuesta por los grupos hegemónicos, tal como se observa en la Cali moderna, con pobladores productivos que han tenido acceso a la educación e infraestructura acorde al ideal de progreso.

II.3- El desplazamiento intraurbano como expresión de violencia: sus efectos

En concordancia con los planteamientos expuestos cabe señalar también una referencia acerca de lo que esta investigación entiende por “violencia urbana” y su funcionamiento como catalizador del desplazamiento urbano. Así, es de interés para este estudio desarrollar el concepto de violencia urbana desde una perspectiva etnográfica, teniendo en cuenta que la misma se constituye a partir de los imaginarios de quienes la padecen y también de quienes la ejecutan. Es decir, la violencia urbana tiende a ser comprendida a través de las relaciones sociales y de sus múltiples manifestaciones insertas en la construcción del tejido social que tiene lugar en la ciudad.

Sobre quienes ejecutan este tipo de violencia, se observa desde la óptica de las víctimas y de las instituciones encargadas de hacer seguimiento, que la misma es generalmente protagonizada por grupos denominados *pandillas* -noción que se trabajará más adelante- cuya acción está ligada a actividades por fuera del marco legal y que en la ciudad de Cali se manifiestan principalmente dentro de la

esfera del narcotráfico²², específicamente en la modalidad de microtráfico, que se caracteriza por ser un subsistema del narcotráfico. En ese marco, se proporcionan cantidades determinadas de estupefacientes a las redes de las organizaciones delincuenciales asentadas en las ciudades, que cuentan con una estructura de funcionamiento que va desde el traslado de los narcóticos desde los laboratorios donde se elaboran (frecuentemente localizados en zonas rurales alejadas de la urbe) hasta la ciudad, donde se reparte hacia diferentes puntos donde se empaca la droga con el fin de distribuirla en pequeñas cantidades a los consumidores urbanos. Esta última parte es denominada por las autoridades como *narcomenudeo*, actividad desarrollada en “puntos de venta” establecidos estratégicamente en diversos espacios de la ciudad. Esos puntos de venta también son conocidos popularmente como “ollas”, sitios de expendio ubicados en barrios marginales o asentamientos donde se concreta la transacción (Alvarado, 2013). Estas prácticas son efectuadas por miembros de las organizaciones criminales, según rangos o jerarquías dentro de su organización:

Las bandas tienen toda una estructura logística de alta eficiencia: los que procesan la droga, los campaneros -quienes avisan cuando la Policía se acerca-, los vendedores- cobradores a quienes dotan de armas -, los cuartos de cobro. Sí. Cuartos de cobro. Los cabecillas de las bandas no pierden un solo centavo. Si el vendedor no entrega el dinero completo es llevado a una zona conocida como la “pieza de masajes”. Son pequeños cuartos de tortura en donde se golpea hasta el hartazgo a quien no pague. También, a quien se considere un extraño demasiado sospechoso (Ospina, 2016).

²² Sin dejar de reconocer la existencia de otras violencias que conviven dentro del espacio urbano de Cali, el investigador social Ordoñez Valverde (2016) resalta que a partir del 2002 hasta la actualidad, el narcotráfico se torna en la principal causa de violencia en la ciudad, con un recrudecimiento en los años 2012-2014; violencia manifestada en acciones como sicariato, extorsiones, retaliaciones entre bandas, entre otros factores. El análisis del periodo resaltado por el investigador expone la relación entre la delincuencia organizada y las pandillas de sectores empobrecidos, relación que ha ido transformando la estructura de la violencia urbana, puesto que ésta deja de ser ejercida por las pandillas exclusivamente como reafirmación indentitaria –de la pertenencia al grupo-, demostración de poder marcando un territorio como propio, u otras características simbólicas, para convertirse también en una violencia instrumentalizada por las bandas u organizaciones criminales como vehículo para transitar por el mundo de los negocios ilegales.

Precisamente, el expendio de narcóticos en la ciudad bajo la modalidad de microtráfico y narcomenudeo es delegado por organizaciones criminales a las pandillas juveniles en la ciudad, quienes han establecido dominio territorial sobre determinados sectores de Cali a través de acciones violentas y bajo ese dominio establecen las mencionadas zonas de expendio de narcóticos. Las disputas entre estas organizaciones criminales en la esfera del narcotráfico y especialmente las que tienen lugar en los espacios urbanos entre pandillas por control de territorio para el expendio, son una de las principales causas que generan violencia posicionando a la ciudad como una de las más violentas no sólo de Latinoamérica, sino del mundo.²³

Este conjunto de elementos sobre quienes ejercen la violencia urbana y el contexto en el que esta se da, pueden ser clasificados con base a lo expuesto por el Informe mundial sobre desastres sociales (2010), dentro de las categorías de violencia económica, violencia social y violencia política que tienen como punto de encuentro la ciudad. Cabe aclarar que la violencia se expresa a partir de “acciones que dañan directamente el núcleo básico de derechos que están en la base del desarrollo humano: la vida y la integridad física de las personas” (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD: 2014)

La referencia a los diferentes tipos de violencia permite reconocer que la *violencia económica* hace referencia a las acciones producidas por la desigualdad inherente al sistema económico capitalista, que conlleva a la marginación de un gran sector de la población sumido en la pobreza, lo que dificulta el acceso a oportunidades que permitan movilidad social y económica. La *violencia social* responde al deseo o aspiración de obtener y mantener poder y control en

²³ En abril de 2016, medios de comunicación nacionales como, Caracol radio, los periódicos El País y El Tiempo, hicieron eco de los resultados del informe de la organización civil mexicana Seguridad, Justicia y Paz, donde a partir de la tasa de homicidios se establecieron las 10 ciudades más violentas del mundo, siendo Cali la décima en este escalafón, con una tasa de 64 homicidios por cada 100mil habitantes (Caracol Radio, 2016).

En el informe anual sobre homicidios en la ciudad de Cali presentado por el Observatorio Social, se destaca qué de los 1523 asesinatos cometidos, 507 corresponden a conflictos entre pandillas, ajuste de cuentas delincuenciales entre bandas de crimen organizadas y a tráfico con estupefacientes en pequeñas cantidades –microtráfico- (Observatorio Social, 2016).

determinados espacios sociales como el barrio o la familia. En este caso las acciones de pandillas juveniles o la violencia intrafamiliar constituyen expresiones de este tipo de violencia, junto con actividades relacionadas con la llamada “limpieza social,” donde las organizaciones criminales pretenden establecer algún orden dentro de sus territorios impidiendo otro tipo de delitos bastante comunes, como hurtos. Por último, la *violencia política* alude a disputas por el poder político entre las mismas élites sociales, o entre éstas y grupos alzados en armas al margen de la ley. Además también se manifiesta en las acciones cometidas por representantes del poder institucional, como las fuerzas armadas, en contra de la población civil, o bien cuando el poder institucional representante de la gobernabilidad se torna incapaz de garantizar la seguridad y otros derechos fundamentales a la población (Federación internacional de sociedades de la cruz roja y de la media luna roja: 2010).

Estos tres tipos de violencia se articulan en acciones cometidas en la ciudad con frecuencias determinadas, por diferentes actores. Sobre ello, afirma Vanegas Muñoz (1998) que cuando se hace referencia a la violencia urbana, inevitablemente el principal actor al que se destaca como mayor causante del fenómeno es a las pandillas conformadas por jóvenes, jóvenes pobres, que se involucran en actividades relacionadas con el tráfico de drogas, sicariato, hurto, secuestro, entre otras. Sin embargo, enfatiza en que debe tenerse en cuenta el trasfondo en el que estos jóvenes participan en este tipo de actividades generadoras de violencia: “no se ha reconocido su vulnerabilidad en un medio distorsionado como el nuestro. Los jóvenes y sus conflictos son el síntoma de lo que somos como sociedad. Se les conoce desde afuera, con ideas preconcebidas” (1998:136). De modo que, en un contexto difícil por las carencias y la falta de oportunidades como lo es el Distrito de Aguablanca en Cali, la población conformada por jóvenes es la más susceptible a integrar grupos dedicados a actividades delictivas, no sólo como una vía para generar ingresos monetarios, sino también como una manera de establecer sociabilidades, construir identidad, sobresalir en un medio agreste y transgredir el estatus quo que los ha marginado. Se verá entonces que estas necesidades han sido cooptadas por otros actores

vinculados al narcotráfico, cuyas acciones están ancladas al conflicto armado vivenciado en el país hace décadas.

Ahora bien, si se tiene en cuenta que una de las causantes de esas violencias en la ciudad es el narcotráfico, en las modalidades de microtráfico y narcomenudeo, ejecutado por redes de crimen organizado y pandillas juveniles, dichas acciones no pueden ser explicadas a partir de lecturas lineales. En tal sentido, la mirada antropológica posibilita considerar otros aspectos, al tratar el fenómeno desde perspectivas que interroguen las construcciones sociales que se dan alrededor de la violencia, no desde lo abstracto sino a partir de sus manifestaciones que, en este caso, se focalizan en lo que se reconoce como actos delictivos. Existen múltiples matices a tener en cuenta en las representaciones sobre el delito, de ahí la complejidad a la hora de abordarlo conceptualmente. Sin embargo, en líneas generales y en relación con los planteamientos expuestos, se comprende el delito como un hecho social que “refleja un conjunto de valores, creencias y recursos establecidos para la conveniencia que caracterizan a una sociedad determinada,” que se manifiesta ante situaciones de fractura social. (Fernandez Riquelme: 2012). Cabe aclarar que quienes cometen delitos generalmente toman en cuenta que la relación costo-beneficio sea favorable a la transgresión, por lo cual resulta relevante desplegar una atenta mirada a las prácticas de los sujetos o grupos que deciden transgredir “los sistemas de valores, creencias, formas de socialización y sociabilidad de estos sectores” (Miguez: 2008).

Cabe subrayar que la importancia de visibilizar estos elementos sobre el delito y los que posiblemente conllevan a que se ejecute, radica en la posibilidad de construir interpretaciones que aborden su complejidad, enfocando la atención en la producción de violencia en Cali por la acción de pandillas como factor determinante en los desplazamientos forzados intraurbanos. Por tal razón, interesa indagar la serie de variables que intervienen en estas situaciones para comprender cómo las mismas afectan a sujetos o grupos sociales, a partir de dinámicas relacionales.

Así, el desplazamiento intraurbano viene siendo estudiado en diversos trabajos académicos que sitúan que el escenario por excelencia son los sectores periféricos, los asentamientos irregulares²⁴ o invasiones, conformados por personas empobrecidas que quedan al margen del progreso económico, también personas desplazadas desde el campo hacia la ciudad, que continúan siendo objeto de exclusión sistemática una vez asentadas en estos territorios. De modo que en estos contextos, donde la ausencia del Estado es notoria, existe conciencia de que en el mismo espacio urbano cohabita “otra ciudad” que alberga otras formas de vida que vivencian el progreso y sus beneficios, enmarcándose en los estándares establecidos por la visión hegemónica de la realidad urbana. Ese progreso se torna de difícil alcance para los sectores empobrecidos, por lo que sus transgresiones traducidas en actos delictivos, expresan una manera de alcanzarlos aún desde la ilegalidad.

Ahora bien, como señala Miguez (2008), resulta arbitrario establecer una escala o jerarquización acerca de qué tipo de transgresiones representan delitos más o menos graves para determinados contextos. En este sentido, son interesantes las contribuciones de Kessler (2011) cuando afirma que existen diversas definiciones del concepto, y menciona las características sobre el mismo -coincidentes con las propuestas por varios autores,- a saber: “previsión de lucro, división del trabajo con una práctica continua y organizada jerárquicamente, uso de violencia y amenaza, algún grado de inmunidad política y complicidad con agentes públicos” (2011: 57). De esta forma, sin desconocer la magnitud y el impacto de otro tipo de delitos en el contexto colombiano y especialmente en Cali,

²⁴ los **asentamientos irregulares o asentamientos humanos de desarrollo incompleto** son la representación del crecimiento de la ciudad por fuera de las disposiciones del plan de ordenamiento territorial- POT- desde la perspectiva de la no existencia de una planificación urbana consecuente con variables ambientales, sociodemográficas, etc. Las viviendas ubicadas en estos asentamientos regularmente se localizan en zonas de alto riesgo por la presencia de factores de sismicidad, por inundación o derrumbes, entre otros (...) Son expresiones de tres procesos complejos relacionados: por un lado son manifestaciones de las contradicciones de las fuerzas del mercado y de las fuerzas del Estado; por otro, son resultado de luchas sociales urbanas lideradas por grupos y comunidades ante el Estado. Y en este sentido, las comunidades exigen del Estado, su principal interlocutor a través de procesos de resolución como la negociación, respuestas que les benefician y les garantizan la solución a sus problemas de exclusión y marginación (Uribe Castro: 2011: 171).

interesa centrarse en el narcotráfico como contexto general de la violencia, para ahondar en las articulaciones de las redes que este fenómeno genera -las pandillas- en los barrios vulnerables de la ciudad, específicamente los que se agrupan en el Distrito de Aguablanca.

En este orden de ideas, al definir el concepto de *pandilla* interesa recuperar „la disquisición que hace el Observatorio Social de Cali sobre las pandillas locales, definiéndolas como un grupo de jóvenes que permanecen juntos, construyendo lazos sociales e identitarios que producen un sentido de pertenencia. Estos agrupamientos coordinan acciones encaminadas a transgredir el orden, entendido como las normas y costumbres que regulan a la sociedad; y se encuentran en constante enfrentamiento con otras pandillas. Las acciones que desarrollan abarcan desde el hurto hasta el monopolio de territorios en los barrios (las conocidas fronteras invisibles) ejerciendo principalmente el microtráfico, la venta de armas, y otras extorsiones (Observatorio social, 2014).

De esta manera, las lecturas conceptuales planteadas reconocen el papel de las construcciones culturales que impulsan el delito en los escenarios de la ciudad de Cali, donde la violencia urbana es significativa, protagonizada en gran medida por sectores atravesados por la carencia de condiciones básicas para vivir dignamente. También el “abandono” estatal marca esas dinámicas cotidianas naturalizando los patrones culturales que habilitan la violencia y el uso de las armas:

El papel que cumplieron los grupos armados en los sectores populares y el que desempeñaron organizaciones semejantes (...) se fundamenta en el uso de la fuerza y la coacción y en el abandono total de las posibilidades de construir una ética ciudadana, que incluya entre sus principios la inviolabilidad del derecho a la vida. Las armas y el uso de la violencia se han enraizado profundamente en nuestra sociedad. Guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares, el Estado y sus fuerzas de seguridad y demás grupos armados, han glorificado el ejercicio de la violencia. Las armas han demostrado ser un vehículo importante de poder y son los jóvenes quienes expresan de manera más patética esta situación. La capacidad de generar violencia y el portar armas se

convierten en una importante fuente de reconocimiento y autoafirmación (Vanegas Muñoz: 1998:157).

Siguiendo este razonamiento, la problemática del desplazamiento en Cali se encuentra fuertemente ligada a la cuestión del narcotráfico como dimensión central del complejo entramado multidimensional del conflicto armado colombiano. Ese proceso fue incrustándose en los espacios urbanos, específicamente de las grandes ciudades, con repercusiones contundentes en las dinámicas sociales, principalmente en los espacios periféricos donde residen poblaciones vulnerabilizadas. Esta trama da cuenta de la relación entre violencia urbana-narcotráfico y pandillas, en la que los grupos de delincuencia organizada juegan un papel decisivo en las comunas de Cali donde se registran altos índices de actos delictivos. También resultan de gran importancia las lecturas que vinculan la relación de esos tres elementos con una mutación del conflicto armado nacional, donde si bien el componente político resulta decisivo, el narcotráfico igualmente juega un papel relevante en cuanto a la financiación de las acciones de los actores armados involucrados. Este escenario muestra cómo la consolidación de las bandas encuentra, en el ejercicio de la violencia, una fuente de afirmación y legitimación (...) La violencia y la capacidad para generarla se convierten en un importante vehículo de reconocimiento” (Vanegas Muñoz: 1998: 165)

Como afirma la politóloga Angélica Durán (2014), la explicación de este fenómeno de pandillas en Cali es complejo por la multiplicidad de causas y actores; pero el narcotráfico continúa siendo una constante y quizá el principal generador del mismo, dadas las continuas disputas del crimen organizado²⁵.

Por otra parte, concierne puntualizar que las bandas criminales -Bacrim,- entendidas como organizaciones criminales, se encuentran también articuladas al conflicto armado colombiano, y mantienen relaciones con el paramilitarismo, siendo necesario comprender su funcionamiento en ese marco, y no como componentes criminales aislados, ligados únicamente al narcotráfico.

²⁵ Al respecto Anota Kessler que “la destrucción de los carteles de Cali y de Medellín llevó a un rol creciente de paramilitares en el narcotráfico junto a la emergencia de más de una centena de pequeños grupos especializados cada uno en distintas partes del proceso (Kessler, 2011).

Las Bacrim son consideradas entonces como un fenómeno emergente, a partir del proceso de desmovilización del paramilitarismo (autodefensas unidas de Colombia –AUC) en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, iniciado en el año 2005, a través de la Ley de Justicia y Paz, propuesta por ese gobierno. A pesar de ello, las estructuras de estas organizaciones armadas al margen de la ley no se desmontaron, y continuaron controlando zonas que se han adecuado para el cultivo de coca y marihuana, y rutas para el tráfico de estupefacientes. De modo que:

Muchos son la continuidad de grupos paramilitares. La desmovilización paramilitar fue un proceso calculadamente imperfecto e incompleto. La ausencia de control oficial sobre la desmovilización facilitó que los paramilitares usaran las ceremonias de entrega como dispositivo de escondite de personas y estructuras enteras. De esta manera, lograron que sus reservas estratégicas nunca fueran identificadas (...) Es equivocado utilizar la desmovilización paramilitar para proclamar un quiebre con el pasado y hablar de un fenómeno nuevo. (Reed H: 2011: 2).

Estas descripciones permiten afirmar que las bandas criminales –en tanto fenómeno complejo- han logrado permear las dimensiones económicas, políticas y sociales de grandes centros urbanos, como la ciudad de Cali. Por ello resultan valiosos los aportes de académicos e investigadores sociales y de centros de estudio para comprender no sólo su conformación y funcionamiento, sino también su incidencia en el entramado de la población colombiana. Al respecto, el sociólogo e investigador Ariel Ávila (2016) afirma que centros de estudio como corporación Gran Arcoíris, Fundación Paz y Reconciliación y diversos representantes del mundo académico y político,²⁶ manifiestan concordancia con respecto a evaluar la peligrosidad que revisten estas bandas ligadas al paramilitarismo, que después del mencionado proceso de desmovilización, han coincidido en denominarles grupos neoparamilitares.

²⁶ Aquí pueden mencionarse al senador Jorge Robledo, Iván Cepeda y Gustavo Petro, íconos de partidos y movimientos políticos de oposición -Polo democrático alternativo y Colombia Humana, respectivamente.

Ávila propone, para el análisis, tres tipos de formas de Bacrim: 1) Los disidentes, es decir, estructuras que nunca se desmovilizaron; 2) Los rearmados, es decir, estructuras que entraron al proceso de Ralito, se desmovilizaron y luego de un tiempo se rearmaron; y 3) Grupos emergentes, es decir, surgieron grupos que indirectamente se vinculaban a los grupos paramilitares, pero que tenían una génesis nueva. Todas ellas, afirma el autor, han dejado de ser una estructura jerarquizada de manera rigurosa para convertirse en organizaciones que actúan mediante redes que aseguran diferentes niveles de operatividad, con presencia en 300 de los 1102 municipios que tiene en país actualmente. Estos tipos de Bacrim también se diferencian por las lógicas con las que operan y la capacidad de impactar escenarios locales, regionales y nacionales. Algunas responden aún a lógicas jerarquizadas que se encargan de proteger testaferros, de extraer renta de actividades ilícitas como la extorción, la minería ilegal, el contrabando, el tráfico de armas y narcotráfico. Asimismo, no se interesan sólo en el tipo de ilícitos mencionados sino también en mantener vínculos con sectores políticos del país, reflejados en el financiamiento de campañas políticas en época electoral. Otras organizaciones tienen dinámicas menos centralizadas de alcance regional, pactan contratos de servicio con entidades privadas, terratenientes, ganaderos y otras empresas con el fin de prestar seguridad; se dedican al sicariato, a la persecución y asesinato de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos. Un tercer tipo de Bacrim caracterizado por Ávila (2016), alude a los pequeños grupos de alcance local, que responden a la estructura de grupos delincuenciales y de pandillas implantadas en las ciudades, cuya actividad se encuentra sujeta a las órdenes de los dos tipos de Bacrim anteriores. Esta última descripción reviste gran importancia para los fines de esta tesis, en tanto permite comprender específicamente las acciones violentas de las pandillas en ciertos barrios vulnerables del Distrito de Aguablanca. Es decir, son la causa por la que un importante número de personas y familias se viene desplazando forzosamente dentro de la ciudad tal como lo confirman los testimonios de vida presentados en el siguiente capítulo.

Las pandillas juveniles, entonces, parecen encontrar en el microtráfico y su anclaje a organizaciones criminales con mayor capacidad como las Bacrim, las diferentes motivaciones para realizar actos transgresores (delictivos), que van desde la satisfacción de sus aspiraciones -en cuanto su capacidad adquisitiva- hasta ganarse un lugar de reconocimiento y respeto en el contexto donde residen, y desde el cual construyen su identidad y sus proyectos de vida.

Sobre las acciones articuladas entre Bacrim y pandillas urbanas, la asesora para el desplazamiento forzado en la región (Cali) comenta:

Esas comunas en donde se han formado pandillas, son las que aparecen en el informe de riesgo de la defensoría sobre que eran cooptadas por grupos armados, especialmente por las que el gobierno llama “bandas criminales al servicio del narcotráfico” y que la defensoría habla de pos-desmovilización. Entonces se maneja que Los Rastrojos estaban cooptando esas pandillas para tener como unos satélites del microtráfico porque ese es el negocio acá (...)el informe también habla de unas comunas específicas, y de algunos lugares que no son necesariamente barrios, sino de lugares donde se da no sólo el microtráfico sino también la extorsión que son los grandes recursos que ellos captan, por ejemplo la galería de Santa Helena está siendo adueñada por estas bandas criminales, entonces como las bandas tienen una estructura y quieren abrir sus tentáculos, les pareció fácil cooptar estas pandillas (Valencia ,A. Comunicación personal, Octubre 11 de 2016).

II.4.- Estado Social de Derecho, ciudadanía y reconocimiento de las víctimas.

El análisis del desplazamiento urbano como problemática estrechamente ligada a la violencia, requiere también ser comprendido en el marco de su inscripción en un Estado social de derecho, donde la condición de ciudadanía es tensionada por la legitimación institucional de las distintas formas de violencia.

Para profundizar el análisis se abordan las nociones sobre el Estado, reconociendo que existen diversos planteamientos y posturas teóricas e ideológicas sobre su significado y su papel en diferentes momentos históricos, donde el mismo se instituye como instancia capaz de administrar, regular y sostener la *cohesión social*²⁷ a través de diversas maneras, apoyadas por paradigmas que han permitido el surgimiento de estructuras de poder que sostendrían dicha cohesión.

Quizá, una de las nociones más relevantes en torno al término fue planteada por Max Weber, quien a inicios del siglo XX se refirió al Estado moderno como una

asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima como medio de dominación y que, con este fin, ha reunido todos los medios materiales en manos de sus dirigentes y ha expropiado a todos los seres humanos que antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas (1979:92).

Atendiendo a estas consideraciones, Giordano y Ansaldi (2012), refiriéndose a la construcción del orden, afirman que el papel del Estado es primordial en dicha construcción, mediada por relaciones de poder conflictivas, antagónicas, que ponen sobre el tapete diferentes propuestas de orden, “cada una con sus valores, sus normas, sus fundamentos y sus sujetos sociales fundamentales (...) En las sociedades modernas y contemporáneas el orden se organiza como Estado: el orden y su institucionalidad son de los vencedores (2012: 29).

En relación con la perspectiva de modernidad²⁸, es posible ejemplificar estos mecanismos desde la instauración de regímenes absolutistas hasta la

²⁷ Profundizando un poco sobre el concepto, podemos traer acotación la tesis de Durkheim referida a la cohesión social en la modernidad, es decir, durante lo que él denomina *solidaridad orgánica*. Para el autor, los hombres son portadores de pasiones, instintos y ambiciones que deben ser contenidos y regulados a través de la conciencia colectiva para mantener el orden y el funcionamiento en una sociedad (Aron: 1980: 33)

²⁸ Concibiendo la Modernidad como el punto de partida hacia nuevas construcciones de proyectos sociales, a partir del siglo XVI, tal como lo sostienen Gidens, con el descubrimiento de América: “la

construcción de democracias liberales. En medio de esa transición, juega un papel trascendental, por un lado, la Revolución Francesa (1789), entendida como el momento histórico donde se proclaman los Derechos del Hombre y del Ciudadano basados en las premisas de igualdad, libertad y fraternidad. Y por otro lado, en estrecha relación con lo antes dicho, la consolidación de los Estados-Nación durante el siglo XIX, como forma de organización y como contenedora de un proceso progresivo y contradictorio de inclusión de la problemática social (Malacalza: 2009). Estos sucesos constituyen importantes antecedentes para el reconocimiento oficial los derechos humanos, considerados de carácter universal, inalienables y supranacionales, recogidos ampliamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, surgida como respuesta a las consecuencias humanitarias derivadas de la Segunda guerra mundial. Dicha Declaración se instituye para proporcionar a las personas el status igualdad y libertad (inherentes a la condición de humanidad), que les permitan acceder a niveles de bienestar básicos, que deben ser garantizados por los Estados-nación. Así pues, tres años antes de la mencionada Declaración, se fue gestando el escenario concertado por las potencias capitalistas occidentales para posibilitar la concreción de un conjunto de políticas para favorecer determinados aspectos de la población.

El denominado Estado de Bienestar contemporáneo²⁹ resulta ser la antesala de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puesto que tras la crisis del capitalismo de los años treinta y en especial, de la culminación de la Segunda Guerra Mundial en 1945, los estados capitalistas más desarrollados

modernidad resulta un conjunto de prácticas e instituciones gestadas en el contexto europeo del siglo XVI, cuyos principios se fundamentaban en la fe en el progreso y la utilización de la razón como impulsora de la emancipación de los hombres, trasformando de este modo la realidad de la época" (Giddens: 1995).

²⁹ Se hace énfasis en el adjetivo de contemporaneidad puesto que se referencia el periodo de posguerra (1945) como el establecimiento de políticas de bienestar en el marco de Estados democráticos, adoptadas por algunos países europeos inicialmente, basándose en el *Informe Beveridge*. Esto, sin desconocer que incluso durante periodos monárquicos se establecieron medidas a favor del bienestar de la población (como forma de afianzar y mantener la legitimidad del monarca, a parte de la otorgada primariamente por "designio divino"); también durante parte siglo XIX, en Europa occidental se aplicaron este tipo de medidas como respuesta a la presión de movimientos obreros reclamantes de mejoras en las condiciones del trabajador y su entorno laboral, medidas que resultaron de alcance mínimo (Andersen Gosta: 1993) .

decidieron acoger las recomendaciones del denominado Informe Beveridge.³⁰ El Informe, recoge una serie de sugerencias derivadas del tratamiento de la cuestión social de la época, con la finalidad de auspiciar condiciones favorables para la población, que permitiesen mantener la democracia y la cohesión social con la menor conflictividad posible. De este modo, los Estados que adhirieron políticas de bienestar se caracterizaron por una moderada intervención en la regulación de la economía de mercado con pretensiones de balance entre el sector público y privado, esto en el caso de las socialdemocracias. En los Estados liberales dichas políticas se caracterizaron por la asignación de recursos provenientes del mercado y en los estados con predominio conservador, por estrategias asociativas como distribuidoras de recursos. Modelos encaminados a otorgar accesibilidad a niveles de bienestar dentro del capitalismo, con estrategias como diseñar y ejecutar planes para generar la mayor cantidad empleo posible³¹ que conllevara a altos niveles de productividad, además de un sistema de seguridad social que abarcara a toda la población, garantizar acceso a un mínimo que permitiese niveles de vida básicos para la población cesante, permitir la organización obrera a través de sindicatos, entre otras reformas.

Un planteamiento de similares características se puede encontrar cuando se hace referencia al Estado social de derecho. Gómez Izasa (2006) se refiere al surgimiento de éste último aludiendo a temporalidades y sucesos mencionados para caracterizar al Estado de bienestar, tales como la Gran depresión que puso en evidencia la desigual distribución social del crecimiento económico, altos niveles de desempleo, declive en la producción industrial y estancamiento del consumo, situaciones que empezaron a crear fisuras en el Estado liberal, además del ascenso de regímenes fascistas en detrimento de las democracias. Esto sumando al impacto de la Segunda Guerra Mundial en todos los ámbitos constitutivos de una sociedad. De modo que el Estado social de derecho también

³⁰ Realizado por William Beveridge a pedido de partido laborista británico en el poder.

³¹ Sobre este aspecto cabe resaltar que el informe contenía las propuestas de John Mynard Keynes, quien presentaba un modelo económico basado en el aumento del gasto público para la generación de empleo a gran escala, entrando en un ciclo de producción mantenida que generase a su vez más empleo.

podría catalogarse como una respuesta a dichos impactos, “orientado a la estabilización de la democracia y a la corrección de problemas de marginación” ocasionados por la exclusión de la economía de mercado de amplios sectores sociales.

Se puede decir entonces, que la figura del Estado ha hecho manifiesta su capacidad de dejar abierto un espacio para canalizar los reclamos, las pugnas, las conflictividades de los diferentes sectores sociales, dependiendo de las condiciones históricas variadas y cambiantes, de la coerción y el consenso, confrontaciones entre los bloques de la clase dominante y las resistencias y oposiciones. Dichas confrontaciones están mediadas por relaciones de dominación, entendiendo esta última como un tejido también de relaciones ancladas a vínculos dialécticos “como conflicto/cooperación, tensión/armonía. Se trata claro, de un campo de disputas, de lucha”, dejando en evidencia la existencia de intereses antagónicos acorde a las necesidades de los diferentes grupos sociales, pero que en alguna medida intentan ser subyugados por la clase dominante (Ansaldi: 2012: 33).

Así pues, las nociones expuestas sobre el Estado resultan necesarias para comprender la manera en la que diferentes actores sociales, en temporalidades y espacios determinados, se articulan con éste desde la exclusión o inclusión en la participación de escenarios que permitan replantear el significado del mismo de acuerdo a las necesidades que se evidencian en contextos sociales e históricos concretos. En este sentido, el Estado de Bienestar y el Estado social de derecho resultan conceptos que -con sus particularidades- son fundamentales para comprender las características que esta figura con múltiples dimensiones presenta en Colombia, en especial en cuanto a la relación de las instituciones y la ciudadanía.

En la problemática objeto de estudio de esta tesis, el reconocimiento y la visibilización de los actores implicados en las dinámicas del desplazamiento forzado intraurbano en la ciudad de Cali, es legitimada por la figura del Estado, comprendido dentro del contexto nacional y desde la constitución de 1991 a partir de los adjetivos social y de derecho -conceptos que hacen referencia a una

entidad no sólo con funciones administrativas, sino esencialmente encargada de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía (particulares y colectivos) - con el fin de mitigar los desajustes en materia económica, política, social y cultural, derivados por ejemplo, de la economía de mercado u otras situaciones anómalas como conflictos bélicos.

En síntesis, se observa la conformación de un Estado que propone no sólo el estricto cumplimiento los derechos civiles y políticos individuales -de primera generación- sino también de los derechos sociales, económicos y culturales colectivos -de segunda generación,- donde la población, apelando a la categoría de ciudadanía, tiene el derecho a ser provista de servicios básicos para asegurar condiciones de vida elementales, en pro de lograr bienestar general sustentado en cierta equidad social.

En Colombia, la constitución política vigente consagra este tipo de Estado, del cual podría decirse que “es un gran avance institucional, jurídico y político, cuyos logros deben ser el resultado de consensos nacionales entre el Estado y los factores de producción, para evitar caer en extremos que hagan peligrar la sustancia misma de los derechos sociales. Esto exige dos condiciones necesarias: la redistribución del ingreso, hoy concentrado en extremos insoportables y la paz nacional sobre la base de un nuevo contrato social” (Villar Borda: 2007). En este orden de ideas, los protagonistas de ese “nuevo contrato social” además del Estado, son los ciudadanos.

La ciudadanía en tanto concepto, constituye un campo en constante reinvencción, permeado por el devenir de la historia y todo lo que ello abarca: poder, dialéctica, subjetividades, luchas de diversos sectores sociales, entre otras dimensiones. Si bien las referencias hacia el término “ciudadano” se pueden rastrear desde la Edad Antigua, interesa abordarlo, en primera instancia, desde una noción de libertad -en el sentido liberal de la palabra- sujeta a la pertenencia de los individuos a un Estado-nación con el objetivo de lograr cohesión social. En esa dirección se toman los aportes de Nora Aquín (2003) quien, basándose en los desarrollos de T.H Marshall, expresa que, desde una dimensión jurídica, la ciudadanía se entiende como un marco legal que regula las relaciones entre

individuos, otorgándoles una igualdad abstracta a todos ellos, lo que permite un criterio de universalización. Este marco legal recoge un conjunto de derechos y deberes llevados por los individuos pertenecientes a un Estado, que posibilitan la vida en común. Acerca de este punto, es interesante la alusión que hace la autora con relación a la doble dimensión de la ciudadanía: ciudadanía formal, relativa a la pertenencia a un Estado-nación; y ciudadanía sustantiva como reconocimiento de la existencia de individuos y grupos sociales diferentes dentro del mismo territorio, con derechos que deben ser garantizados de igual manera:

El aspecto jurídico de la ciudadanía no debe reducirse a una cuestión procedimental, sino que requiere considerar las limitaciones de acceso diferencial tanto al conocimiento como a los recursos simbólicos, culturales y económicos, que hacen que, en la práctica, el contrato de la ciudadanía incluya a unos y no a otros” (Aquín: 2003: 17)

De modo que, los aportes derivados de los debates en torno a esta propuesta y a la noción de ciudadanía en general, resultan productivos pues se sustentan sobre el reconocimiento del carácter dinámico e histórico que porta esta categoría:

Los derechos de ciudadanía son objeto de disputa y por tanto son portadores de un carácter controversial, que hacen de esta categoría un campo de lucha social y política en la que se dirimen permanentemente los contenidos que la sociedad otorga a los derechos de ciudadanía y las prácticas que está dispuesta a desplegar en pos de su realización, en cada momento histórico. (P: 21).

En consecuencia, interesa puntualizar que el campo de lucha y tensión entre la ciudadanía y el Estado por la adquisición y garantía de derechos, posibilitó -en el marco del Estado de bienestar contemporáneo y especialmente el Estado social de derecho- el surgimiento de mecanismos dispuestos para asegurar tales fines, mecanismos agrupados bajo la figura de políticas sociales. Sin embargo, como se verá a continuación, es justamente a través del análisis de éstas últimas, en especial dentro del contexto capitalista, que queda evidenciada la dicotomía

entre las propuestas del Estado social de derecho y su ejecución dentro del modelo neoliberal.

II.5.- Políticas sociales y desplazamiento forzado

Una última noción relevante para el estudio del desplazamiento forzado, que permita dar cuenta de las situaciones y condicionamientos que afectan a las poblaciones desplazadas, remite a las políticas sociales. Las mismas son consideradas como la vía para atender demandas sociales, y en consecuencia, posibilitan la aparición y posterior participación de diversas profesiones consideradas interventivas, como el Trabajo Social, requerido en determinados tiempos y espacios.

Sin embargo, es necesario recalcar que las políticas sociales en tanto campo de estudio, resultan portadoras de diversas interpretaciones según el posicionamiento teórico y metodológico desde el cual se indaguen las mismas; además de resultar una dimensión de análisis en constante movimiento. Es decir, las discusiones alrededor del tema se desarrollan a partir diferentes corrientes de pensamiento en el marco de la teoría social; necesariamente imbricadas a las concepciones acerca del Estado. Teniendo en cuenta estos aspectos, se toman como referencia algunos de los debates en torno al origen y desarrollo de las políticas sociales³² reconociendo por un lado, la influencia de la perspectiva de T.H Marshall (tradicional) y su concepción de la ciudadanía desde marcos liberales; y por otro, las perspectivas de tradición crítica inspiradas en el pensamiento de Marx.

Las políticas sociales vistas desde la perspectiva de ciudadanía, apelan a esta última en tanto que supone derechos sociales naturalizados y garantizados por un Estado que intenta mitigar las desigualdades generando bienestar a través de la ejecución de dichas políticas. Así, éstas irían desarrollándose en un sentido

³² El estudio de las políticas sociales está indiscutiblemente ligado al marco general de las concepciones teóricas que se tienen acerca del Estado. De ahí que se haga referencia a planteamientos de tipo liberal y de tipo marxista.

lineal que supone una evolución de los derechos civiles, políticos y sociales, lo que a su vez suprimiría la categoría de “conquista de derechos” en un contexto de lucha, ya que dichos derechos naturalizados por la condición de ciudadanía evolucionan en el tiempo. (Montaño: 2000) De modo que al ser analizadas de manera lineal, desconociendo el aspecto de lucha, las políticas sociales revestirían de un carácter reformista que buscaría mejorar condiciones, mas no buscar transformaciones. O dicho de otro modo, dichas “mejoras” se efectuarían en el marco del mismo sistema capitalista.

Al respecto, Malacalza (2009) recuerda que es a partir de las ciencias sociales hegemónicas, custodias del nuevo orden social capitalista, que se construye el Trabajo Social como profesión encargada de intervenir a nombre de la institucionalidad sobre los sujetos que transgredían el orden, a través de diversos dispositivos, para corregir y mejorar sus condiciones con la finalidad de mantener la cohesión social. Siendo esto así, las políticas sociales están destinadas a mitigar o corregir -en cierta medida- la desigualdad social y económica creada por el sistema, sin proponerse transformarlo radicalmente.

Este ángulo de lectura muestra a la vez el carácter restrictivo y particularista, que asume la política social en los estados neoliberales, considerada como un conjunto de medidas subsidiarias de la política económica, dirigidas a los sectores sociales más desfavorecidos como modalidad de respuesta paliativa y selectiva a sus demandas. Esta concepción -criticada en esta tesis- ha sido adoptada por los gobiernos para dotar de un criterio de focalización a los programas sociales, desvinculándolos de del reconocimiento de los derechos de la población. (Cruz, 2008)

Para autores de tradición marxista, como Netto, citado por Carlos Montaño, el estudio de la política social se inscribe dentro de la esfera del desarrollo económico y político, situando dicho objeto de estudio como un fenómeno que representa una “particularidad en el contexto más amplio de la sociedad capitalista

consolidada y madura” (2000: 18)³³. Así pues, considera a las políticas sociales, desde un panorama económico, como instrumentos que resguardan y controlan la fuerza de trabajo, y políticamente, como soportes del orden socio-político en el marco del desarrollo contradictorio del capitalismo.

En el mismo sentido, los desarrollos de Iamamoto (2003) concluyen en que las políticas sociales son contradictorias al considerar, primero, que es el capitalismo quien crea las desigualdades y por tanto, al generarse dichas políticas en su seno sin procurar su superación, reproducen las mismas sin afectar su dinámica. También, la concreción de las políticas sociales a la vez que ratifica los “derechos sociales del ciudadano,” representa la transfiguración de la plusvalía producida por la clase trabajadora -que es apropiada por la clase capitalista- devuelta a la sociedad en dosis mínimas, como beneficios sociales.

En sintonía con esta tradición de pensamiento, se encuentran las contribuciones de Faleiros (2000) cuando afirma que le atañe a las políticas sociales en el capitalismo, la función de impulsar y reproducir la fuerza de trabajo a través de los “beneficios” canalizados en estas políticas (un ejemplo de ello se puede evidenciar en los subsidios, como la asignación universal por hijo en Argentina, o Familias en Acción en Colombia), que derivan en la socialización de los costos de dicha reproducción y en la dinamización del consumo. Esta situación es típica de las crisis del capitalismo donde lo anterior constituye en alguna medida, parte de la respuesta a esos periodos de crisis para asegurar la supervivencia del sistema, estimulando el consumo.

Estas reflexiones advierten la necesidad de comprender las políticas sociales visibilizando su ligazón estructural con las políticas económicas en el marco del modo de producción capitalista, portadoras de las contradicciones que atraviesan la relación entre capital y trabajo.

³³ Se refiere a la “política social” en singular porque su análisis parte de una perspectiva marxiana de totalidad (su objeto de estudio es la relación de clase capital-trabajo, fundante del capitalismo). De ahí que plantee que la intervención del Estado en la cuestión social (determinada por dicha relación de clase) deriva en un quebrantamiento de la misma, dispersándola y apartándola de su esencia de totalidad, causando que “la política social sea convertida en políticas sociales interviniendo en las consecuencias, en las secuelas de la cuestión social” (p.18)

O dicho en otros términos, la política social en el capitalismo no resulta sólo de la concesión de los gobiernos, sino también de las conquistas alcanzadas por las movilizaciones obreras que tuvieron lugar en el transcurso de las revoluciones industriales y que, en tanto disputa estructural, persisten y se reactualizan en el presente. Así, la política social es entendida como estrategia gubernamental de intervención y regulación en las relaciones sociales, cuyo surgimiento se da a partir de la organización y lucha de los movimientos populares del siglo XIX. (Vieira: 2000)

En síntesis, los enfoques presentados se agrupan bajo perspectivas de análisis diferentes, unas permeadas por la tradición liberal -o tradicional, como la denominan autores como Alejandra Pastorini- del pensamiento de Marshall; mientras otras abrevan en la tradición crítica, inspirada en el pensamiento de Marx. La tesis se posiciona desde los aportes de estas últimas, entendiendo que las mismas critican y superan las concepciones tradicionales incorporando al análisis las categorías *totalidad y lucha de clases*, mostrando así la relación tensa y contradictoria existente entre la burguesía y las clases que viven del trabajo.

También interesa volver a señalar que –aún bajo la organización del modo de producción capitalista,- en el Estado neoliberal la configuración de las políticas sociales se ha modificado sustantivamente respecto de lo que sucediera bajo la hegemonía del Estado de Bienestar. Esas transformaciones pueden comprenderse si se visualiza la dominación ejercida por el sector financiero desde los años ochenta en adelante, a diferencia de lo ocurrido anteriormente donde esa hegemonía era ejercida por el sector productivo industrial. Es decir, el “Estado Neoliberal pugna por una disminución en la participación del Estado en diferentes áreas como la social, que ahora estaría prácticamente manejada por las fuerzas del mercado, convirtiendo al carácter social del Estado en una fuente de lucro y negocio de una pequeña oligarquía en detrimento del grueso de la población beneficiaria, que se convierten en excluidos dentro de su mismas sociedad” (Portilla Marcial: 2015: 112).

Las políticas sociales neoliberales se caracterizan por ser selectivas o focalizadas, orientadas a los sectores sociales más vulnerables, en contraposición del carácter pretendidamente universal que les asignaba el Estado de Bienestar. Sin embargo este aspecto también suele ser excluyente y hasta insuficiente aún con esos sectores pues la oferta estatal generalmente se concentra en las zonas urbanas, privando a los grupos poblacionales rurales o residentes en zonas sub-urbanas, del acceso a dichas políticas. En consecuencia, apunta Portilla Marcial (2015) que el Estado Neoliberal reduce el número de beneficiarios a grupos focalizados, que serían los más empobrecidos, a quienes asiste incluso en forma transitoria, por períodos acotados de tiempo, puesto que pretende mitigar ciertas condiciones de vulnerabilidad de manera inmedatista, más no generar transformaciones de fondo que se reflejen en a largo plazo. (p.112)

En concordancia con lo anterior, otro punto central del debate radica en lo que plantea Pastorini (2000) al subrayar la discusión sobre si las políticas sociales son una “concesión” o una “conquista”. La autora considera que “esa relación no puede ser pensada unilinealmente, ya que no son las clases subalternas las que “conquistán” y el Estado aquel que “concede”, sino que existe una relación dialéctica entre ambos actores y procesos. Por otro lado, al mismo tiempo que el Estado y las clases dominantes “conceden”, los sectores subalternos también lo hacen (p. 225).

En el caso Colombiano, en el marco del conflicto armado iniciado en la década del cincuenta, la constitución política de 1991 resultante de una Asamblea Nacional Constituyente, y la desmovilización de la guerrilla M-19, son un claro ejemplo de lo expuesto por Pastorini, donde frente a una de las guerrillas más emblemáticas de Colombia, las élites y el Estado abrieron paso a negociaciones que trajeron consigo tanto conquistas como concesiones entre las partes, incluyendo también ciertas conquistas en materia de derechos para los sectores subalternos y la ciudadanía en general, ya que a partir de dicha Constitución, el país se erigió bajo la figura del Estado social de derecho, ratificando su carácter en el artículo uno del título “de los principios fundamentales”.

No obstante, aun cuando estos procesos históricos derivaron en la redacción de una nueva Constitución que instituye la figura del Estado social de derecho, es necesario realizar una lectura que capture la complejidad de tal situación pues dicha institucionalidad estatal es concomitante con el ordenamiento neoliberal que constitutivamente tensiona los derechos de la ciudadanía en Colombia.

II.6. El Estado neoliberal en Colombia, *monocultura de la productividad*.

Durante las últimas tres décadas en Colombia, se ha hecho manifiesta -por parte de los sectores dominantes- la pretensión de consolidar un Estado de carácter neoliberal con todas las implicaciones a nivel social, económico, político y cultural que ello sugiere. Y en esos términos, se redefine el Estado de acuerdo a las necesidades que plantea el neoliberalismo, poniendo claramente en tensión los derechos resguardados por el Estado Colombiano según la Constitución de 1991, vigente hasta la fecha.

Así entonces, resulta imperativo problematizar las contradicciones entre lo que representa este tipo de Estado –que en la retórica constitucional establece el reconocimiento de derechos inherentes a la condición de ciudadanía y despliega un Estado de bienestar para asegurar calidad de vida,- y las transformaciones ocurridas dentro del mismo a partir de la apertura económica a inicios de los años noventa. Para comprender estos hechos, son relevantes las contribuciones de Díaz Londoño (2009), quien, analiza esas transformaciones inherentes a la institucionalidad estatal en el país.

Previo a la Constitución de 1991, Colombia, de tradición bipartidista, transitó entre pugnas por la acumulación de riqueza y poder político por parte de las élites. Este último aspecto, la tenencia del poder político traducido en el acaparamiento de la administración del Estado, estuvo acompañado por el fortalecimiento del poder ejecutivo y las fuerzas militares, mediante actos legislativos para contener manifestaciones sociales en momentos de crisis. La agudización de la

conflictividad social, política y económica derivó en la necesidad de reunir a las diversas fuerzas sociales en una Asamblea Nacional Constituyente que, mediante la redacción de una nueva Constitución, estableció los lineamientos del Estado social de derecho para el país. Simultáneamente fue experimentándose un cambio en el modelo productivo, que hasta finales de la década de los años ochenta, se caracterizó por la intervención estatal en la economía, en especial en cuanto a la protección de la industria nacional y ala regulación de servicios públicos como salud y educación, para dar paso a la apertura económica con mayor participación de actores privados. De modo que, según el mencionado autor, resultaría paradójico que en el mismo periodo, las elites del país se sentaran a negociar y hacer parte de la redacción de la nueva constitución mientras estaban allanando el camino para la apertura económica que terminaría por favorecer la instauración del neoliberalismo en Colombia, poniendo en evidencia la ineludible tensión entre ese sistema económico y el Estado social de derecho.

Es decir, mientras, el Estado social y democrático de derecho promueve el desarrollo del bienestar y reivindica los principios de dignidad humana, trabajo, solidaridad de las personas, buscando garantizar los derechos económicos y sociales para una vida digna, haciendo prevalecer el interés general por sobre el particular; el modelo económico neoliberal promueve el desarrollo de un Estado mínimo y reivindica los principios de libertad individual, propiedad privada, libre comercio y no intervención del Estado en la economía. Asimismo, este Estado mínimo tiene principalmente las funciones de proteger las libertades de los ciudadanos de la violencia interna y la amenaza externa, la administración de justicia, es decir, preservar la ley y el orden, fomentar los mercados competitivos y proteger tanto la seguridad individual como la propiedad privada. (Ibídem, 2009:7)

Díaz Londoño continúa evidenciando esta tensión al expresar que la democracia, en el Estado social de derecho, reivindica y garantiza un conjunto de derechos, cuyas leyes deben ser legitimadas por la ciudadanía cuando representan intereses generales. Sin embargo, el neoliberalismo, al ponderar intercambios económicos dentro de la esfera privada reduciendo la intervención

estatal al mínimo, determina sus intereses “según máximas de la competencia orientada hacia la ganancia y reemplazan a la acción orientada por los valores o el entendimiento por una acción regida por el interés. Con lo cual el desarrollo económico es incompatible con una ética comunicativa, fundamentada en principios, normas y valores, que permita poner límites a la sociedad capitalista” (2009: 210), reflejando de manera contundente la *monocultura de la productividad* cuya lectura de las relaciones humanas desde el ámbito económico, político, social, cultural y ambiental es determinada por el criterio del crecimiento económico capitalista como objetivo racional incuestionable (De Sousa: 2006). En consecuencia, mientras entraba en vigencia la Constitución de 1991, el avance neoliberal le restaba al Estado el papel de garante de los derechos consagrados, pero en cambio sí se dispusieron mecanismos estatales para proteger las libertades individuales, la propiedad privada y la libre competencia. A partir de entonces, el Estado social de derecho y las instituciones de bienestar se han ido desmantelando con la promulgación de leyes totalmente regresivas para la ciudadanía, como la ley de salud y pensiones de 1993, que dejó en manos de entidades privadas la prestación del servicio de salud y pensiones, cuyo ponente fue el ex presidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez. De la mano de estas reformas se implementaron políticas de tipo asistencialista, orientadas a mitigar los efectos de la política económica y a evitar los conflictos sociales, naturalizando las desigualdades en la condiciones de vida de la población.

Complementando esta mirada resulta interesante revisar la noción del *Estado Comunitario* propuesto por el ex presidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, desde el cual elabora su proyecto de nación a través del Plan Nacional Desarrollo (2002-2006; 2006-2010), puesto que el análisis de la misma pone en evidencia la tensión entre neoliberalismo y Estado Social de Derecho, procurando más bien desmontar a éste último, re direccionando la política pública de los últimos años en Colombia. Al respecto, el académico Peña Salinas (2006) advierte primero que, el concepto de lo comunitario devela una trama homogenizante de la vida social, que pretende unificar bajo el discurso del bien común, pero a la vez está negando la existencia de otras realidades diversas, otras nociones de

bienestar. Es el *encubrimiento del Otro* propiciado por realidad hegemónica (Dussel:1994).

Para Peña (2006), uno de los objetivos de ese Estado comunitario es privilegiar las relaciones entre un Estado reducido a un papel administrativo y un grupo exclusivo de gremios económicos, excluyendo al grueso de la ciudadanía diversa, de manera que serían los dueños del capital quienes gobiernan y toman decisiones para beneficiar sus intereses a través del rol administrativo del Estado, que legisla a su favor. Y lo que resulta más importante para esta tesis, la política pública, y la política social que se derivan de ella, dejarían de ser el escenario en el que los habitantes de un Estado, conocedores de sus derechos constitucionales, manifiestan y discuten los problemas que deben resolverse. De este modo, la provisión estatal de servicios asistenciales pasa a ser regulada por el mercado, lo que conlleva a su privatización, distanciándose de toda noción de derechos y de la responsabilidad estatal en su protección.

Sumado a ello, el académico Mauricio García (2017) advierte que, la historia y análisis del Estado colombiano es más complejo aun cuando esa figura ha sido débil, ruinosa, incompleta; sus funciones han resultado improvisadas, insuficientes y coyunturales. La constante dentro de una mirada histórica del Estado colombiano arroja que éste ha sido incapaz de situarse desde los territorios como expresión de la presencia institucional, donde los funcionarios respondan a las necesidades de sus habitantes. Por el contrario, la población se ha visto obligada a ser más móvil que el Estado, tanto que esa sociedad en muchos lugares del mapa colombiano se acostumbró a vivir sin las normas del Estado. La iniciativa ha venido de los individuos, del ímpetu de las costumbres locales con sus propias pautas de orden y desorden. Ese Estado endeble intenta envolver su debilidad en autoritarismo ante la incapacidad para generar lenguajes de inclusión, convivencia y legitimidad; incumpliendo así lo pactado.

De manera que este es el complejo escenario en que se inscribe la problemática del desplazamiento forzado por conflicto armado y posteriormente el desplazamiento forzado intraurbano, cuya visibilización y análisis deviene

sustantiva para avanzar en la construcción de respuestas democráticas tendientes a su resolución por parte del Estado colombiano.

CAPITULO III

CUANDO LO AUSENTE SE VUELVE PRESENTE: POBLACIÓN DESPLAZADA Y SU RECONOCIMIENTO.

La ejecución de políticas sociales dirigidas a atender esta problemática, podrían asemejarse a lo que Joubert denomina el Estado en Acción, donde las mismas pueden examinarse como “un momento de la lucha política global: el estudio del Estado en acción es siempre la política concatenada a través de otros medios y sobre otras escenas. Es la construcción y la puesta en práctica de un conjunto de normas dirigidas a lograr una cohesión social.” (2004: 20).

En este sentido, el reconocimiento de la existencia de la problemática y la necesidad de generar mecanismos para su atención, puede abordarse también desde el planteamiento concesión-conquista (Pastorini: 2000) entre el Estado y los sectores sociales afectados quienes, a través de la movilización y el acompañamiento de organizaciones no gubernamentales y otras redes de apoyo, han logrado incluir el problema en la agenda gubernamental. Una expresión de ello es el diseño y la reformulación de políticas sociales derivadas, por ejemplo, de la ley 387 de 1997; replanteadas no solo conforme al devenir de los acontecimientos del panorama nacional, sino también por la presión ejercida por los sectores antes mencionados. Desde esta lectura, tales políticas constituyen una conquista inscrita en un proceso dialéctico y disputado, en el cual el Estado concede y reconoce esas demandas de la sociedad civil.

Cabe señalar que la institucionalidad estatal es compleja y contiene entidades tales como la Defensoría del Pueblo³⁴ y personerías municipales que mediante el uso de mecanismos consagrados en la constitución política tales como la tutela, instituyen acciones positivas de reconocimiento de derechos de las víctimas, recomendando intervenir para abordar la problemática.

III.1- Marcos normativos y protocolos para la atención de población desplazada por la violencia.

La Constitución política de Colombia declara derechos fundamentales extensivos a todos los ciudadanos entre los cuales se señalan algunos de los más importantes dada su relación con el tema de investigación de esta tesis. Así por ejemplo, la referencia expresada en los artículos 2 y 5 respecto de la responsabilidad del Estado de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. De este modo el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona.³⁵

De igual manera, los artículos 11,12 y 13 manifiestan la inviolabilidad del derecho a la vida, el no sometimiento a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; a la vez que establecen la libertad e igualdad ante la ley, así como la garantía de protección y trato de las autoridades,

³⁴ “La Ley 387 de 1997 marcó el inicio de una nueva etapa en el reconocimiento del desplazamiento forzado. Diferentes sectores sociales mantuvieron una década de luchas para el reconocimiento del fenómeno como un hecho que necesita especial protección por parte del Estado. Si bien la promulgación de la ley determina el fin de la búsqueda de reconocimiento, con ella empieza un movimiento normativo para la definición de los límites en cuanto a la asignación de los beneficios y de las personas que tendrían derecho a estos.” (Atehortúa, 2013)

³⁵ En *TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES*

para que todos gocen de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, adoptando medidas en favor de grupos discriminados o marginados, y protegiendo especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.³⁶ (Constitución política de Colombia: 2015: 13-15).

Ahora bien, articulando las dimensiones anteriores -Estado social de derecho, ciudadanía y los derechos fundamentales y constitucionales- se puede afirmar que las personas, de forma individual y colectiva, víctimas del conflicto armado, están inscriptas dentro del carácter dinámico de la ciudadanía al representar campos de lucha en aras de que el Estado social de derecho les restituya los derechos que les fueron vulnerados. Este último, reconoce entonces a las víctimas como:

Aquellas personas de la población civil que sufren perjuicios en su vida, grave deterioro en su integridad personal y/o bienes, por razón de actos que se susciten en el marco del conflicto armado interno, tales como atentados terroristas, combates, ataques y masacres entre otros (...) éstas recibirán asistencia humanitaria, entendiendo por tal la ayuda indispensable para sufragar los requerimientos necesarios a fin de satisfacer los derechos constitucionales de quienes hayan sido menoscabados por actos que se susciten en el marco del conflicto armado interno (Congreso de Colombia, 1997).

En consecuencia, dentro de esta categorización de las víctimas, interesa enfatizar en las que han sido afectadas por el desplazamiento forzado, reconocidas también por el Estado como:

³⁶ *TÍTULO II DE LOS DERECHOS, LAS GARANTÍAS Y LOS DEBERES*

Toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el orden público (Congreso de Colombia: 1997)

En este orden de ideas, el Estado social de derecho debe garantizar a la población víctima de desplazamiento sus derechos civiles fundamentales; derecho a no ser discriminados por su condición social de desplazados, motivo de raza, religión, opinión pública, lugar de origen o incapacidad física; a reunificarse con su familia, acceder a soluciones definitivas a su situación, al regreso a su lugar de origen; a no ser desplazados nuevamente por la fuerza; a la libre movilidad dentro de los parámetros de la ley y tienen derecho a que el Estado proporcione las condiciones que faciliten la convivencia entre los colombianos, la equidad y la justicia (Congreso de Colombia: 1997).

Estas conceptualizaciones cobran especial relevancia si se tiene en cuenta que los desplazados intraurbanos no han sido objeto del marco jurídico que se encarga de la restitución de derechos a través de la implementación de políticas sociales, puesto que carecían del reconocimiento como víctimas del conflicto armado considerado un fenómeno al margen de la ley relativamente reciente, generalmente asociado a delincuencia común u organizaciones criminales (ley 418 de 1997). En este sentido, se puede apreciar que la necesidad de extender la legislación sobre el tema se corresponde con el concepto dinámico de ciudadanía y ampliación de derechos, pues las personas y comunidades afectadas por este tipo de desplazamiento dentro de las ciudades, han acudido a mecanismos como

la tutela,³⁷ para ser cobijados por las políticas públicas dispuestas por el Estado. De acuerdo a ello, la asesora para el desplazamiento forzado en Cali, Anyela Valencia, afirma que “gracias a los fallos de la Corte Constitucional en el año 2013 basados en un concepto amplio de violencia (violencia generalizada, violaciones a los derechos humanos, entre otros aspectos expresados en la ley 387 de 1997) se ha logrado vincular a las víctimas de desplazamiento intraurbano dentro de las rutas de atención.” Al respecto comenta:

Entonces ¿qué pasa con el tema del desplazamiento intraurbano? es un desplazamiento que no tiene claridad sobre cuál es el grupo armado que los está expulsando, ¿sí? (...) se tiende a pensar que no es un problema del conflicto sino que se debe más vale que esa movilización de las familias es producto de la delincuencia común que no estaría en el marco de la 1448 que es la Ley de Víctimas que está vigente. Pero qué pasa con el desplazamiento intraurbano, ese desplazamiento ya fue materia de análisis por parte de la corte constitucional, sobre todo porque teníamos un fenómeno muy fuerte en Buenaventura(...) Entonces a raíz de que estas personas no estaban siendo atendidas porque a Ley de Víctimas en su artículo tercero habla de que van a ser materia de atención y asistencia todas las personas que hayan sido

³⁷ La acción de tutela es un mecanismo consagrado en la constitución política como vía para proteger derechos fundamentales y constitucionales que han sido vulnerados, amparado a su vez por el artículo 23 de la constitución donde se declara que: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

Artículo 86: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, este lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión” (Constitución política de Colombia, 2015)

perjudicadas por grandes infracciones al DIH, y se tomaba el DIH es en el marco del conflicto, entonces se suponía que esta gente que se había desplazado no estaba en este marco, por eso, quienes rendían declaración, te estoy hablando de finales del 2012 e inicios del 2013, no quedaron atendidas, no fueron incluidas, y es allí donde se da una especie de avance jurisprudencial, cuando la corte constitucional habla de que ese fenómeno está en el marco de la ley que está vigente que es la 387 del 97, porque eso es violencia generalizada y, ordena en el auto 119 del 2013, que la unidad de atención debe incluir y atender esas víctimas. Entonces el tema de lo intraurbano está asociado a un fenómeno que está con las “Bacrim”, o los pos desmovilización, un fenómeno que antes no era reconocido y que gracias a este auto 119 genera una ruta de atención” (Valencia, 2016).

La inclusión de las víctimas de desplazamiento forzado intraurbano en el Auto mencionado se deriva de la movilización y lucha de los sectores sociales afectados, acompañados por la Defensoría del Pueblo cuyo trabajo aportó a visibilizar la situación. No obstante, la efectividad de las rutas de atención dispuestas para la protección y restitución de derechos es cuestionable, como se expondrá más adelante a través de las experiencias narradas tanto por víctimas como por funcionarios de la entidad.

La grave situación humanitaria que reviste el desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado colombiano, impulsó la organización de víctimas, académicos y sectores de la institucionalidad que, apoyándose en las disposiciones internacionales para abordar el tema se dispusieron a desplegar acciones que dieran cuenta de la urgencia de establecer mecanismos que atendieran y restituyeran los derechos de las personas afectadas. De esta manera, en el año 1997 surgió una respuesta por parte del Estado, planificando y decretando la primera política pública destinada para tales fines, amparada en la ley 387 del mismo año que reconoce la crisis humanitaria evidenciada en el desplazamiento forzado.

En el artículo primero de la ley se concibe a los desplazados como “toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: el conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, violación al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público” (Congreso de Colombia, 1997).

Asimismo, se establecieron criterios para determinar quién es desplazado y brindar acceso a la ruta de atención dispuesta para estos casos, a través de, por ejemplo, elaboración de diagnósticos sobre causas y actores generadores de desplazamiento por la violencia; como también de las zonas mas afectadas por los desplazamientos, y de las zonas receptoras de la población víctima, identificando las consecuencias sociales, económicas, políticas y jurídicas. Para cumplir esta labor, también como consecuencia de la ley, se estableció el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), como herramienta encargada de administrar la información más detallada posible sobre la población en situación de desplazamiento (características económicas, geográficas, culturales, etc).

Conforme a las disposiciones anteriores, se delegó a las instituciones gubernamentales la función de diseñar e implementar los programas de atención, agrupados bajo el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la violencia (SNAIPD), creado por el gobierno nacional para tal fin. Dentro de sus prioridades, el sistema debía adoptar medidas de emergencia para asegurar la protección y condiciones básicas de subsistencia a la población afectada, teniendo en cuenta sus contextos pos-desplazamiento. También debía crear y ejecutar herramientas para su asistencia legal, jurídica y otras medidas para garantizar el acceso de las víctimas a programas integrales de atención y reparación; impulsando además un trabajo preventivo.

Sin embargo, a pesar de los propósitos de la ley 387 de 1997 y los mecanismos creados para darles cumplimiento, en el año 2004 la Corte Constitucional declaró a través de la sentencia T/025 de 2004, tras numerosas tutelas interpuestas a causa de reiteradas vulneraciones a los derechos de la población afectada, que el desplazamiento forzado se encontraba bajo la figura de “un estado de cosas inconstitucional” derivado de las falencias por parte del Estado en la prevención, atención integral y restitución de derechos de las víctimas. Es decir, incumplimiento del conjunto de mecanismos agrupados en las políticas públicas creadas a partir de la ley 387, destinados para hacer frente a la problemática.

En consecuencia, como respuesta a la sentencia, el gobierno nacional implementó una serie de cambios con el fin de mejorar el sistema de atención para las víctimas, tales como aumento de recursos monetarios, mejoras en los sistemas de obtención de datos, disposición de más funcionarios públicos para agilizar procesos, entre otras medidas que permitiesen mayor cobertura, inclusión y restitución de derechos, generando programas de apoyo para la población desplazada. Esta reorientación de la política pública para la población desplazada se plasmó en el decreto 205 del año 2005, albergando principalmente tres componentes: “la prevención y protección, la ayuda humanitaria y la estabilización socioeconómica. Es decir, es una atención de principio a fin, por lo tanto, estos componentes, podría decirse, son etapas de la atención que debe darse a la población desplazada” (Bunzl Sánchez, 2008, pág. 61).

Sumado a lo anterior, también como consecuencia de la sentencia T/025 de 2004, la población en condición de desplazamiento se encuentra especialmente cobijada por la Ley 1448 de 2011, también conocida como la Ley de víctimas y restitución de tierras, sancionada por el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos (2010-2018). En este sentido, la ruta de atención implementada y desarrollada actualmente por la unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que a su vez forma parte del Sistema Nacional de Atención Integral, contempla acciones prioritarias y otras de carácter progresivo. Dentro del primer

grupo, el Estado debe garantizar a la población desplazada el derecho a una identificación, acceso a la educación, salud, alimentación, reunión familiar, orientación profesional, vivienda y asistencia psicosocial. En el segundo grupo las acciones procuran garantizar la restitución de tierras, donde haya habido despojo de propiedades privadas o colectivas, acceso a servicios públicos básicos, derecho a la movilidad terrestre y fluvial como factor determinante en el desarrollo de las comunidades y los territorios, seguridad alimentaria, ingresos y trabajo que permitan desarrollar el potencial productivo para lograr estabilidad socioeconómica y organización social, asegurado mayor bienestar a las comunidades. (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, : 2014).

Estos avances, según Atehortúa (2013), han sido notables pero insuficientes para transformar de fondo las condiciones precarias de las víctimas, en especial en los territorios receptores -generalmente zonas urbanas,- donde se radican con posterioridad al desplazamiento. Esos contextos presentan características de vulnerabilidad y marginalidad, tal como se describió en la primera parte de este trabajo haciendo alusión al caso específico del Distrito de Aguablanca.

Añadiendo al panorama descrito, Atehortúa profundiza su análisis sobre las consecuencias de la sentencia T/025 de 2004, en cuanto a la focalización en el acceso -por parte de los desplazados- a servicios públicos, centrando la mirada sobre los impactos del desplazamiento en su cotidianidad, así como en las relaciones de éstos con la población receptora: urbana, vulnerable y marginada. Según la autora, basada en el trabajo de campo de una de las localidades más grandes aledañas a la capital Bogotana -Soacha- se encontraron relaciones antagónicas entre los desplazados desde el campo hacia la ciudad y los pobladores receptores -no desplazados- residentes en estas zonas, puesto que estos últimos se ven en desventaja con respecto a los primeros, ya que por no poseer la condición de desplazados, quedan excluidos del acceso a programas de atención que representan beneficios en medio de su condición de precariedad. Es decir, ambos sectores comparten condiciones de vida precarias pero el trato

estatal diferenciado entre unos y otros, produce escenarios de confrontación entre ellos.

En este sentido, los procesos de migración desde el campo hacia la ciudad contribuyen a “modificar y eventualmente desestabilizar la malla urbana nacional e inciden en nuevas formas de relacionarse rurales-urbanas; pero que simultáneamente conllevan procesos de urbanización de la violencia, transformada bajo nuevas modalidades delincuenciales.” (Aguilar Gutierrez: 2007:3) Tal situación es propiciada y profundizada por elementos tales como la carencia de servicios básicos, acceso a la educación, oportunidades de empleo y exclusión en general a la que son sometidos los residentes -desplazados o no- que conforman sectores vulnerabilizados residentes en lugares periféricos de la ciudad. Entretanto, en los mismos escenarios o a propósito de ellos, se consolidan “modalidades delincuenciales” relacionadas especialmente, en el caso de Santiago de Cali, con el narcotráfico.

De modo que la política pública dispuesta para atender a la población víctima del desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado excluía a las víctimas del desplazamiento intraurbano de los programas de atención, reparación y restitución de derechos. En este aspecto cobra especial relevancia la noción de *concesión-conquista* referenciada con anterioridad, con relación al carácter de las políticas sociales como preámbulo para lograr el reconocimiento institucional de las víctimas de este tipo de desplazamiento dentro de la ciudad.

Ahora bien, tras describir las políticas sociales dispuestas para la atención de la población desplazada por la violencia en el marco del Estado social de derecho y la noción de ciudadanía, que introdujo la sentencia de la Corte Constitucional en el año 2013 incluyendo a la población afectada por el desplazamiento intraurbano como víctima de la violencia generalizada, interesa pensar el alcance de dichas políticas en el Estado colombiano contemporáneo, también a partir de la reconstrucción de vivencias de las propias personas afectadas.

En este sentido, las Historias de Vida muestran expresiones sobre la tensión existente entre la obligación del Estado de garantizar y restituir derechos vulnerados, y su débil configuración institucional, dominada por un ideario neoliberal que, lejos de garantizar derechos los pulveriza desde abordajes fragmentados e insuficientes, privatizando incluso los servicios sociales. En consecuencia, más allá de la generación y puesta en marcha de mecanismos efectivos para llevar a cabo la ruta de atención según requieran las víctimas, el Estado incurre en dinámicas de revictimización que las obliga a desarrollar estrategias para mitigar los impactos de la problemática, por fuera de esa oferta institucional precaria.

Estas apreciaciones muestran la existencia de una dimensión que parece desbordar la comprensión jurídico-normativa del reconocimiento del problema del desplazamiento forzado intraurbano, mostrando la cuestión desde otro plano. Es decir, la vivencia de los conflictos magnificada en el contexto urbano condensa y materializa sensaciones de inseguridad y miedo, tanto en dimensiones territoriales, como en individuos y tramas relacionales que van instituyendo una “Otridad” diferencial, producida por el imaginario social hegemónico, que retroalimenta cierto estado de “sospecha” permanente que termina criminalizando y estigmatizando a los sectores populares.

III.2. Ejercicio de ciudadanía y visibilización del desplazamiento intraurbano.

En la ciudad de Medellín, entre los años 2001 y 2004, en algunos sectores de comunas periféricas de la ciudad, donde se registraba la presencia de pandillas y otras bandas delincuenciales con vínculos con las AUC –paramilitarismo-, desplegaron acciones violentas, en el marco de disputas por el control del territorio, que afectaron a la población civil -muchos de ellos desplazados provenientes de otros sectores del departamento de Antioquia.- Esas luchas produjeron a su vez el desplazamiento de aproximadamente 180 familias hacia otros asentamientos periféricos de la ciudad quienes posteriormente se vieron obligadas a buscar refugio en casas de vecinos y familiares, o bien en albergues temporarios dispuestos por la municipalidad o asociaciones religiosas. Lo que

interesa resaltar es que estas nuevas ubicaciones se encontraban en zonas barriales cercanas a los lugares donde residían antes del desplazamiento, es decir, alrededor o incluso en las mismas comunas.

Con respecto a esta situación, Atehortúa (2013) refiere que existen básicamente dos razones argumentadas por las familias afectadas para desplazarse hacia estos lugares. La primera vinculada a la imposibilidad económica de acceder a vivienda y servicios en otros sectores de la ciudad, por la inestabilidad laboral de las personas que viven en el sector; y la segunda, ligada al miedo a perder todo lo que tenían -vivienda, relaciones comunitarias, reconocimiento que se pierde al ser “desconocidos” y tratados como culpables de situaciones comprometedoras con cualquier actor armado; lo que les produce una condición de inseguridad que se vive como permanente (Atehortúa: 2013: 108).

Bajo el impulso de estas preocupaciones, las familias desplazadas van organizándose con el fin de visibilizar su situación como desplazados dentro de la ciudad, y de buscar garantías por parte de las instituciones para restablecer sus derechos. También van buscando construir lazos de unidad entre las víctimas, que favorezcan su inclusión en los programas de atención. Sin embargo es reconocimiento de estas personas como destinatarias de dichos programas ha sido obstaculizado por el Estado al “no encontrar vinculación entre los actores causantes del desplazamiento intraurbano con el conflicto armado.” Esta interpretación se sustenta en la ley 1448 de 2011, específicamente en su artículo 3 donde explicita que serán consideradas víctimas las personas que hayan sufrido violaciones de derechos humanos en ocasión del conflicto armado interno (cuyos actos hubiesen sido perpetrados por guerrillas, paramilitarismo o agentes del Estado), excluyendo así a las víctimas de violaciones cometidas por parte de la denominada delincuencia común. Empieza así un camino de presión y lucha ejercido por las comunidades afectadas, haciendo uso de la acción de tutela que alcanza mayor visibilidad con la Sentencia T-268 de 2003 proferida por la Corte Constitucional que esboza una definición oficial sobre el desplazamiento intraurbano.

Esta sentencia define al desplazamiento forzado a partir de hechos como el abandono de la localidad, el abandono de las actividades económicas habituales y la coacción, entendida como aquella producida por circunstancias que perturben el orden público o que puedan alterarlo. Además, la Corte precisó que el entorno urbano impone circunstancias que pueden producir una vulnerabilidad mayor para las personas que se ven forzadas a migrar intraurbanamente:

Tratándose de núcleos familiares que por motivos de la violencia urbana se ven obligados a buscar refugio dentro de la misma ciudad, la crisis humanitaria puede ser mayor, lo cual implica que el Estado está obligado a tomar acciones para proteger los derechos fundamentales de los afectados por el Desplazamiento forzado intraurbano y su reconocimiento constitucional a partir de la Sentencia T-268 de 2003. (Sentencia T-268 de 2003) (CODHES: 2013:37).

A dicha sentencia, proferida con relación a los hechos sucedidos en el sector de la ciudad de Medellín llamado *El Salado*, se suman dos sentencias más producto de acontecimientos de similares características en los asentamientos urbanos *El Esfuerzo* y *La Honda*. La importancia de anotar estas experiencias radica en que, en los tres casos las acciones de tutela fueron adelantadas por personas que se consideraban en situación de desplazamiento y por lo tanto exigían el cumplimiento de las obligaciones que en estos procesos específicamente, la institucionalidad de la ciudad de Medellín tiene en cuanto a garantizar la atención integral para la población desplazada. En los tres casos la acción de tutela fue efectiva puesto que se reconoció la existencia de desplazamiento forzado, de acuerdo al marco normativo, que permite caracterizar este tipo de problemática de manera general, es decir, sin diferenciar si el escenario fue rural o urbano o si la acción de los actores armados está vinculada de manera directa con el conflicto armado interno (Atehortúa: 2009: 244).

En este sentido, la ley 387 de 1997 jugó un papel determinante en el reconocimiento del desplazamiento forzado intraurbano, ya que los fallos favorables a las tres acciones de tutelas interpuestas por las personas afectadas tomaron en cuenta que no es necesario distinguir de dónde proviene la violencia contra la población que la obliga a migrar forzosamente entre barrios de la ciudad:

cabe cuestionarnos si tan solo es „desplazado“ quien es forzado a abandonar su residencia por amenazas de un grupo paramilitar o guerrillero. La respuesta a este interrogante emerge de la lectura del art. 1° de la Ley 387/97, en el que no se hace distinción alguna al respecto de la procedencia de los actos de violencia de que es objeto quien se tiene por desplazado. (Atehortúa: 2009: 250) .

Específicamente, esta ley establece en el artículo mencionado y citado anteriormente los escenarios bajo los cuales una persona puede ser considerada desplazada de manera forzada, y no se remite exclusivamente al conflicto armado interno, sino que vincula otras causas como la de violencia generalizada, dando cabida a la inclusión de víctimas de otros actores generadores de violencia.

Aun así, a pesar de las disposiciones en materia normativa que otorgaron reconocimiento al desplazamiento forzado intraurbano desde el año 2003 y derivaron en medidas de protección y atención, la respuesta estatal para con las víctimas continuaba siendo ineficiente y excluyente en cuanto a su incorporación en el Registro Único de Víctimas que les permitiera acceder a la ruta de atención. Ese reconocimiento estuvo vinculado directamente con los tres casos mencionados y no se profirió legislación alguna a nivel nacional para implementar políticas sociales en pro de garantizar sus derechos. Un antecedente de ello es el acompañamiento realizado en 2012 por la Defensoría del Pueblo y la Personería, a 18 familias desplazadas dentro de la ciudad de Medellín, y la interposición de una acción de tutela. Tal acción resultó importante por la determinación de estas entidades a tomar la vocería y representar a las víctimas; y porque se ratificó el reconocimiento de la modalidad de desplazamiento intraurbano tal como se expresa en la siguiente comunicación que sostiene que “la visibilización de las dinámicas de violación sistemática de los derechos humanos (DDHH) por parte de los grupos armados ilegales denominados “Bacrim”, lo cual es un fenómeno que ocurre en varias zonas del país” (Diario El Espectador: 2013).

Recapitulando entonces, las Bacrim son concebidas por el Estado como grupos armados surgidos tras la desmovilización de estructuras paramilitares -las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)- en el año 2005; y se encontrarían

desvinculadas del conflicto armado, y por tanto catalogadas como delincuencia común.³⁸ Es decir que, a partir de esta última tutela del año 2012 se propició el reconocimiento como víctimas del desplazamiento intraurbano a personas afectadas por la acción de otros actores armados diferentes de guerrillas, paramilitarismo o agentes del Estado y por lo tanto se les incluyó en el Sistema de Atención Integral para la Población Desplazada por la violencia.

Un año después, en el 2013, se produjo el pronunciamiento de mayor importancia por parte de la Corte constitucional sobre el tema, a través del Auto 119 de 2013, vinculado al seguimiento de la sentencia T-025 de 2004, donde se manifiesta la preocupación de la Corte por la vulneración sistemática de los derechos constitucionales de la población desplazada, centrándose en la falta de respuesta oportuna del Estado con las víctimas de violencia generalizada al no incluirlas en el Registro Único para recibir atención.

Puede observarse la importancia que la Unidad de Víctimas da a la verificación del rótulo del actor que provocó el desplazamiento en el momento de definir la inclusión en el registro, y la tendencia a excluir del sistema de protección y atención a las víctimas de desplazamiento forzado ocasionado por violencia generalizada o por graves violaciones a los derechos humanos, perpetrados por las BACRIM, dejando en extrema vulnerabilidad y sin atención y protección a miles de colombianos. (Corte Constitucional: 2013: 7).

De modo que, tal como se asumió en los casos de tutela expuestos anteriormente, para reclamar la obligación del Estado en los casos de desplazados urbanos, en este Auto la Corte ratifica que cualquier persona que haya sido constreñida a dejar su lugar de residencia y actividades socio-económicas habituales dentro de las fronteras nacionales, en cualquiera de los casos de violencia descritos en el artículo 1º de la ley 387-anteriormente citado-sin necesidad de establecer vínculos con otras circunstancias como las del

³⁸ “La oficina del alto comisionado para la Paz, recordó que la posición oficial del Gobierno, tomada por el Consejo de Seguridad, es que las Bacrim no hacen parte del conflicto armado interno, porque no se consideran grupos armados al margen de la ley, si no grupos pertenecientes a la delincuencia común organizada” (Corte Constitucional. Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004: 2013: 5)

conflicto armado, se produce una situación de desplazamiento forzado que demanda el cumplimiento de las obligaciones del Estado ante tal condición. “La Corte ha interpretado que el desplazamiento forzado no se circunscribe al marco del conflicto armado interno, sino que ha considerado escenarios más amplios relacionados con episodios de violencia (...) el desplazamiento forzado se configura cuando se presenta *cualquier* forma de coacción” (Corte Constitucional: 2013: 19-20).

Debido a que las personas desplazadas por violencia generalizada quedaban excluidas de la Unidad de Víctimas de la ley 1448 de 2011, la Corte argumentó que dicha población no contaba con los mecanismos normativos que los amparasen en su condición de desplazados, colocándolos en una situación de mayor vulnerabilidad, al no recibir atención por parte de las autoridades competentes. En consecuencia, en el Auto 119 de 2013 se decretó que la Unidad de Víctimas no podría excluir ninguna solicitud de reconocimiento en el Registro Único de Víctimas basándose en la procedencia de la acción y actor generador del desplazamiento, como tampoco en el escenario en el que ocurrieron los hechos (zonas rurales o urbanas). Además, se instó a la Mesa de Estudios Permanentes a no descartar la posibilidad de que organizaciones armadas como las Bacrim, catalogadas como delincuencia común y causantes de desplazamientos intraurbanos en varias ciudades del país (Medellín, Buenaventura, Tumaco, Soacha, Santiago de Cali, entre otros) guardasen relación con el conflicto armado interno.

Formalmente, después del Auto 119, las víctimas del desplazamiento forzado intraurbano estarían cobijadas, al menos por parte de la ruta de atención dispuesta para la población desplazada por el conflicto armado como lo dispone la ley de víctimas 1448 de 2011, y podrían recibir asistencia de la ayuda humanitaria de emergencia -como albergue temporal por 30 días sujetos a prórroga, subsidio de alimentación y de transporte hasta que su inclusión en el Registro Único se haga efectiva,- accediendo así a la oferta institucional de atención integral para lograr su estabilización socioeconómica y reparación. No obstante, en la práctica,

los obstáculos para que las víctimas de esta modalidad de desplazamiento accedan a dicha atención son muchos.³⁹

Una expresión de lo antes dicho se encuentra al analizar la entrevista con la delegada para el desplazamiento forzado en la ciudad de Cali, Anyela Valencia, quien expone que *“cuando las personas afectadas presentan declaración ante la Unidad de víctimas, se sigue priorizando sobre el actor del hecho victimizante para hacer efectivo el registro, es decir que en los casos donde no se puede comprobar el nexo entre pandillas barriales y Bacrim, generalmente no se los incluye en el registro, o se prolongan los tiempos de atención hasta establecer sistematicidad en las acciones violentas por parte de los grupos delincuenciales, extendiendo el grado de vulnerabilidad de las víctimas (...)”*

Al respecto, el investigador Ospina Gómez plantea que se debe prestar especial atención al Auto 119, donde la Corte Constitucional menciona al actor armado ilegal denominado Bacrim, “ellos hablan de una situación que se denomina violencia generalizada y que está en el primer artículo de la 387. Primero hacen un análisis de la situación, entonces a partir de unas consideraciones previas se hace visible la gran importancia que le ha dado la Unidad de Víctimas a la calidad de rótulo del autor que provocó el desplazamiento, es decir que para la unidad, dependiendo de quién desplace se tiende a definir la inclusión o exclusión de la atención a las víctimas, a quienes por situaciones graves, perpetradas por autores como Bacrim, se ha dejado sin protección a miles de colombianos en estado de extrema vulnerabilidad. Ese tipo de análisis ha cobrado gran importancia para la aplicación de herramientas jurídicas. Entonces, lo que se pretende hacer es la revisión de caso por caso para determinar a quién se incluye o a quién se excluye del registro, analizando la intensidad del conflicto en las zonas donde opera la llamada “delincuencia común” para establecer si hay

³⁹ Incluso, el tema de atención y reparación para víctimas del conflicto armado -desplazadas de sus territorios- después de la sentencia T/025 de 2004 y proferida la ley de víctimas 1448 de 2011 ha estado sujeto a múltiples análisis y críticas por sus falencias para cumplir con las obligaciones dispuestas. Varios elementos confluyen en ello, como las condiciones para la inclusión en el Registro único de víctimas, los tiempos de espera entre los trámites y recepción de ayudas humanitarias e indemnizaciones o la no recepción de ayudas años después de presentar declaración y ser inscritos en el Registro único.

un tema de violencia reiterativa, porque no es cualquier banda o pandilla ¿cierto? hay que probar que esa banda o pandilla tiene una estructura y que esa violencia ha sido permanente.” (2016)

Pese a ello, la Defensoría del Pueblo, como entidad representante del Ministerio Público, realiza esfuerzos importantes para activar la ruta de atención, para desplazados por el conflicto armado y para desplazados intraurbanos por violencia generalizada. Al respecto, el asesor para el desplazamiento forzado en la región, Luis Osorio, al ser entrevistado explica que *“en el marco de la ley 1448, le corresponde al ministerio público tomar las declaraciones por desplazamiento forzado y por cualquier de los demás hechos victimizantes establecidos por la ley, especialmente en este caso, la defensoría le corresponde tomar las declaraciones de manera individual e igualmente activar la ruta de atención establecida para los casos de atención individual. Las declaraciones una vez recepcionadas se deben enviar a la unidad de víctimas quienes tienen un plazo para su valoración y decidir si la persona realmente es o no una víctima en los términos de la ley, conforme a las últimas declaraciones de la Corte Constitucional.”*

Cabe señalar también que en materia legislativa para atender el desplazamiento forzado, no sólo es aplicable la ley 1448 sino también la ley 387 de 1997 que ofrece un marco más amplio de interpretación y acción, que se complementa con lo dispuesto en algunos decretos reglamentarios vigentes. En ese entendido la problemática que se presenta en Cali estaría más en la dinámica de desplazado establecida en la ley 387.

Igualmente le corresponde a la Defensoría del Pueblo, velar por los derechos de esa persona declarante quién tiene derecho a una ayuda humanitaria inmediata por parte de la Alcaldía. Ésta consiste en una ayuda por única vez de alimentación, alojamiento transitorio, transporte y la garantía del resto de los derechos como salud y educación para las personas desplazadas. Esta ayuda generalmente se brinda desde que la persona declara hasta el momento en que la unidad de víctimas se pronuncie sobre la inclusión en el registro. Si la persona queda incluida, la atención no es competencia de la Alcaldía sino de la Unidad de

Víctimas, con apoyo de Personería y Defensoría del Pueblo, y si la persona no quede incluida, tiene la posibilidad de presentar un recurso de reposición, para que se estudie nuevamente el caso con la Unidad de Víctimas. También tiene el derecho a presentar una acción de tutela, buscando que se le reconozca su condición, en este caso, como víctima del desplazamiento forzado intraurbano.

Cuando es reconocido hay en principio dos instancias: ayuda humanitaria inmediata y ayuda humanitaria de emergencia. La primera tiene que ver con alojamiento y comida y para ello Santiago de Cali tiene dispuestos albergues que están bajo la dirección de la Unidad de Atención y Reparación. Cuando la persona cuenta con redes de apoyo en otros barrios de la ciudad, se le dan bonos de comida que canjean en almacenes de cadena. La ayuda humanitaria de emergencia se otorga de acuerdo al grado de vulnerabilidad de la persona, puede constar de algunos subsidios para mitigar ese grado de vulneración, los cuales pueden ser bimensuales si se inscriben dentro del programa de Acción social, que cubre nutrición y salud.

En síntesis, de las observaciones anteriores se desprenden elementos relevantes concernientes al objeto de estudio de esta Tesis. *Primero*, la existencia de una carencia normativa que reconociera y garantizara los derechos de la población afectada por el desplazamiento intraurbano, puesto que el concepto mismo se ha ido construyendo conforme a los acontecimientos presentados y a las reconfiguraciones de las formas de violencia en el país, especialmente en las ciudades. *Segundo*, que los fallos de tutela, sentencias y Autos proferidos por Jueces y por la Corte Constitucional han sido importantes para interpretar de forma amplia e incluyente la legislación existente sobre víctimas de la violencia y en este caso de acciones de desplazamiento forzado intraurbano, disponiendo su atención por parte de las instituciones encargadas de ello. De acuerdo a los dos puntos anteriores, las víctimas de esta problemática son coaccionadas a abandonar sus lugares de residencia y buscar refugio en otros barrios vulnerables de la ciudad, por la acción de pandillas barriales con posibles vínculos con las Bacrim, también estarían reconocidas y cobijadas por estas reglamentaciones.

Tercero, retomando el llamado de la Corte Constitucional a la Mesa de Estudios Permanentes, dado el carácter “nuevo” y “coyuntural” que se la ha otorgado al desplazamiento intraurbano (como se expuso al inicio) por parte de entidades estatales como la Personería, no resulta pertinente excluir de facto las posibles relaciones entre los actores que generan estos hechos en la ciudad, como las Bacrim actuando de manera articulada con pandillas barriales, con la multiplicidad de elementos y mutaciones del conflicto armado interno, en especial en los centros urbanos.

Y por último, que el reconocimiento de las víctimas de este tipo de desplazamiento por parte de las instituciones y de la Corte constitucional a través de las disposiciones normativas mencionadas, no hubiese sido posible sin la movilización de los grupos de familias afectadas por esta problemática en distintas ciudades del país, especialmente en Medellín, a través del mecanismo de Tutela amparado en la Constitución política de 1991 donde se manifiesta el carácter de Colombia como un Estado social de derecho y las implicaciones que esto tiene con respecto a la garantía de derechos ciudadanos, en especial cuando estos últimos son vulnerados de forma sistemática.

En síntesis, pese a la tensión que representa el carácter neoliberal del actual Estado colombiano procurando el desmonte del Estado social de derecho, el acceso al conocimiento de la ciudadanía, en especial de los sectores vulnerables, sobre el enfoque de derechos que aún se conserva en la Constitución del 91, resulta fundamental para reconocer y exigir sus demandas y establecer mecanismos para la protección y/o restitución de sus derechos por parte de la institucionalidad. Sin embargo, desde la perspectiva de las víctimas, esas disposiciones parecen no haber sido suficientes para lograr acciones articuladas entre las entidades competentes, con el conocimiento suficiente sobre la problemática, para atender al creciente número de personas impactadas por el desplazamiento intraurbano en la ciudad de Cali. A estas insuficiencias refiere el siguiente capítulo, a partir del análisis de los datos construidos en el trabajo de campo.

CAPÍTULO IV

DESPLAZAMIENTO INTRAURBANO EN LA COTIDIANIDAD DE LAS VÍCTIMAS: DOS HISTORIAS DE VIDA DESDE EL DISTRITO DE AGUABLANCA.

IV.1. Brisas de Comuneros: el inicio del desplazamiento forzado intraurbano para Carlos y María*⁴⁰

Carlos y María tienen en común algunos aspectos. A pesar de la diferencia de edades, de vivenciar roles distintos, así como las percepciones de la realidad que los rodea, sus trayectorias de vida están marcadas por el desplazamiento forzado rural-urbano, como consecuencia del conflicto armado. Además sus cotidianidades se cruzaron en un mismo escenario: La invasión Brisas de Comuneros, lugar desde donde también fueron desplazados hacia otros barrios de la ciudad, por la violencia accionada por pandillas urbanas del sector. Este territorio, denominado dentro del Plan de Desarrollo de la ciudad de Cali como uno de los asentamientos irregulares o de desarrollo incompleto, se encuentra ubicado en el Distrito de Aguablanca, más exactamente en la comuna 15. La descripción que a continuación se hará del espacio, corresponde a las observaciones hechas como parte del trabajo de campo realizado.

El acceso al barrio fue posible como parte de las funciones de la Fundación Servicio Juvenil Bosconia Marcelino- Cali⁴¹, en donde permanecí en calidad de

⁴⁰ Ver en anexos mapa con trayectorias del desplazamiento intraurbano relatado por Carlos y María.

Como parte del proceso de aportación de sus historias de vida para el presente trabajo, María, Carlos y su madre (a quien se le consultó previamente sobre la conveniencia de acceder al testimonio de su hijo), pidieron citarlos sólo bajo un nombre diferente, por motivos de seguridad. El nombre del padre de la parroquia del Barrio Marroquín también fue cambiado.

⁴¹ Organización social de carácter privado sin ánimo de lucro, que se dedica a la protección, educación y formación para el trabajo y el desarrollo humano de niños, adolescentes y jóvenes en situación de exclusión social. El propósito de la capacitación es formar laboralmente, mediante programas técnicos y de formación complementaria a personas emprendedoras, ofreciéndoles oportunidades de participación en el desarrollo económico y social del país (Fundación Servicio juvenil Bosconia Marcelino, 2011). La fundación está contratada por el Instituto de Bienestar Familiar – entidad estatal encargada de velar por la protección y restitución de derechos de la

practicante dentro del equipo psico-social, teniendo la oportunidad de acompañar procesos de algunos niños y jóvenes en situación de vulneración de derechos. Esta fue la manera como conocí a Carlos, un joven de 17 años de edad, nacido en Cali y descendiente de una familia que fue desplazada desde el Pacífico colombiano (departamento del Chocó, Bajo Baudó) hacia la ciudad de Cali por el conflicto armado, estableciendo su residencia en la comuna 15 del Distrito de Aguablanca.

Como parte del proceso de protección y restitución de derechos, resultaba importante conocer el contexto de vulneración que afectaba a Carlos, de modo que, durante los meses de desarrollo del trabajo de campo, se llevaron a cabo dos visitas al sector -en calidad de visitas domiciliarias- a la residencia donde se encontraba viviendo una de sus hermanas, que no es la misma en la que vivió Carlos, su mamá, otra de sus hermanas y su hermano menor. Ella se rehusó a abandonar la zona porque quiso continuar con su proyecto de vida allí, junto a su compañero e hijo. Dadas las situaciones de violencia urbana registradas, para realizar la visita al sector fue necesario, como parte del protocolo de la fundación, pedir apoyo al cuadrante del sector (patrulla de policía) y quienes íbamos como apoyo psico-social debíamos portar los chalecos con los respectivos distintivos. Estos últimos tienen un valor simbólico, pues a pesar de ir con una patrulla, los habitantes reaccionan de manera diferente a estar en una actitud defensiva cuando observan los chalecos.

Incluso, en una de las visitas, se unieron al recorrido dos habitantes del asentamiento, en calidad de acompañantes y para ofrecer algunas apreciaciones sobre el sector. Prefirieron no dar sus nombres, salvo uno de ellos que se identifica con el apodo con el que es conocido: “a mi dígame Lembé”, quien es originario de la ciudad de Tumaco, territorio ubicado en la costa del Pacífico Colombiano, desde donde fue desplazado por las Bacrim (Bandas criminales). De

niñez y adolescencia colombiana- para acoger a los menores de edad en situación de vulneración de derechos (maltrato intrafamiliar, vida en riesgo, entre otros aspectos).

manera que, así como la familia de Carlos, “Lembé” y varios de los habitantes del sector tienen en común ser desplazados por la violencia, desde el campo hacia la ciudad, lo cual ratifica a la ciudad de Cali y en especial al Distrito de Aguablanca como receptor de una cantidad importante de población desplazada, en su mayoría afrocolombiana, tal como se expuso iniciando el trabajo, así como también evidencia que la oferta institucional estructurada a partir de la Ley 387 de 1997 para atender el fenómeno del desplazamiento, no ha cobijado a las víctimas que como ellos, siguen siendo sujetos de exclusión dadas las condiciones en las que residen en este asentamiento de desarrollo incompleto.

Brisas de comuneros es un asentamiento de no muy grandes dimensiones. Alrededor de tres manzanas conforman el lugar. A las afueras del mismo, hay dos calles principales que conectan el lugar con otro de los barrios de la comuna 15: Comuneros I. Dentro del asentamiento no hay vías pavimentadas, los callejones son estrechos y a lado y lado de éstos se encuentran sucedidas unas tras otras las construcciones en las que habitaban varias familias⁴². Es preciso señalar que las características de poblamiento del sector se inscriben dentro de los procesos organizativos mencionados sobre la historia de la conformación del Distrito de Aguablanca. Es decir, bajo la consigna principal de abogar por el acceso a vivienda digna para la población empobrecida, regularizando la situación de informalidad del asentamiento, apelando al establecimiento de canales de comunicación y negociación con entidades estatales, en este caso, con la alcaldía de la ciudad. En este sentido han sido fundamentales los procesos organizativos comunales, apoyados por funcionarios de la Personería y ONG, en especial en cuanto al acceso al conocimiento de las disposiciones sobre los derechos constitucionales por el acceso a la vivienda, a los servicios públicos domiciliarios, y demás servicios que garanticen calidad de vida (Clichevsky: 2006: 25).

⁴² En el trabajo de Natalia Salazar, sobre la historia de la conformación de Brisas de Comuneros, a partir de una entrevista con uno de los líderes y fundadores del Sector, Alberto Rentería, se habla acerca de dos mil habitantes residentes en el lugar, en su mayoría, afrocolombianos provenientes de la costa Pacífica Colombiana, específicamente de los departamentos de Chocó, Nariño, Puerto de Buena Ventura del departamento del Valle y del departamento del Cauca (Salazar: 2011: 43)

Los materiales de las viviendas son diversos, unas estaban hechas con ladrillo y cemento, otras de bareque, madera, así como también las había de lata y plástico. También se aprecian varias casas en ruinas y otras en proceso de construcción. Existe una mezcla entre el polvo, tierra y piedra de las calles con algunos pasajes de maleza verde alrededor de algunas partes del barrio. Entre los callejones que separan las casas y por donde transita la gente a pie, también se observan pequeños hilos de agua pasar por canales improvisados a los costados de las calles, son aguas lluvias que no alcanzan a ser contenidas por el alcantarillado que los mismos habitantes fueron adecuando durante el proceso de asentamiento y organización del sector, puesto que al ser un asentamiento de desarrollo incompleto no cuenta con la infraestructura de los barrios que si se encuentran dentro del plan de ordenamiento. Existen conexiones de agua y energía, sin embargo no todas las casas cuentan con estos servicios, pues son conexiones “pirata”, es decir informales, así como pirata es el transporte que utilizan sus habitantes para desplazarse a otros sectores del distrito de Aguablanca o para “ir a Cali” por medio de Jeeps envejecidos que en su parte trasera transporta entre 10 y 15 personas, también son conocidos popularmente como “gualas”, pues en su imaginario, Cali es una ciudad cercana al asentamiento pero de la que no se sienten parte. No hay muchas zonas de recreación, como canchas para hacer deportes, por lo que en algunas de las angostas calles del asentamiento se observan niños corriendo y jugando con palos en la mano. Sin embargo, si existe una especie de caseta comunal, utilizada para reuniones y otras actividades colectivas y de organización. También se pueden encontrar pequeños grupos de habitantes, hombres y mujeres, reunidos en algunas esquinas, sentados, departiendo, escuchando música, jugando cartas o dominó. Algunos de ellos toman bebidas alcohólicas escuchando música con alto volumen y consumen sustancias alucinógenas.

Las personas residentes que acompañaron el recorrido comentaban que así suelen ser las dinámicas del lugar cuando “las cosas están tranquilas”, al contrario, cuando se vivencian temporadas de enfrentamientos entre pandillas “se calienta el barrio y asomarse a la calle puede costar la vida”. “Lembé”, al igual que

varios hombres del sector trabajan especialmente en la construcción, cargando bultos o como parte de los servicios de limpieza de la ciudad (barrenderos o recolectores de basura) aunque comenta que no es fácil emplearse, pues expresa con seguridad que las personas que habitan el lugar son discriminadas por residir allí, por eso la mayoría de ellos vive del “rebusque”, es decir, ventas ambulantes u oficios informales que permiten obtener algún dinero para vivir el día. Las mujeres, en especial las que son cabeza de hogar, suelen ejercer las ventas ambulantes con productos como chontaduros, aguacates o frutas. El servicio doméstico también es una de las actividades económicas que ejercen las mujeres, como la mamá de Carlos, doña Alberta.

Carlos⁴³, habla con mucha propiedad sobre *Brisas de Comuneros*, en especial de sus múltiples experiencias de vida allí, pues según dice, ha sido su hogar desde que nació. Desde que tiene memoria, se recuerda de niño corriendo por las pequeñas y empolvadas calles de la denominada invasión, pues allí su mamá, doña Alberta, tenía una casa de bareque y ladrillo, la cual debieron abandonar por la violencia que sacudía al sector y de la que también era partícipe Carlos, quien era miembro de una de las pandillas de la zona, conocida por las autoridades como Palmas de Milor. Sin embargo, esa violencia no era novedad para él, pues se crió en medio de ella, razón por la cual su mamá decidió mandarlo a sus once años para el corregimiento de Munguidó, ubicado en el departamento del Chocó, donde antes del nacimiento de Carlos, su familia había sido víctima del desplazamiento forzado que los condujo hacia la ciudad de Cali. De su niñez en el barrio tiene varios recuerdos, todos ellos coinciden en las vivencias sobre “andar la calle” en compañía de otros niños.

Yo mantenía así gamineando en la calle, me decían que no andara la calle y yo me iba por allá pal, yo me iba para el semáforo con Víctor, el que mataron. Me iba pal semáforo con los hermanos de él y con un poco de

⁴³ Carlos, para el momento de la entrevista, se encontraba interno en la Fundación juvenil Bosconia Marcelino de la ciudad de Cali.

gente, yo siempre me iba pal el semáforo y le ayudaba a mi mamá y cuando ella no tenía yo le daba pa' su pasaje, le daba plata a ella.

Cuando yo estaba más pequeño yo si estudiaba, yo estaba en segundo de primaria, y ya en tercero fue que me salí. Allá al colegio iban unas personas, que de una fundación o no sé qué, entonces la directora del colegio nos inscribió a unos, no ha todos, y ahí en esa fundación, uno tenía que ir como a la sede, si? Eso quedaba en Comuneros, no en la invasión sino en el barrio Comuneros, y allá le daban a uno refrigerio, cuando uno iba a entrar a estudiar le daban los útiles y los uniformes, que los zapatos y esas cosas y también nos daban una plata, pues no era mucho, eran como treinta mil pesos, eso lo daban como cada dos meses. Y una vez a nosotros nos dijeron que escribiéramos unas cartas, que eran para la gente que nos ayudaba, como unas padrinas? Madrinas, eso. Y entonces a mí por lo menos una de las señoras de la fundación me dijo que si necesitaba una cicla para ir al colegio o cosas así, que yo la podía pedir a mi madrina en la carta. Yo no creí que fuera verdad, pero yo escribí y al tiempo sí, me llevaron la cicla al colegio pero ese día no fui, entonces yo subí a la fundación por la cicla y llamaron a mi madrina y me la pasaron. Ahí hablé con ella y le dije que gracias. Al tiempo yo me salí de la fundación, es que a nosotros, bajando ya de allá y pasando por Comuneros, nos paraban siempre unos manes ahí, a quitarnos la plata. Nos sacaban un puñal y a robarnos la plata y uno pues todo peladito ahí...en eso yo tenía como ocho años y por miedo uno no hacía nada, le quitaban a uno todo.

(...) Brisas era muy caliente, allá daban mucho plomo, se metían a las casas así a tumbar puertas, pero igual la casa de nosotros no la alcanzaron a tumbar. Pasaban pateando puertas y la que se caía se metían a robar. En mi casa pegaron una patada y la puerta quedó firme, mi mamá siempre le ponía su palo a eso, entonces la puerta no se cayó, entonces ellos siguieron de largo dando pata ahí, y se metieron a una casa a robar, y así y a un señor lo mataron y después al tiempo, mi hermana estaba con el

marido de ella ¿no? Sentado, estaba ahí un día por la tarde, yo no sé si lo tenían fichado. Él entró a la casa, yo estaba con un primo ahí hablando con él, cuando él me dice “ve echale ojo, mira esos manes son como raros” yo, “sisas, ve esos manes vienen” cuando yo pillo que la puerta está abierta ¿no? El marido de mi hermana le dijo que tenía hambre, que si ya estaba el almuerzo. yo estaba ahí parado, iban a ser las doce, pero ya el almuerzo ya estaba hecho entonces él llega y la puerta está ajustada, porque la puerta siempre mantenía ajustada, y los manes entran a la casa y él está de espaldas, así de espaldas, y mi hermana está mirando a los manes y les dice ¿qué pasó? y el marido de mi hermana voltea a mirar y lo cogen ahí y “Pra pra pra” lo mataron ahí en la casa de nosotros y de ahí es que yo dije no, no aguanta, yo no voy a vivir más aquí y me fui a vivir un tiempo donde mi Papá, pero otra vez mi fui para el barrio, pues a estar con mi mamá y normal, pues eso es lo que hay (...) si me daba miedito, porque mucha cosa caliente, pero entonces yo me iba para mi semáforo a trabajar todo el día y volvía ya tarde, como a las 8 o 9 de la noche. Uno tenía que andar con mucho cuidado, yo más o menos sabía por dónde agarrar pero cuando uno se encontraba a esos manes en las esquinas o que de repente le salían a uno y decían “vea menor, regáleme para los cigarrillos...regáleme 200 pesos” pues yo se los daba porque sino esa gente le podían pegar las puñaladas a uno, porque también todo el tiempo estaban drogados .Entonces yo iba y me hacía mi plata porque yo le dije a mi mamá que ya no gastara plata en mí, que yo le iba a ayudar a ella. Yo tenía una alcancía y ahí metía una parte de lo que me ganaba en el semáforo y pues como yo me había salido del estudio, tenía todo el día para levantarme platica, sobre todo para diciembre, para yo comprarme mis cosas, mis zapatos, mi ropa para estrenar. Pero allá las cosas se empezaron a poner más feas, llegaron los Buenaventureños a querer montar su imperio allá y se daban plomo por todo lado. Ahí fue cuando mi mamá me sacó para Chocó a trabajar con mi tío Soilo. Es que, mire, uno se tiene que defender y saber dónde está lo bueno, ¿si pillá? Y mi mamá al ver que yo ya estaba empezando a andar

con una gente ahí me dijo que me tenía que ir allá a donde mi tío y mi abuela (...) pero allá en Chocó eso también estaba más caliente, me fui a meter a una olla peor. De allá me tocó venirme otra vez porque me iban a matar.

María –otra de las personas entrevistadas- es una mujer de 45 años de edad. Nació en el departamento de Caldas, del que se marchó junto con su familia cuando tenía 7 años hacia el departamento de Caquetá, a la vereda Rio Negro, buscando la promesa de buenas tierras para hacerse a una pequeña finca y sembrar. Allí conoció años más tarde al que sería su compañero y padre de sus hijos, que son seis, con quien logró obtener una parcela de tierra para construir su propia finca y vivir de la ganadería y agricultura, principalmente del cultivo de cacao. Dos décadas después, tras vivir el desplazamiento forzado que la condujo hacia la ciudad de Cali, llegó a residir a *Brisas de Comuneros* y relata

(...) al asentamiento llegué ya hace dos años. Resulta que aquí estaba ya mi hermana y mis sobrinos, los hijo de ella pues, mi hermano y su esposa y su hijo, tenían ya como diez años ahí, entonces cuando llegué yo con mis hijos ellos me dijeron: “vea allá atrás hay un lote”, mire vamos a hacerle la casita y entonces sí, ahí en el lote... a mi hermano se lo ofrecieron y él lo estaba pagando, yo le empecé a pagar por cuoticas y tenía pensado hacerlo con la plata de las ayudas por ser desplazada por la violencia del campo, que tampoco es que fuera mucho... la misma gente de ahí, unos amigos de mi hermano y de mi hermana, los sábados y los domingos por la noche me ayudaron a levantar el ranchito y luego ya en diciembre me llegó la ayuda humanitaria y ya nos terminamos de organizar ahí, la casita está en esterilla y zinc pero ahí ya tenía los baños, estaba la luz, el agua, ahí dentro de la invasión. Las casas ahí quedaban pegaditas, yo vivía casi que al lado de la de mi hermano, la casa de mi hermana si quedaba unas casitas más adelante, pero en la misma cuadra... y pues que le dijera yo...uno recuerda el campo, el ranchito, los animalitos que teníamos, las maticas de cacao, la vida allá en sí antes de que las cosas se pusieran feas con la guerrilla y uno

extraña eso. En este lugar al que llegamos, lo bueno es que no llegamos como tan perdidos del todo porque acá ya tenía familia y ellos me ayudaron, pero la invasión...a ver, ese no es un lugar del todo bueno, se vive también en medio de violencia...esas pandillas cuando se alborotan es cosa seria, es mucho el miedo y pues con todo lo que nos ha pasado y siendo uno pobre...uno quisiera algo mejor sobre todo por los hijos, pero no habiendo más, uno que hace si no tiene más opción?

Yo mantenía era casi que encerrada en mi casa también porque tengo a mi mamá, que tiene alzhéimer. Mi hijo el mayor, desde lo que pasó en el Caquetá ya vive aparte, en Risaralda. Mi hija, la que le sigue consiguió marido, entonces ellos viven cerca, en Palmira. Entonces aparte mi de mamá, están conmigo mis dos hijos menores y mi otro hijo, él ya tiene 20 y consiguió trabajo ayudando en talleres de mecánica. Lo poquito que ganaba, con eso me ayudaba para la casa y la comida. El trabajaba en Ciudad Córdoba, allá queda el taller. Los dos niños pequeños, de 11 y 14 años estudian en un Colegio del Vallado, el otro barrio grande que hay cerca de la invasión. Y ellos eran de la casa al colegio y del colegio a la casa, me daba miedo que anduvieran en la calle, casi no salían sino de pronto para la casa de los tíos o sea mis hermanos, a estar con los primos. También salíamos a veces cuando las cosas estaban calmas y llegaban fundaciones o la fundación de la policía a hacer actividades ahí en la caseta, como las ollas comunitarias, o que le daban regalitos a los niños en diciembre o así.

La descripción del barrio que comparten Carlos y María, demuestra diferentes apreciaciones sobre el mismo. El primero nació ahí, se crió ahí, por lo que a parte de los lazos y actividades familiares, empezó a construir su primeras redes de socialización en el sector. Cuando rememora el barrio, lo hace demostrando cierto apego hacia éste, o más bien hacia las relaciones y dinámicas que él desarrollaba en torno al espacio. A pesar de las carencias y las situaciones de violencia, se le escapa una sonrisa cuando recuerda su niñez andando las calles del lugar y trabajando en los semáforos porque era la posibilidad de obtener

recursos y ayudar a su mamá. Quizá también sonríe porque son las etapas previas a su vinculación con una de las pandillas del sector.

Mientras que María se siente más ajena al lugar, lleva menos de tres años ahí y en ese lapso tuvo que afrontar el asesinato de su hermana y posterior desaparición de su sobrino. Además, su trayectoria de vida había transcurrido en el campo, donde había establecido su proyecto de vida, siendo una líder destacada dentro de su comunidad y donde sus dinámicas cotidianas contrastaban enormemente con las de la ciudad. Cabe señalar también, que a pesar de considerarse recién llegada y ajena al devenir del lugar, ella destaca el papel de los vecinos en la construcción de su rancho.

Esta reconstrucción se enriquece también con el trabajo realizado por Natalia Salazar (2011) sobre la historia de *Brisas de Comuneros*, que permite rastrear el desarrollo de procesos organizativos liderados por los primeros habitantes del sector, cuyo principal insumo ha sido la solidaridad entre vecinos. Esos procesos fueron agrupados bajo la organización barrial llamada *Providas*, desde donde se aboga por la legitimación del asentamiento bajo la figura de barrio, lo cual traería beneficios para sus habitantes, en especial a nivel de infraestructura, además de enarbolar la bandera de la lucha por la vivienda digna.

IV.2. Huellas del re-desplazamiento forzado en las Historias de vida de María y Carlos.

El departamento del Chocó y Caquetá son regiones que han sido fuertemente golpeadas por la guerra. El primero es el territorio donde desde tiempos coloniales se ha asentado la mayor cantidad de población afrodescendiente del país. También es una zona estratégica por varios motivos, rica en tierras, recursos naturales, atravesado por el río San Juan y Atrato y con una amplia zona costera sobre el océano pacífico, características que han jugado un papel fundamental en los conflictos que ahí se desarrollan entre grupos guerrilleros, paramilitares-bandas criminales y ejército por lograr el control de esta zona, atractiva especialmente por la explotación minera y rutas para el

narcotráfico, razón por la que ha sido una de las zonas que ha registrado mayor número de personas desplazadas a nivel nacional desde finales de la década del ochenta. Según la investigadora Laura Silva (2017), basándose en datos producto del monitoreo de Acnur, en el 2016 este departamento registró el mayor número de desplazados en el país, con 6900 personas huyendo del territorio a causa del conflicto.

La región del Caquetá es rica en yacimientos de petróleo y ganadería. También fue un lugar de gran importancia para las actividades de grupos armados participantes del conflicto y escenario de enfrentamientos entre estos últimos, legales e ilegales. En el año 1998, el corregimiento de San Vicente del Chaguan, ubicado dentro de éste departamento fue el epicentro de los diálogos de paz durante el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC, con fuerte presencia en el territorio, los cuales no lograron concretar un acuerdo para firmar la paz.

Estas precisiones son necesarias para contextualizar las trayectorias de vida de María y Carlos, pues estas regiones fueron el espacio donde transcurrían sus dinámicas de vida, en el caso de María y su familia, y en el caso de la familia materna de Carlos, desde donde fueron forzados a desplazarse hasta llegar a Cali, constituyendo los antecedentes previos al desplazamiento intraurbano acontecido en la ciudad de Cali.

Dado el contexto de violencia urbana vivenciada en el asentamiento *Brisas de Comuneros*, por decisión de la mamá de Carlos, él regresó a vivir con su abuela y tío a un corregimiento del Chocó, diferente del que fueron desplazados inicialmente. Ahí transcurrió su cotidianidad hasta que, al igual que su mamá y sus hermanas, se vio obligado a regresar de nuevo a Cali por la violencia armada en la que se encontraba inmerso el territorio.

Para llegar hasta Munguido había que agarrar mera lancha, porque no había carretera porque eso es pura agua para llegar ahí, toca irse por el río San Juan y luego por el Munguido. Ese pedazo es pura selva y ya cuando uno llega es que hay las casas de madera y una cancha. De allá me

acuerdo que me la pasaba muy aburrido, porque mi abuela me regañaba mucho y a mí nunca me ha gustado eso. Me puse a trabajar ayudando a mi tío cortando madera para venderla o cargando bultos, llevándolos de aquí para allá...él le mantenía diciendo a mi mamá que me dejara allá para que le ayudara, que él me ponía a trabajar y que iba a mantener ocupado. Entonces ya allá yo me iba con mi tío...yo tenía otro tío, por parte de mamá también pero él se murió. Estaba cortando madera, y cortando un árbol, le cayó encima y pues lo mató. Cortar madera es difícil, pero ya uno se va acostumbrando, ¿no ve que allá lo ponen a uno en esas desde peladito? Con mis primos y la gallada pues íbamos a río también, unos charcos muy bacanos, pero había que tener cuidado, allá la gente se ha ahogado, porque se pone muy bravo ese río y chupa a la gente. Mi tío decía dizque “es el espíritu del río reclamando lo suyo” (...) como allá también había mucha vaina llegando, mucha volqueta y maquinas pa’ sacar oro o no sé qué más del río y en un pedazo del río se bota mucha basura, sobre todo para noviembre y diciembre, porque son los carnavales del Bunde, todo el mundo se pone a bundear y es fiesta por todo lado.

Después empecé a andar en la calle con mis primos, con Andrés, y me hice unos amigos que eran de la banda (...) Aguilas Negras⁴⁴, porque mi primo, o sea Andrés, ya camellaba con ellos, con las Águilas. Robábamos motos, platinas, así, las vendíamos y nos daban buena plata, por eso me tocaba andar armado, ellos nos las daban. Una vez nos fuimos como a una sede que había allá, no era el colegio pero a veces daban unas clases y trabajaba una gente. Nos metimos por la noche a robar y nos sacamos unos computadores. Eso se lo llevan a Quibdó pa venderlo, y a nosotros nos dieron una plata cuando entregamos lo que nos habíamos robado.

⁴⁴ El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –Indepaz– denomina a las Aguilas negras como una estructura narcoparamilitar, compuesta por paramilitares no desmovilizados del proceso de 2005, exparamilitares reincidentes y delincuencias común. Articulan aspectos ideológicos del paramilitarismo, como la guerra contra la insurgencia, “amenazas y asesinatos a líderes sociales, defensores de derechos humanos, colectivos y movimientos sociales, entre otros” junto con actividades dentro de la esfera del narcotráfico (INDEPAZ, 2017, pág. 27)

Yo cumplí mis 13 años allá en el Chocó. Empecé a andar la calle con unos manes, de la banda, porque allá uno también tenía que andar con cuidado y respaldado, ¿si me entiende? Se la querían montar a uno por cualquier cosa y por cualquier cosa había pleito y te tiraban a matar (...) yo tomé fusil, allá intenté matar. Andrés tuvo un problema con una gente, porque le pegó al perro de un man y a esa gente no se le puede tocar lo suyo, a nadie se le toca lo suyo, entonces él se tuvo que volar de ahí pero entonces me la querían montar a mí por ser el primo, “ahí está el gordo, el primo de Andrés, entonces qué?”, mantenían diciendo. Yo les decía “a mi trátenme serio” y como yo estaba respaldado por la gente de la banda, no me volvieron a tocar.

Un día, en una fiesta que había por allá había gente de otras bandas, la banda de los “Alamos” también y uno de ellos empezó a tirarme a mí, estaba picadísimo a loco, que me iba a “partir”, y yo no me iba a dejar y le pegué un tiro, yo no lo quería matar entonces le pegue el tiro en el pie. Por eso me tocó salirme de allá y me mandaron otra vez a Cali con mi mamá, porque dizque que me iban a matar. Pero antes de irme me fui con mi tío para Bebará, también tocó agarrar lancha otra vez. Mi tío Soilo también tenía temporadas en las que iba allá a trabajar, con la madera, a pescar o en unas fincas, entonces me llevó con él para tenerme allá. Me quedé como cuatro meses y ahora si me fui para Cali.

Por su parte, María recuerda con nostalgia el campo desde el sentido de territorialidad, dados los lazos establecidos en torno a la tierra y sus dinámicas familiares alrededor de ella, generando apego por ese lugar. Habla con la mirada fija en el horizonte de la que todavía llama su tierra, describe las actividades que como familia solían ejercer diariamente. Recuerda a sus animales, las vacas y marranos, sus pastizales, cultivos de maíz y cacao. Ella se expresa con la tenacidad y determinación forjada por la vida campesina, su rol como líder

comunitaria⁴⁵ y también por las experiencias dolorosas. Describe como un momento de quiebre de esa vida que ahora, el reclutamiento forzado de uno de sus hijos, que en ese entonces tenía 13 años de edad, por parte de uno de los frentes guerrilleros que operaban en la zona.

En ese entonces mi hijo mayor tenía trece años (...) en un momento en el colegio llegó el catorce frente a reclutar, entre ellos, se llevaron a mi hijo, un primo y a dos muchachos más (...) pues yo me puse pilas y gestioné cómo hacer para que me lo devolvieran porque a los dos días apareció uno de los niños que habían llevado muerto, él se puso de terco a no seguir y a no seguir y lo mataron, entonces yo ya me puse pilas, hice todo lo que tenía que hacer y me tocó meterme a San Vicente a hablar con alguien del secretariado de la guerrilla.

⁴⁵ María tenía un papel destacado en su comunidad. Fue presidenta de la junta de acción comunal de su vereda y lideraba los procesos de varias madres dentro de los programas estatales de Familias y Jóvenes en Acción, por lo que tenía relación cercana con la personera de la zona. Al respecto, ella expresa: “como madre líder lo que se hace es ayudar a la gente a que tengan sus papeles al día, a que estén pendientes de los controles de salud, a que mensualmente se le hace un encuentro de cuidado y una integración a todas las mamás, ahí participan de una olla comunitaria, de algún refrigerio, se charla, se comentan de pronto las inquietudes del programa, el por qué no les llegó pago, por qué no se está cumpliendo con los controles de crecimiento y desarrollo de los hijos, porque sucedía que muchas mamás por recibir el sueldo de Familias en Acción matriculaban un poco de niños, y por ahí como a los dos, tres meses como ya el niño está matriculado y estaban ganando no lo mandaban más a la escuela, entonces era como a incentivar a las mamás a que no lo hicieran por ese interés, sino por el proceso del niño, por el bienestar del niño. También se trabajaba como por sacar a las mujeres de esa ignorancia tan grande que se vive, que debido a esa ignorancia es que hay el maltrato intrafamiliar, que vemos en el campo muchos hombres maltratando demasiado a la mujer, les pegan, las usan como esclavas porque uno en el campo trabaja prácticamente las 24 horas del día sino no come, entonces comienza uno a incentivar, a decirles que “vea salga, vea entérese de los negocios de su marido porque ellos llegan a faltar y ustedes les queda una finca, no saben cómo manejarla, cualquiera viene y se aprovecha de ustedes, que mire que hay que estudiar, que mire que hay tales programas”... esa es la función de uno como madre líder, no es más”.

Por el tiempo que los reclutaron, días antes los esperaban en un potrero cuando ellos salían del colegio y empezaban a lavarles como el cerebro y ya estaban como lográndolo, pero nosotros no sabíamos de eso porque siempre de la casa al colegio donde ellos estudiaban había dos horas a caballo y los muchachos tampoco comentaron nada (...) cuando un día no volvieron, no volvieron y él me dejó una nota donde que me decía mamá estoy bien y lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque me obligaron. Resulta que cuando él iba por camino pasaba un arriero y era conocido de nosotros y se llamaba don Crispiano, cuando el niño pasó le tiró el papel por un ladito y luego fue que vino a la casa y dijo que venía a traerme una mala noticia, “vi que la guerrilla llevaba el niño suyo el hijo (...) ellos iban en un caballo, ahí atrás.” Inmediatamente yo ensillé una mula, llegué a una parte que se llama caimán medio, pues pensando que ahí en el río los alcanzara, ahí había uno de ellos, de la guerrilla, me dijo que él no los tenía, que él iba a averiguar a ver qué había pasado, entonces yo ya viendo eso, al otro día me fui pa' San Vicente que estaba como a 8 horas a caballo. Yo no me fui sola, fui con algunos conocidos que saben andar la zona. Después tuvimos que agarrar un carro que nos llevara a la vereda de Puerto Rico, eso fueron como tres horas y de ahí a donde ellos tenían las oficinas había como unos veinte minutos. Yo ya fui y hable con ellos, me dijeron qué comandante se lo llevó, era el comandante Pablo y entonces me dijeron que tenía que ir a la Chipa y preguntar por él para que e diera razón de mi hijo. Yo me devolví para mi casa, descansé y luego arranqué otra vez, de la casa a la Chipa había unas nueve horas a caballo. La chipa es un caserío donde ellos los domingos salían a rumbear. Cuando llegué pregunté por el presidente de la junta, porque allá los presidentes eran contactos obligados de esa gente, no ve que ellos eran los que manejaban todo allá? Ellos eran la autoridad. Cuando le dije a que venía, el señor me dijo “yo creo que usted es la persona que están esperando, siéntese ahí que ahorita alguien llega y se van con él”. Cuando ya me buscaron me dijeron, “usted viene a buscar algo en la comunidad”, y yo le dije que “mi*

deber es que vengo acá a reclamar mis derechos como madre, yo quiero saber ¿qué va a pasar con mi hijo, por qué me lo trajeron? Y ellos dijeron “usted sabe que nosotros necesitamos gente y sus hijos están en una edad apenas de entrenamiento, de irlos adaptando a la causa de luchar por un país” y bueno empiezan a darle la teoría que ellos tienen y en esas llegó el comandante, bajamos unas calles y ahí estaban los chinos, yo pude ver al mío, yo arrimé y le pregunté “¿cómo está?” y dijo que “aburrido mami.. si nos trajeron que íbamos hacer, pero yo no quiero esto yo me quiero ir, yo me quiero ir”. Entonces yo le dije al comandante que él es un niño, que está para jugar, para estudiar (...) no está para estas acciones de grande y yo como mamá lo vengo a reclamar, yo me lo vengo a llevar, o yo veré por él qué tengo que hacer. Me dijeron “no, eso no va poder ser, eso está grave (...) además va usted y se pone a hablar por ahí”, yo les dije que solo quería sacar a mi hijo de ahí (...) en esas el niño se puso a llorar y yo les dije que no me iba de ahí hasta no tener una respuesta y ojalá sea que yo me podía llevar mi hijo. Me preguntaron que por qué no había ido los demás papás, “yo en realidad a nadie le comente que venía pa'cá, yo me vine a reclamar lo mío”. Me dijeron que tenía que esperar, que ellos me llamaban. Yo me devolví a mi vereda pero me puse a hacer una carta y a recoger firmas (...) y yo me vine y recogí firmas de la comunidad hice una carta y recogí firmas y recogí firmas. Yo hice la carta reclamando a mi hijo por menor de edad, les decía que él no quería estar allá y por qué razón lo iban a obligar. Yo me fui a entregarla pero con más gente, entonces fuimos a reclamar ya no solamente a mi hijo, sino también a los otros niños. Nos alarmamos más porque yendo de una vereda a otra, en una de las trochas, al pie del río encontramos a uno de los niños muerto. Pensábamos que se había ahogado pero cuando lo volteamos tenía dos tiros. Entonces por eso nos fuimos a reclamar. Yo fui con más gente pero me hicieron entrar a mi sola. Me dijeron “usted no es tan tonta y eso no nos conviene tampoco”, entonces les dije “yo simplemente y lo único que estoy buscando es mi hijo (...) créame que si esta fuera una decisión propia de él y con un uso de

razón me tocaba darme al dolor de la decisión que él hubiera tomado, pero es que él es un niño y ¿si no lo reclamo yo como mamá quien lo va a reclamar?” Por allá ellos se reunieron, hablaron entre ellos y de pronto dijeron que yo no los dejaba así muy tranquilos y entonces me dijeron “¿está dispuesta a pagar para entregarlo?” y les respondí “yo en estos momentos no tengo plata pero va tocar hacer lo que pueda”. Entonces me dijeron “reúnanos cinco millones pa’ pasado mañana y se lleva a su hijo”. Los otros niños se quedaron, ellos mismos dijeron “no nos queremos ir” él único que no quería quedarse era mi hijo. Entonces yo ahí mismo me fui, vendimos ganado, pedí plata prestada y reuní los cinco millones y bajamos y los entregamos y sí me entregaron a mi hijo, pero entonces yo en vista de eso lo saqué de allá, yo lo mande para Popayán con un hermano por parte de papá. El no volvió. Sólo como 2 o 3 veces al año, que para el día de la madre o una navidad (...) eso quedó así hasta cuando mi hijo, el segundo, se fue a prestar servicio militar.

Estas otras realidades, por fuera del control institucional y presentes en diversos territorios del país, dejan entrever aspectos interesantes para el análisis. Retomando a García Villegas (2017), ante la debilidad e ineficacia manifiesta de la figura estatal, es evidente la movilización asumida por la ciudadanía en el intento por resolver sus necesidades más urgentes. Son ellos mismos quienes se organizan y establecen los puentes con sus interlocutores.

En este sentido, también es importante señalar que, el concepto de *concesión-conquista* (Pastorini: 2000) podría facilitar la comprensión de otras instancias que dejan por fuera al Estado como uno de los actores fundamentales en este entramado –aún cuando la autora analiza la relación entre ambos conceptos en el marco del Estado- pues en este caso se dio entre María y algunos otros miembros de la comunidad con la guerrilla. Asimismo, el rol de las entidades y funcionarios encargados de la intervención social se desdibuja frente al papel protagónico que va alcanzando la comunidad al ir construyendo alternativas para mediar y hacer frente a las problemáticas que los afectan,

haciendo uso de los saberes adquiridos y del conocimiento de su propio contexto local. Ese entramado de relaciones les permite negociar, conquistar y ceder saberes y estrategias diferentes a los establecidos por la *razón hegemónica-indolente* como expresión de la *monocultura universal* (De Sousa: 2006).

No obstante, a pesar de haberse concretado una alternativa para resolver el reclutamiento forzado de su hijo, las tensiones continuaron siendo parte del entorno de María.

Se empezó a calentar otra vez todo porque el decir de ellos era que mi hijo había preferido prestar servicio militar que irse con ellos, con la guerrilla pues. Entonces era como si fuéramos colaboradores de ellos y en realidad no era así. Un día mi hijo iba a tener licencia y mi dijo “ma, yo voy para allá”, le dije “no papi, váyase para Cali, yo allá lo veo, pero no venga que esto está caliente”, él me decía que tranquila, que él iba rápido, de entrada por salida y que no iba a salir de la casa y pues así fue. Él llegó pero usted sabe, son muchachos y claro, él salió con los amigos que lo vinieron a buscar. Y nada que llegaba y me entra un desespero cuando en esas llegó un conocido a decirme, “es que están persiguiendo a su hijo, lo van matar”, y salgo yo como loca, a correr por esas calles y comencé a llorar y me llama una vecina, me dice “María, venga, no haga bulla, yo tengo a su hijo acá, él está acá” (...) me lo habían perseguido, le habían echado tiros y a él le tocó meterse como en un depósito de basura todo lleno de barro, y estaba ahí todo suciecito, pero no estaba herido, gracias a Dios. Ahí lo escondimos, le avisamos a la personera y ella llamó a alguien del ejército para que lo sacaran de ahí.

Las cosas quedaron así. Yo tenía un localcito en la cabecera, donde vendía como cosas varias, como una miscelánea, me llegó un tipo dizque a preguntar unos precios, luego me dijo “la verdad yo vengo a darle un mensaje, tiene que presentarse en tal lugar a las cuatro de la tarde si no quiere tener problemas”. Yo me quedé muy asustada, llamé a la personera, que éramos cercanas, y ella avisó a alguien de la policía. Quedamos en que

iba al lugar y la personera me acompañó, pero nunca apareció nadie. Luego, a los días me llegó un papel al local, decía “váyase de aquí sapa⁴⁶ si no quiere ver a sus hijos muertos”. Nos tocó dejar todo. Yo entregué el local y la finquita se quedó ahí, un vecino dijo que cuidaba a los animalitos, y nos fuimos para Putumayo, allá había un familiar de mi esposo. Y resulta que también era zona guerrillera, pero bueno, pensamos (...) como allá nadie nos conoce. Nos fuimos a un lote, a una casita que nos consiguió el familiar y allá nos fue a buscar un señor de Caquetá, ganadero conocido de allá, que para que le vendiéramos la tierra, decía que nadie nos iba a dar más por eso, que fuéramos a la oficina de un abogado Manuel, que él nos separaba una cita para que firmáramos las escrituras y pues le hicimos porque ya no podíamos volver. Eso fue por diez millones de pesos, gente que se aprovecha de la necesidad, pero uno con esa urgencia y sin más gente queriendo ofrecerle a uno lo justo, pues tocaba. Utilizamos esa plata para comprar 15 hectáreas en Putumayo, en Puerto Rico, se llamaba la vereda. Sacamos un préstamo en el banco, incluso tengo la deuda en el banco, para sembrar cacao. En la finquita que habíamos comprado quedaron tres hectáreas de cacao, plátano y yuca, y los pescaditos. Allá la vida era parecida al Caquetá. La guerrilla manejaba todo. A usted allá le cobran por cualquier venta que haga, por vender una res, si usted hizo una venta de pescado, por lo que sea (...) el chino mío termino el servicio, ya tenía su bachillerato y pues se vino con nosotros. Porque allá pues los muchachos terminan el bachillerato y ahí quedan, con la vida del campo y más uno de pobre pues peor. A él lo empezaron a molestar, que para que se uniera a la junta, para salir a los paros. Ellos obligan a la gente a que tiene salir a una manifestación, que al pueblo o a la ciudad, que tienen que salir y tomarse todos los campesinos el pueblo, que por la salud, que bueno, ideas de ellos pero lo importante es que las juntas, la comunidad nos tocó salir, empezaron a que salieran entonces ellos le tiran mucho a

⁴⁶ El término hace parte del argot popular: sapear. Se dice que una persona es “sapa” cuando hace las veces de soplón. Cuando en determinados contextos da información que no debería para obtener algo a cambio.

que vayan es la juventud y entonces ya siempre mi esposo pensando en los muchachos, siempre era él el que iba, pues decía “yo a la final yo ya estoy viejo y si me pasa algo ya que, pero los muchachos no” entonces fuera de que él participaba le tocaba salir hacer las caminatas, tocaba una cuota de 500 o 400 mil pesos para sostener el paro mientras ellos estaban en el pueblo. Pero finalmente de allá también nos tocó salir porque nos negamos a que los niños menores, los últimos dos que tengo, recibieran clases que para aprender a defenderse, coger un fusil y esas cosas y resulta que eso nos lo pusieron de condición para darles cupo en la escuela. Yo le decía a mi esposo “si los sacamos del peligro cómo los vamos a volver a meter”. Entonces un día llegaron a la casa y nos citaron, para que fuéramos hasta un caserío, que nos esperaban a las cuatro de la mañana en tal sitio para coger una canoa y pues ir a la tal cita. Esa ya fue la señal, sabíamos que algo bueno de eso no salía, le comentamos a una gente. Yo llame a mi hermano y me dijo “María, vengase para acá, no se haga matar allá”. La gente nos ayudó a esconder a mis hijos en un camión de carga, ahí también íbamos nosotros. Nos sacaron a la capital, a Puerto Asis. Y de ahí ya pegamos par acá, para Cali. Mi esposo no duró mucho acá, él no se adaptó a esta vida en la ciudad. Como él es del Cauca, y allá está la mamá ya muy viejita, él se fue, allá en el campo está otra vez, con la mamá. Yo quedé acá en la ciudad con mi hijo el tercero y los dos pequeños, mi hija pues consiguió su marido y con mi mamá.

Es necesario detenerse en este aspecto, puesto que subraya una de las múltiples facetas del conflicto armado descritas al inicio de la Tesis: el problema de la tenencia de la tierra y el desplazamiento forzado como una estrategia por parte de terratenientes para acaparar grandes cantidades de tierra aprovechando el estado de vulnerabilidad de los campesinos propietarios, con el fin de establecer proyectos productivos a gran escala, también de la mano de multinacionales, como explotación de yacimientos o cultivo de palma africana, por ejemplo. Esto pone de manifiesto las dinámicas del modelo económico neoliberal, la monocultura del progreso, a las que se hizo alusión anteriormente, puesto que se prioriza la

explotación de recursos naturales para favorecer dinámicas económicas de terratenientes o ciertos grupos empresariales en detrimento de los derechos de la población campesina. En consecuencia y como otra de las dimensiones del conflicto, las dinámicas económicas y familiares se vieron impactadas de manera abrupta, pues el desarraigo también trae consigo la ruptura de la unidad y economía familiar.

IV.3. Impactos de la violencia urbana y del desplazamiento forzado intraurbano en las dinámicas cotidianas de la población afectada

Carlos es la expresión de una niñez y adolescencia transcurrida en medio de necesidades básicas insatisfechas y falta de oportunidades para una población excluida de las dinámicas económicas de la ciudad y condenada, en muchos casos como el de la invasión Brisas de Comuneros, a la pobreza extrema.

Cuando volví del Chocó, en mi casa me quedé encerrado como tres meses y ahí volví y me salí a andar la calle... cuando sea salía, fumaba marihuana y hacía todo lo que uno hacía en la calle. Empecé a andar con la gente de Milor, una de las bandas “duras” en el barrio (...) ellos camellaban⁴⁷ con los Urabeños hasta que un día que, me fui para un semáforo, pam! Me sale un “man” al que le decían Estacio, con una pistola y Bum! me echa un tiro, pero no me lo alcanzó a pegar bien y yo (...) me sentí caliente. Me iban a matar porque yo era de la gente de mi zona, de Milor. Estacio era de la banda de “Jimmy trenzas”, los enemigos de nosotros.

⁴⁷ “Camellaban”, es decir, trabajaban. Los Urabeños, conocidos inicialmente como Clan Úsuga y actualmente conocidos como Clan del Golfo, es una estructura armada pos-desmovilización (proceso de paz con paramilitares-2005), heredera de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Esta estructura corresponde a una reorganización de los paramilitares en grupos que posteriormente se convirtieron en bandas criminales –Bacrim- quienes actualmente pueden ser catalogadas como uno de los mayores males que aqueja al país (Martínez: 2016)

La violencia se tornó cotidiana para los habitantes de este sector de la ciudad, donde confluyen pandillas barriales y bandas criminales herederas del paramilitarismo, aliadas o confrontadas entre sí por el control de los territorios y las actividades relacionadas con el narcotráfico que se ejecutan allí. En este sentido, la creación de las denominadas “fronteras invisibles” representó otro elemento que impulsó el crecimiento de la violencia urbana en la zona. Cada pandilla, actuando sola o articulada con una banda criminal, establece dominio de forma violenta sobre un sector de determinado barrio, marcando límites o fronteras con respecto a otro sector del mismo barrio dominado por una pandilla rival. En estos dominios las pandillas controlan no solo el tráfico de estupefacientes, sino todas las dinámicas económicas de los residentes, pues otro de los delitos frecuentemente cometidos en estas circunstancias es la microextorsión, “vacunas” o cuotas de dinero que los pequeños comerciantes y todos quienes habiten casas deben pagar a las pandillas del sector de manera semanal a cambio de “seguridad”. De no acceder al pago corren el riesgo de sufrir daños en sus inmuebles, ser desplazados del barrio o incluso ser asesinados.

Al respecto, el informe de seguridad para los años 2013-2014 presentado por la Personería de Cali, alerta sobre la violación sistemática de los derechos de la población civil residente en el sector por parte de estos grupos armados ilegales, quienes tienen a su favor la situación de extrema vulnerabilidad que caracteriza a estas zonas, y que les facilita cooptar niños y jóvenes como Carlos para integrarlos en sus filas, prometiéndoles sumas de dinero importantes por sus acciones delictivas o artículos como tenis de marca, celulares u otros aparatos tecnológicos que son significativos para ellos en sus entornos, puesto que les otorga cierto status con respecto a sus pares. Estas son las condiciones que impulsan las transgresiones, el quebrantamiento de paradigmas inculcados en la crianza como “ser una persona de bien”, “respetar las normas para convivir en comunidad”, entre otros.

El complejo ambiente social en el que se desenvuelven los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Cali, les dificulta la creación de

un proyecto de vida positivo para ellos y sus familias, aumentando la posibilidad de que terminen insertándose en las dinámicas violentas que están teniendo lugar en la ciudad” (Personería municipal de Santiago de Cali: 2015:18).

Además, el pertenecer a estos grupos sugiere una alternativa para los niños y jóvenes que, aunque esté por fuera de las conductas y normas pactadas socialmente, y teniendo en cuenta la noción de costo-beneficio (donde el costo sería la sanción social, además de la sanción punitiva; y el beneficio sería el acceso a recursos que normalmente no se encuentran disponibles para los sujetos marginalizados), están dispuestos a tomarla. De esta forma, transgreden el estado de cosas que los mantiene excluidos, para adquirir recursos de manera rápida, ante la efímera posibilidad de mejorar sus condiciones de vida.

En este escenario interviene el Trabajo Social, a partir de la demanda de actuar en nombre de la institucionalidad pública, sobre sujetos transgresores, desde una impronta normativa que requiere ser problematizada a fin de evitar reproducir tales situaciones mediante prácticas profesionales estratégicas e interdisciplinarias que contribuyan a cuestionar el orden social capitalista (Malacalza: 2009). Siendo esto así, cabe señalar que tanto la comprensión de las políticas sociales, como el significado social de la profesión -en tanto recurso movilizado por el Estado como parte de la ampliación de su control sobre la sociedad civil,- no puede ser autonomizada de los procesos sociales, políticos y económicos que les dieran origen y en los cuales se desenvuelven. Es decir, este proceso de regulación social, efectivizado principalmente a través de las políticas sociales, pone en tensión el ejercicio profesional al ser polarizado por los intereses de los diferentes sectores, tendiendo a ser cooptado por quienes ocupan una posición de poder, sin que esa tensión desaparezca jamás. (Cruz, 2008)

Prosiguiendo con la reconstrucción de la trayectoria de Carlos, es posible observar cómo operan las dinámicas de exclusión sistemática, que también han vivido sus antecesores (familiares), generadoras de desigualdad. Carlos ha sido un sujeto transgresor desde temprana edad, objeto de intervenciones

desplegadas por los dispositivos institucionales y entidades encargadas de ejecutar políticas públicas para proteger y restituir sus derechos. De ello da cuenta su ingreso por primera vez, a sus 13 años, a una institución bajo la tutela del ICBF (instituto de bienestar familiar), así como suposterior ingreso a la Fundación Bosconia Marcelino, donde se encontraba interno durante el periodo de trabajo de campo del presente trabajo.

A mí me gustaba tener mi plata ¿si me entiende? Tener lo mío, para comprarme mis cosas y para ayudar a mi mamá. Yo quería darle su lavadora a ella. Lo primero que hice cuando recibí plata fue comprarme mis tenis Polo, unas botas blancas que yo quería (...) Pero cuando me dispararon plomo pues a mi mamá le dijeron que me trajera a la fundación, como que fue una vecina la que le dijo que me entregara al bienestar familiar pues para que no me fueran a matar. Pero esa vez a mí no me trajeron acá, sino a otra sede. Ahí yo me quedé y como a los nueve meses me devolví, me fui de ahí pues porque estaba aburrido, me salté la tapia. Entonces volví a andar la calle y me volví a “calentar” (...) me puse más caliente aún porque me puse a robar, a dar los tiros, o sea, yo me daba plomo con esos que me querían venir a faltar al respeto porque sí. En una de esas me cogió un man con una hechiza⁴⁸ y me quemó, me alcanzó a pegar una parte acá por el hombro.⁴⁹ Milor me sacó de ahí y me llevaron al hospital Cansino en una moto (...) allá me atendieron y me sacaron unos pedacitos del plumazo que me dieron en el pecho. Donde eso me hubiera dado bien en el pecho me mata, pero no pasó nada, fueron como las esquirlas y me quedaron estas marcas (...) Yo me fui de la casa de mi mamá y me fui a vivir donde Milor, allá vivían otros también. En esa casa guardaban de todo, la droga, armas. A veces iba a dormir a la casa, pero casi no. Lo que me daba miedo era que iban a buscarme allá a donde mi

⁴⁸ Arma de fabricación artesanal.

⁴⁹ Mientras Carlos narraba esta parte se du trayectoria de vida, se levantó la camiseta para mostrarme las cicatrices de las esquirlas de bala en la parte superior del pecho. También me mostró otro par de cicatrices correspondientes a heridas con arma blanca.

mamá, a preguntar ¿el gordo está? Pa pegarme los tiros, pero me daba miedo por mi hermano y mi sobrinito, muy chiquito. Mi primo Carlos Andrés también andaba conmigo, con el combo de Milor y a él, la gente de “Jimmy trenzas” cuando lo fueron a buscar si le metieron un tiro, le alcanzaron a quebrar la paleta, pero no lo mataron. A él lo mataron fue después, pero yo estoy seguro que eso fue la misma gente de Milor (...) sabe por qué? Porque un día nosotros estábamos ahí en la casa de él, armando unos baretos⁵⁰ y cayó la policía a hacer un allanamiento, yo me tiré por una ventana y me volé, pero ahí cayeron otros, el mismo Milor, a ese lo metieron preso. Entonces empezaron a decir que habían sapos, gente de la misma banda que sapeó la vuelta. Yo por allá no volví, pero me empezaron a amenazar, por el Facebook me amenazaban que dizque “sapo, te vamos a matar” (...) y yo creo que Carlos Andrés sí habló cosas (...) es que usted sabe, eso daban plata por aquí y por allá por andar de sapo, se puso a dar lengua y lo picaron (...) adentro de él mismo yo creo que buscó su muerte (...) a él lo picaron y lo tiraron al río, luego fue que encontraron unas partes, la cabeza y no sé qué más.

Por eso mi mamá se fue de ahí del barrio, le daba mucho miedo porque daban mucho plomo por ahí y yo estaba amenazado (...) ella se fue para Comuneros, allá en una casa alquilaba pieza y luego se fue de interna a trabajar en una casa y me dijo que me viniera para acá otra vez, para la fundación, porque me iban a matar (...) esto es bacano y me quedé acá y quiero estar acá porque quiero seguir en el proceso, aunque a veces me aburro de estar encerrado. Ella me visita cuando pide salida. Mi hermana si quedó allá, en un rancho que tienen con el marido que se consiguió, porque ya tienen un niño. A mi mamá no le gusta ir hasta donde mi hermana. A veces, cuando tiene la salida y me viene a ver, ella se va a donde otra familia por allá en el Valladito. Me gusta que ella venga, pues a uno le hace falta su mamá, no?, porque de acá de la fundación me preguntan que por mi papá o más familia, pero yo con mi papa no me la voy mucho. Él tiene su

⁵⁰ Cigarrillos de mariguana

mujer y un hijo con ella. Ella no me trata bien, siempre le dice que ya no me dé más plata o cosas así (...) yo no sé qué le pasa a ese man. Aunque sí, a veces iba a visitarlo al centro o algunas veces lo llamo, pero es porque él me dice que lo llame y a veces queda de pasarme algo de plata.

Las diferentes manifestaciones de la violencia han sido una constante en la vida de Carlos, ha sido ejercida en contra de él y él también la ha ejercido en contra de otros en diferentes escenarios: tanto en las dinámicas de la vida en la zona rural de Chocó transcurridas en medio de la violencia del conflicto armado como en la violencia propiciada en la ciudad, esta última también como expresión de los avatares del conflicto. En consecuencia, se produjo el desplazamiento forzado intraurbano de su mamá y el propio. Doña Alberta abandonó su vivienda en *Brisas de Comuneros*, para pagar arriendo en una habitación de otro barrio dentro de la misma comuna y posteriormente a trabajar de interna en una casa de una comuna cercana, en el barrio Ciudad Córdoba, un territorio tradicional del Distrito, que si se encuentra dentro del plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Sin embargo, al no contar con vivienda propia, pues la suya quedó abandonada y saqueada en *Brisas de Comuneros*, su lugar de residencia temporal cuando tiene días libres es en el Valladito, donde viven algunos familiares, otro asentamiento irregular - “invasión”- de la comuna 15, que algunas veces es el sitio de visita de Carlos cuando tiene permiso de salir de la fundación Bosconia, dependiendo de las instrucciones de la defensoría de familia. En este sentido, se observa otra de las características de este tipo de desplazamiento, que cuando se genera, se hace desde un asentamiento vulnerable, marginado, hacia otro de similares características.

Los impactos en la vida de Carlos después del desplazamiento intraurbano se aprecian en especial a partir del quiebre que significó perder el vínculo físico con su mamá y sus hermanos, quienes vivían todos en la misma vivienda. Cuando se indagaba sobre su trayectoria de vida, en repetidas ocasiones hizo alusión a la importancia que le otorgaba el poder obtener recursos económicos para ayudar a su madre, para “comprarle su lavadora”, para facilitar su vida. No quería representar una carga en ese sentido. En la fundación Bosconia, como

parte del proceso de restitución de derechos, se trabaja en su proyecto de vida. Cuando se le pregunta por ello, manifiesta su deseo por terminar la educación primaria, y conseguir algún trabajo “si es que puede”, por lo que, vuelve a contemplar la posibilidad de volver a los semáforos si le toca, pero se ratifica en mantenerse alejado de las actividades delictivas, puesto expresa que su mamá se enfermó por esa razón. Aquí se aprecia de nuevo la representación que Carlos construye sobre sí mismo, acerca de saberse sujeto de exclusión con relación a la otra ciudad, a los otros sectores que si se han beneficiado de la movilidad social, los que le dan algunas monedas en los semáforos a cambio del servicio que presta de limpiar parabrisas de carros.

Por su parte, María, describe con detalle características de la violencia urbana en *Brisas de comuneros*, en la que todos se encuentran inmersos aún sin pertenecer a ninguno de los actores armados en conflicto. Delitos como la extorsión eran rutinarios

Esta invasión es más bien pequeña, pero imagínese que hay como tres pandillas que uno distingue que se pelean estas calles. Entonces la que domina un pedazo empieza a cobrar las extorsiones, pero eso es a todo el mundo (...) La vigilancia se pagaba a dos mil pesos; a los de las tiendas les tocaba de a cinco, diez y hasta veinte mil pesos, depende del negocio. A mi hermano le cobraban cinco mil pesos cada ocho días, a mi dos mil, si no los tenía él me los regalaba yo se los daba a esa gente. Tocaba pagar, era mejor (...) si no se metían con las cositas de uno, lo amenazaban o hasta se metían ya con la vida de uno y de la familia.

Su cotidianidad, así como la de los habitantes del asentamiento, transcurría entre una mezcla de miedo y al mismo tiempo de aceptación de la situación, con resignación, pues es común escuchar entre la gente del sector la frase “esto es lo que hay, así nos tocó vivir”. La razón indolente, hegemónica e impuesta, también genera mellas profundas en los imaginarios, en las representaciones que los excluidos generan sobre ellos mismos. Esa realidad encubierta los apresa y aunque anhelan otras alternativas de vida digna, se saben lejanos de esa

posibilidad. Así lo expresaba Carlos y también María, ésta última como una clase de conclusión sobre la narración de los hechos que marcaron el inicio de su desplazamiento forzado intraurbano, es decir, el tercer desplazamiento forzado que tendría que atravesar en su trayectoria de vida, de tal forma que, como lo expone Acero (2017) el terror del desplazamiento y los actores políticos armados en el país -que los sacaron de sus territorios-, es actualizado por la violencia entre pandillas que está llevándose muchas vidas en el Distrito de Aguablanca.

Mi hermana, ella que ya llevaba unos años acá, era conocida en el sector, ella era una líder, la gente la buscaba porque ella sabía cómo ayudar, le informaba a otros desplazados que llegaban como uno que era lo que había que hacer, a dónde debían ir a voltear (...) la conocía mucha gente, hacía actividades con el municipio, o sea, cuando iban los funcionarios ella estaba como voluntaria de la zona, también participaba en las actividades que hacía allá a policía en la caseta comunal, como repartir refrigerios o así. Y parece que por ahí empezó el problema. Como que la veían que colaboraba mucho con la policía y la misma gente del barrio le empezó a decir, no directamente amenazas, sino que una amiga le había dicho: “doña Juana⁵¹, no es bueno que usted se relacione tanto con la policía porque a usted ya le están haciendo seguimiento” (silencio). Resulta que por esos días iban a matar a un muchacho, como que la misma pandilla donde andaba lo iba a matar. Eso era una pandilla tremenda porque armaron un caos terrible en una parte del barrio, eso se disparaban con los otros y mantenían en un parqueadero y resulta que ahí en el parqueadero estaba viviendo una hija de alias “Don Manuel”⁵², eso era lo que se decía ahí. En ese parqueadero se oían tiros, ahí manejaban armas, hasta el mismo esposo de ella a veces pasaba así camuflado por ahí por los callejones con un arma de alto alcance, y él, ese tipo disque le había dicho a mi hermana: “lo mejor es que

⁵¹ El Nombre fue cambiado a petición de María, puesto que para la época de los encuentros para registrar su historia de vida, había una investigación en curso sobre el asesinato de su hermana y la desaparición del hijo de ésta.

⁵² Se cambió el nombre por seguridad. El mencionado es un conocido por pertenecer a estructuras paramilitares de la región.

usted deje tanto, tanta compinchería con la policía”. El caso es que no sé cómo llegó ella y se dio cuenta de ese muchacho al que iban a matar, en todo caso ella llamó y le informó a la policía y en esas hubo allanamiento de la policía y se metieron al garaje, al parqueadero ese. Eso pasó en el mes de enero. Pero resulta que en el transcurso de ese mismo mes también le llegó la policía a ella. Entonces por todo eso que estaba pasando yo sentía un miedo terrible y deje de ir mucho la casa de mi hermana, ahora sí que mantenía prácticamente encerrada en mi casa, sólo estaba pendiente de mis hijos y mi mamá que tiene ese Alzheimer. Cuando me llamaban para arreglar algún apartamento o casa pues ya casi ni iba. Igual la gente la seguía buscando mucho y ella me decía que nos uniéramos para ayudar a unas personas, a sacarles las ayudas humanitarias para que pudieran levantar los ranchos (...) ella se relacionaba mucho con actividades de la comunidad y eso pues (...) eso era peligroso, yo prefería mantenerme como a parte.

Sobre la experiencia de la violencia urbana, como una variable constante en la vida de Carlos y María, se puede apreciar las formas en las que ambos construyen sus representaciones sobre ella, de acuerdo a las diferentes etapas de sus trayectorias de vida. Aprendieron a convivir con ella como estrategia de adaptación para la supervivencia en su contexto compartido, el asentamiento *Brisas de Comuneros*. Sin embargo, distintas son las formas en las que emplearon dichas estrategias. María nunca normalizó la violencia que la impactó en la ciudad, pues aunque su vida en el campo transcurrió en medio de las relaciones con uno de los actores del conflicto armado, que ejercía control en el territorio donde habitaba y administraba las actividades colectivas en éste, una vez estando en Cali, decidió mantenerse lo más aislada posible del acontecer del lugar evitando el vínculo directo o a través de sus hijos con las pandillas como principal expresión de la violencia urbana en el asentamiento, en especial al percibir que las dinámicas violentas en el sector eran ejercidas por el bando contrario - paramilitares/bandas criminales- al que ella conoció y con el que se vio obligada a convivir durante gran parte de su vida, pero al que le reconoce también capacidad

de liderazgo ante la ausencia estatal, la guerrilla de las FARC. También cabe recordar que María ejercía un rol de liderazgo en su comunidad rural, lo que también, desde su perspectiva, le trajo problemas por ser una persona reconocida que apoyaba procesos comunitarios. De manera que el aislarse de las actividades organizativas en el asentamiento en la ciudad, de las que sí hacía parte su hermana, puede leerse como el temor a ser de nuevo una persona de referencia en el sector, lo que ella relaciona con una situación de peligro.

Por su parte, la estrategia empleada por Carlos, afectado durante su niñez por las acciones cotidianas de miembros de las pandillas, fue vincularse a una de ellas, en principio, como la manera más eficaz que encontró para defenderse, para “no dejársela montar” y posteriormente para empezar a satisfacer necesidades materiales, para sí mismo y para su familia, en especial su mamá, lo que también representa un impacto simbólico importante en ese contexto, primero, al asumir que se está ganando el respeto de la gente a través del temor que infunde el ser un miembro de una pandilla; y segundo, como posibilidad de insertarse a esa otra ciudad de la que ha sido excluido debido a sus condiciones de vulnerabilidad y pobreza, por medio de ciertas dinámicas de consumo como ir a un centro comercial a comprarse unos tenis de marca o un teléfono celular. Por consiguiente, de acuerdo con Koonings (2007), formar parte de una banda trae consigo representaciones simbólicas, importantes dentro de la vida del barrio, pues aparte de la obtención de ingresos, también significa poder, respeto y estatus. De manera que “los ciudadanos habituales de los barrios pobres deben optar por hacerse aliados de las bandas o vivir con temor por la violencia que éstas utilizan o provocan.

A finales de febrero Juana estaba con los dos hijos y el esposo en la casa, ella tenía cuatro hijos, pero en ese momento estaban sólo dos. El esposo estaba dizque allá dentro arreglando un equipo y ella estaba por allá adentro doblando una ropa, cuando que escuchó que alguien afuera tocaba la puerta y la llamaba, cuando ella llegó y se asomó y dijo: “a la orden que se le ofrece” y salió a la puerta a ver qué necesitaba y lo que me dicen es

que le preguntaron por un hijo y que ya ella la última palabra que dijo fue: “cual hijo, yo no tengo más hijos”, respondió ella, entonces ya ella cuando volteó como a entrar , él disparó. Dizque cuando el señor llegó a matarla, llegó preguntando qué en qué parte es que vive doña Juana, la líder de acá, y le dijeron “ah si ella vive allá más adelantico”, como a cualquiera le daban información porque cómo iban a preguntarle cualquier cosa porque ella como líder (...) pues todo el mundo la conocía. Dejó cuatro hijos, mis sobrinos: el de dieciséis, la de catorce, uno de nueve y el otro de once.

Ahí empezaron como unos rumores, de que nos teníamos que ir, y esa semana no nos cobraron la vigilancia, entonces nosotros pensábamos que no nos tocaba, que no teníamos que salirnos! Pero el lunes a eso de las nueve de la mañana mi sobrina había dormido en mi casa y me dijo: “tía, me acompaña allá a la casa de mi mamá (...) ah pues el esposo, si él si decía: “si los quiere yo se los (...) puedo dejar acá, por ejemplo, vea ahora el problema con los muchachos y lo que pasó a raíz de esto. Bueno (...) él iba a salir porque cómo él recicla, entonces él tenía un montón de chatarra y de latas ahí, y dijo: “no pues yo me voy a ver a donde puedo vender esto, porque a donde me resulte me voy”, él si ya no quería estar más en la invasión. Salió y le dijo a mi sobrina que yo la iba a acompañar pa’ donde la mamá para mover todo eso de ella y a organizar esa casa y yo: “listo, espere yo voy a fritar unos buñuelos para el desayuno y yo voy”; ya ella se quedó allá en la pieza doblando ropa y cuando estuvo lista me dice: “tía vamos pues”, cuando ella me dice eso, nosotros íbamos aquí saliendo, a la final mi cuñado también nos acompañó... cómo las casas están aquí todas juntas. Cuando llegamos nosotros a la casa de mi hermana, el techo de la casa de ella es así bajito, y nosotros llegamos y miramos así a la parte de arriba y venía una persona encapuchada así toda de negro, guantes negros y un arma así como larguita, yo no sé cómo se llama eso. Ay y nosotras que vemos eso y ella me dice: “tía corra” y ahí mismo yo digo: “ ay, mamá, mamá”, mi mamá estaba en el lavadero lavando ahí mismo, yo entré corriendo la cogí y nosotros nos metimos debajo de la cama con mi cuñado

y ya él llamó a la policía y nosotros nos quedamos ahí atrancando, esperando a ver qué porque él no sabía si era que iba por una de nosotras o por él o qué iba a pasar. Yo ni sé cuánto tiempo pasó, pero llegó la policía (...) pero cómo usted sabe nadie vio nada, en este barrio nadie ve nada. Nosotros nos quedamos ya ahí sin saber qué hacer, Dios mío bendito. “¿Y ahora (...) qué vamos a hacer, qué camino cogemos, será que nos vamos? o ¿esperamos a ver por qué gente vienen? y decía yo: ¿y ahora yo pa’ donde voy a coger? y me ponía a llorar y a pensar: ¿por qué sigo huyendo, de qué huyo si nada debo? ¿qué hago? Pero está la vida de los hijos por delante. La verdad es que uno con todo esto no puede ni dormir...esa pensadera sobre ¿porque le hicieron esto, porque la mataron, será porque era una líder y pues participaba en cuanta cosa había para la gente del barrio (...) será porque le dijo a la policía que iban a matar a ese muchacho?

No pasaron ni dos semanas, y yo estaba con mi sobrina en mi casa, cuando llegó mi cuñada, la esposa de mi hermano y me dijo que no hiciera bulla, que tenía que ir a su casa. Yo cogí a mi sobrina y nos fuimos por el callejón y cuando entramos ahí en la salita de ella había cuatro encapuchados armados (...) Yo dije: “hasta acá seguro llegamos todos porque ¿qué más vamos a hacer?” Yo ya llorando pensaba y les decía: “nos van a matar, miren, nosotros tenemos niños, no, no” y ellos dijeron: “no es que no venimos a matarlos, nosotros estamos aquí porque no queremos que salgan igual que la sapa de su hermana”, me dijo uno de ellos mirándome a mí. “No queremos que salga como la sapa de su hermana, ¿sabe qué? le damos dos días pa’ que nos desocupe, váyase, porque si de aquí al sábado que es el cobro de la vigilancia, están acá, no respondemos. Nosotros no queremos más sangre y creemos que ustedes tampoco, ¿o quieren ver más sangre derramada? (...) Esto viene de alias “Cabezón”, usted sabe que esto es manejado por las autodefensas, los que estamos somos los Urabeños, y usted sabe que cuando nos ofendemos somos muy malos y usted misma lo dice, sí tienen niños, pues váyanse”. y entonces preguntan por Jaime mi

sobrino de dieciséis: “¿Dónde está Jaimito? Y pues él no estaba porque desde el día del entierro de la mamá él dijo: “yo acá ya no me vuelvo a quedar, yo me echo a perder”, nos dijo. Él se estaba quedando donde algún conocido, parece que en el Vallado y hasta antes que fuera esa gente él entraba a veces a la invasión y me pedía alquito de comer, pero ya después no volvió. El anda desaparecido y ya pusimos la denuncia en la Fiscalía, esperemos a ver qué pasa...

Nosotros por el momento estamos ahí, en el Vergel⁵³, en el apartamentico que nos ofreció la suegra de mi hijo. Pero como es tan peligroso también, nosotros tenemos que mirar a ver qué más hay, y buscar donde estemos un poco más tranquilos y que haya un poquito más de seguridad. Pero ¿por qué estamos ahí tan cerquita? me preguntaban, y ¿usted porqué salió de ahí a ese barrio tan cerquita? Entonces, qué más hacía yo, no tenía otra opción, así fuera pal frente (...) a donde fuera, mi interés era salir del hueco donde estaba. Eso era lo que yo le explicaba al personero, que no era mi intención salir de la misma comuna pa' meterme a la misma comuna, es que el vergel es caliente (...) sabemos que es caliente pero yo no tuve otra opción, ¿qué más iba hacer? estaba la vida de mi mamá, la vida de mis dos

⁵³ Como parte de procesos adelantados con algunos jóvenes que se encontraban en la Fundación Bosconia, tuve la oportunidad de hacer visita domiciliaria en el barrio el Vergel. Las condiciones de la visita fueron similares a las registradas en la invasión Brisas de Comuneros, en cuanto al acompañamiento de una patrulla de policía como requisito de seguridad para arribar al barrio. Al frente del lugar objeto de nuestra visita, se encontraba un grupo de adolescentes y jóvenes, aproximadamente 5. Al ver que estábamos buscando una casa nos preguntaron “¿a quién buscan?” y después de mencionarles un nombre, nos señalaron una vivienda, afirmando “esa es la casa que buscan, la que tiene esos huecos de balas al lado de la ventana”. Los rastros de la violencia vivenciada en el sector eran evidentes. A grandes rasgos, se observa que este sector cuenta con mejor infraestructura que la Invasión, con calles pavimentadas y conexión a servicios públicos como energía, agua y alcantarillado. Sin embargo, algunos sectores del barrio están más pauperizados, calles despavimentadas y angostas y al igual que en Brisas de Comuneros, las casas se suceden unas tras otras, las cuales estaban, en su mayoría, construidas a base de ladrillo y en menor medida de madera y lámina. Son las calles del Vergel, divididas por cuadras, el objeto de disputa de pandillas que operan en el sector, las cuales establecieron límites o fronteras invisibles para marcar territorio. En el informe de la personería, del año 2014 citado en este trabajo, El vergel registra 17 pandillas cuyo accionar convirtieron a la zona en una de las mas violentas de la ciudad de Cali. Es importante mencionar que un año antes del periodo en el que María se desplazó al Vergel (2014), cerca de la mitad de las pandillas estaban siendo intervenidas por organizaciones no gubernamentales y líderes comunales como Jose Edwin Quintero, logrando un pacto de no agresión, el cual se desvaneció por no contar con apoyo de entidades como la Alcaldía para empezar procesos de resocialización.

niños. Pero mi intención es y pues eso le dije, como buscamos otro lado, pero para eso se necesita plata y eso por ahora no hay.

En ambas Historias de Vida resulta evidente uno de los principales rasgos del desplazamiento forzado intraurbano, a saber, las personas y/o familias desplazadas, se ven constreñidas a salir de los lugares donde residen, que cuentan con características específicas que demuestran su situación de exclusión social, hacia otros lugares incluso cercanos físicamente hablando, con las mismas o muy similares características. Por ende siguen estando expuestos a ser de nuevo afectados por la misma problemática. De manera que, a pesar de haberse dispuesto la misma política social para el desplazamiento rural en los casos de desplazamiento intraurbano, en la práctica han resultado ineficientes para frenar el ciclo de exclusión y pobreza vivenciada de manera sistemática por los sectores desterrados dentro de la ciudad, pues no existe alternativa diferente que reasentarse en un lugar de similares características del que fueron desplazados. Es decir, siguen estando sometidos a habitar los escenarios donde se manifiesta de manera profunda un sin número de carencias que los hace sujetos vulnerables y donde se vivencia de manera más acentuada la violencia urbana. Además, se deja al descubierto otra problemática que no ha tenido respuesta por parte de la institucionalidad: la pérdida del patrimonio. La mamá de Carlos abandonó su casa, o rancho como ellos le llaman, el cual, como él lo afirma, le pertenecía a su mamá ("la casa de mi mamá"). Afirmación que realiza a partir de los recuerdos de su niñez, pues siempre habitó el mismo lugar, lo consideraba su hogar y durante esa etapa presencié y posteriormente participó de algunas mejoras estructurales que se le hicieron a la vivienda. Es decir, hubo una inversión monetaria en la adecuación de la unidad habitacional. Situación similar experimentó María, quien expresa:

Las casitas allá quedaron abandonadas. Nos tocó dejarlas y por lo que sabemos hasta el momento no están ocupadas. En la casa de mi hermana y en la mía está puesto un letrero grande que dice: "AUC"...pero a la de mi hermana si se metieron y le sacaron todo lo que había, la nevera, la estufa. Yo como fui si logré sacar mis cosas, las camitas, la neverita que tenía...

lo poco que tengo, si pa qué, mis cositas poquitas que tenía si las logré sacar.

Lo expuesto aquí tiene un trasfondo bastante complejo. Al ser asentamientos de desarrollo incompleto sobre terrenos ejidales que se encuentran por fuera del Plan de ordenamiento territorial, la discusión sobre la legitimidad en cuanto al reconocimiento de la tenencia de la tierra se daría desde el plano jurídico. Sin embargo, esto guarda estrecha relación con los procesos organizativos mencionados anteriormente, adelantados por sectores de la población empobrecidos y excluidos, que reclaman su derecho constitucional a tener una vivienda digna. Pese a ello, no hay claridad sobre si el aspecto de reparación relacionado con la restitución de tierras como punto fundamental de la política para el desplazamiento forzado interno, también se haría extensible en esta situación dentro de la ciudad y bajo qué términos se haría.

IV.4. La revictimización como manifestación de la *razón indolente*.

Un Estado social de derecho debe priorizar la materialización del campo derechos para la ciudadanía, y en caso de que le sean vulnerados, debe generar mecanismos para garantizar su restitución y asegurar la no repetición de la situación de vulnerabilidad a través de políticas sociales, lo cual generaría credibilidad y legitimidad por parte de la ciudadanía hacia la institucionalidad. Sin embargo, a través de las Historias de vida presentadas, se observa que en la práctica,

Como nos tocó salir de Brisas de comuneros, nuestra única alternativa fue irnos para el Vergel...se imagina? Nos fuimos de un hueco para meternos en otro. El Vergel también es muy peligroso. Yo mantengo con miedo porque se escuchan muchas balaceras y cuando uno va a ver, han matado a algún muchacho que dejan tirado por ahí en la calle. Yo sólo pienso en mis chinitos, sobre todo los menores que todavía están estudiando.

Cuando fuimos a la Unidad de Atención para las víctimas a hacer la declaración sobre nuestra situación y que dejamos todo tirado allá en la

invasión porque tuvimos que salir de urgencia, pasamos como por cinco funcionarios antes de poder hacer esa declaración. Me acuerdo que era un señor canoso, y ¿sabe qué nos dijo? que porqué andábamos otra vez en estas, presentando declaración, porque nosotros ya teníamos un registro del desplazamiento desde Caquetá y habíamos recibido unas ayudas, entonces nos dijo que en qué era que andábamos metidos, que eso estaba muy raro. Sinceramente a mí me dio tanta rabia, que yo me puse a llorar de la rabia porque es como una ofensa. Imagínese, usted cree que si uno anduviera en pasos malos vendría por una ayuda, una protección? A nosotros por lo menos esa vez nos tocó que acudir fue a la policía, ahí tenemos la carta de protección de la policía y todo, para salir ahí. Eso se lo dijimos al funcionario, porque nos preguntó que a quien habíamos acudido cuando nos empezaron a amenazar y yo le dije que a la policía y al otro día fuimos a la fiscalía y dijo: “a bueno eso era todo. Aquí no hay más que hacer, si ya denunciaron no veo porque tengan que venir a declarar”. Prácticamente perdimos el tiempo...o sea, que esperanzas? Ninguna.

La figura de la Policía en los contextos barriales resulta conflictiva en varios sentidos, de los que se pueden destacar dos: como la representación del orden impuesto que choca con las dinámicas del barrio; o como la ratificación de la ausencia del Estado, que en vez de manifestarse con políticas sociales inclusivas, lo hace desde un sentido punitivo. Sin embargo, es una entidad fácil de referenciar en los barrios (es decir, se conoce sobre ellos, dónde está ubicada la estación más cercana, el número al que se le puede llamar en caso de necesitarlo, etc. A diferencia de otras entidades como la fiscalía, Personería o Defensoría del pueblo), lo cual es evidente al observar las menciones que se han hecho de esta figura institucional por parte de Carlos y en este caso de María, quien junto a su familia recurrió a ella para buscar protección, razón por la que, como parte del trabajo de campo, se realizó visita a una de las estaciones principales de la policía en el Distrito de Aguablanca. Al exponer el motivo de la visita en la entidad, fue difícil encontrar a algún funcionario que conociera sobre el desplazamiento intraurbano, más específicamente de la ruta de atención que debían seguir cuando

recibían una denuncia por desplazamiento intraurbano, puesto que algunos aseguraron no saber al respecto. Finalmente se pudo hacer contacto con un intendente que anteriormente había trabajado en el área de derechos humanos de la institución, quien expuso que el manejo que se le da a este tipo de casos consiste en redactar una minuta que sirva de constancia, con los datos completos de quien instaura la denuncia. Posteriormente se recomienda que se instaure otra denuncia en alguna de las entidades representantes del ministerio público en los municipios, como Personería o Defensoría, encargadas de garantizar los derechos de todas las personas, en palabras textuales del intendente, “son la parte neutral”. Posterior a ello, estas entidades remiten a los denunciantes a la Fiscalía más cercana, donde deben emitir otra declaración por desplazamiento forzado a partir de la que se obtiene un radicado que ratifica la recepción de la denuncia donde se puntualiza sobre fechas, lugares, perpetradores del hecho.

A partir de lo anterior, sostiene el intendente, lo que hace la Fiscalía en un principio es proferir unas medidas de protección que están a cargo de la Policía Nacional si se llegase a considerar que la integridad física del denunciante y su familia están en riesgo. De acuerdo a ello, se realizan actividades de acompañamiento y patrullaje sobre el sector donde residen la o las personas en peligro. Es responsabilidad de la fiscalía determinar si el caso amerita ser remitido a la unidad especial encargada del desplazamiento forzado, cuyas oficinas suelen encontrarse en las ciudades capitales. Asimismo, el intendente destaca que hay muchos casos que no son denunciados por parte de la comunidad por miedo a represalias que los perpetradores del hecho tomen contra ellos (Intendente Molina, comunicación personal, Diciembre 3 de 2016) o, es imperativo añadir, por el miedo a ser culpados de su propia situación por parte de las entidades a las que recurren buscando protección.

Como consecuencia de la revictimización, donde la culpa del desplazamiento intraurbano recayó sobre María desde la perspectiva de la institucionalidad, la ruta de atención dispuesta para atender estos casos no fue activada. Por el contrario, le fue negada, aun cuando dentro de su testimonio se encuentran indicios sobre la violencia urbana accionada contra ella y su familia por

grupos que se identificaron como paramilitares (A.U.C). Es decir, el caso bajo el cual -de comprobarse la relación entre el desplazamiento forzado intraurbano y actores vinculados con el conflicto armado- podría ser atendido con las mismas herramientas dispuestas en la política para el desplazamiento forzado rural. También se le cuestionó y señaló por su condición de redesplazamiento. Paralelo a ello se evidencia también la falta de claridad en la información que reciben las víctimas sobre los mecanismos a los que pueden acceder para exigir atención y protección de sus derechos vulnerados.

Estas consideraciones muestran también la *perspectiva familista* centrada en una ideología de responsabilidad familiar en relación a su destino y al de sus miembros, asumida por las políticas sociales, en este caso destinadas a abordar el problema del desplazamiento forzado intraurbano, que convierte el proceso de responsabilización y disciplinarización de las familias en una necesidad del Estado, mediada por sus agentes. A la vez ese movimiento desconoce que cada familia es -en la materialidad de su existencia- un producto histórico-cultural particular. (Cruz y Fuentes, 2017)

Me dicen: ¿y qué hacen las ayudas humanitarias? Porque el decir de ellos es que pa' eso el Estado nos está ayudando ¿qué hacen esas ayudas?" Yo le pregunto: ¿Una ayuda, una vez al año, que la recibe uno, será que con eso si uno come, viste, duerme, estudian los hijos con eso todo un año? Acá lo que entra es poquito, el papá del mis hijos también encargándose de la mamá y ahí en una finquita en el Cauca, cuando tiene algún trabajo él nos manda algo pero es poco y prácticamente nos bandeamos con el sueldo de mi hijo, del taller donde trabaja, que es el mínimo y lo que yo pudo salir a trabajar, pero es cuando sale algo, eso no es todos los días. Usted sabe la situación de vida que se vive (...) como es de cara; en el caso mío me marea mucho, como yo le digo, para yo trabajar, tengo a mi cargo a mi mamá: una persona de ochenta y tres años. Uno tiene que estar pendiente, gracias a Dios ella todavía está activa, pero ya se le olvida con facilidad dejar el fogón prendido, deja la llave del agua abierta, ella se

acuesta a dormir y deja una olla en el fogón y se le olvida, ya hay muchas partes y muchas cosas que como que pierde la noción del tiempo (...) Otra cosa es que como nosotros nos tuvimos que ir del asentamiento y fuimos a parar al Vergel, desde que estamos ahí nos pusimos a voltear con las denuncias sobre la desaparición de mi sobrino y el asesinato de mi hermana, en una de esas idas a fiscalía, fíjese que llega el fiscal y nos dice: “¿usted cómo se le ocurre desplazarse tan cerquita?” y la verdad a mí nadie me dijo nada de reubicarnos en un lugar más seguro, ni de pedir ayuda humanitaria que para ir a un albergue, algo así. Nadie (...) y yo les dije eso y también que yo sé que uno debería buscar mejores barrios para meternos, pero ¿qué hacemos? uno de pobre (...)

La razón hegemónica, que señala realidades de los Otros, excluidos, reconocidos sí pero a partir de la negación y el señalamiento, se hace manifiesta entonces desde entidades, paradójicamente, facultadas para vigilar y velar por la protección y cumplimiento de los derechos humanos, al desconocer completamente las condiciones de vulnerabilidad y marginación sistemática a la que son expuestos los otros, los que, trayendo de nuevo el planteamiento de Bauman (2005) son los *parias de la modernidad*, pues quedaron por fuera de los beneficios del progreso económico. Están condenados a la repetición de los ciclos de vulneración de derechos, desde la periferia y la pobreza.

(...) pues con lo de la denuncia, nos tienen de un lugar para otro y no nos explican nada, no sabemos nada. Ir a ver qué es lo que dicen. Pero como le digo, en mi caso, ninguna esperanza de nada nos han dado, en este caso, ninguna colaboración nos han prestado. Colaboración que nos han prestado son por ahí las amistades que mi hermana tuvo...el Padre Julián, pero las entidades del Estado en sí... solos estamos. Uno se siente tan ofendido con esas cosas que le dicen los funcionarios...es que yo ya he vivido el dolor de desplazamiento, ellos deberían poder saber distinguir si es que uno dice mentiras o que, pero entonces mire yo ahora que hago? Ya uno no puede acercarse a las entidades a decir que uno ha sido desplazado*

dos o incluso más veces...pareciera pecado. Lo hieren a uno tanto que uno sinceramente uno dice uno es más estúpido venir acá a qué a perder el tiempo a gastarme lo que no tenía, solamente con la esperanza que brinden una ayuda.

Esta parte de la trayectoria de vida de María, donde expone con frustración la respuesta de funcionarios representantes de entidades estatales encargadas de recibir declaraciones sobre desplazamiento intraurbano en la ciudad de Cali con el fin de determinar si incluye o no los casos al Registro Único de Víctimas para iniciar proceso de atención y restitución de derechos, evidencia la revictimización a la que son sometidas las personas afectadas. Se podría señalar entonces que esa revictimización por parte del Estado, a través de sus funcionarios, puede leerse como una manifestación de *La razón indolente*, del reconocimiento pero desde el señalamiento, desde la culpa, desde la negación de otras realidades -como el hecho de que María sea una víctima de doble desplazamiento: rural/urbano e intraurbano- dentro de un panorama hegemónico, el cual estaría constituido por el desplazamiento forzado en zonas rurales por causa del conflicto armado, encubriendo así esa otra realidad representada, en este caso, por su condición de redesplazada, esta vez dentro de la ciudad de Cali por la violencia ejercida por pandillas barriales cooptadas por bandas criminales.

IV.5. Contrucciones locales: las redes de apoyo desde y para la comunidad.

La lejanía que se percibe entre las víctimas del desplazamiento forzado intraurbano y el Estado, por factores como falta de información para conocer cómo exigir la restitución de derechos a través de rutas de atención y vinculación a programas estatales. o por la espera entre un trámite burocrático y otro, que desde la posición de los afectados parece interminable, impulsa, de manera espontánea, la organización de redes de apoyo necesarias para paliar las dificultades traídas

por la problemática, para hacer frente a las rupturas producidas en sus dinámicas de vida.

La familia constituye la primera y más importante red de apoyo. Cuando Carlos estuvo en peligro en la ciudad de Cali, lo recibió parte de su familia materna en el Chocó. Así mismo, en su niñez, docentes de la escuela donde estudiaba lo inscribieron como beneficiario de una ONG que le ayudara a solventar algunas de sus necesidades básicas y cuando tuvo que salir del asentamiento donde vivía, llegó a la fundación por una recomendación que le hizo una vecina a su mamá.

En el caso de María, por ejemplo, se evidenció que ante su situación de desplazamiento desde el campo hacia la ciudad, sus hermanos asentados en la ciudad de Cali le extendieron su ayuda para abandonar Putumayo, por temor a que fuese asesinada. Una vez estando en el asentamiento de desarrollo incompleto *Brisas de Comuneros*, fueron ellos quienes le gestionaron un pequeño lote para construir una vivienda. Cuando el desplazamiento forzado intraurbano la afectó junto con su familia y tras la revictimización de la fue objeto por parte de una entidad estatal, fueron varias las redes solidarias que se activaron dentro de la comunidad. A saber, sobre la situación de la familia de su hermana, asesinada, María expresó:

La directora del colegio donde teníamos a los niños, cuando se dio cuenta de todo lo que nos estaba pasando, llamó a mi cuñado y le dijo que ella tenía una finquita por allá arriba como por Villa Rica, para que se fuera con los niños, mis cuatro sobrinos pues, y él nos dijo “yo me voy a ir, yo voy a lograr esta oportunidad”. Entonces ya nosotros viendo le dijimos: “hágale, hágale”, entonces empezamos a ayudarle a empacar y ya la policía ahí todo el día estuvo. Ya a las cuatro de la tarde llegó el carro por ellos y la policía prestó vigilancia y todo mientras salieron pues, y a Jaimito le empacamos la ropa y todo lo de él pero no apareció y no apareció. Ya ni el celular contestaba, nada, nada. Solo está uno a la espera de una mala noticia o por qué lo desaparecieron. Mi cuñado se fue con los otros tres niños, y allá

está, trabajando en la tierra y cuidado esa finquita. gracias a Dios están bien.

Los habitantes de las periferias, al saberse sujetos de exclusión sistemática, -porque también se reconocen así mismos a partir de la otredad hegemónica además de su percepción de la institucionalidad como algo ajeno que los interroga y los señala,- se ven impulsados a desplegar estrategias para solventar sus dificultades, que no dan espera, a partir del tejido social del que son parte, fortalecido por las oportunidades para reunirse alrededor de alguna capacitación ofrecida por alguna fundación que visita el territorio, ollas comunitarias y refrigerios, actividades de recreación para los niños, el voz a voz sobre recomendaciones para conseguir algún trabajo o consejos sobre cómo gestionar ayudas humanitarias en casos de desplazamiento o a quien acudir en caso de necesitar asesoría acerca de dichos trámites, tal cual lo hacía la hermana asesinada de María. También, como resultado de las relaciones que se tejen dentro y alrededor del asentamiento, como parte de las dinámicas cotidianas y la construcción y fortalecimiento de vínculos, María obtuvo ayuda para reubicarse por fuera del asentamiento, por parte de la suegra de su hijo.

Ellos se conocieron porque ella era sobrina del jefe del él, del taller donde él trabaja. Y pues se ennoviaron. En todo caso la mamá un día nos llamó, para decirnos que nos iba a proponer algo que podía ayudarnos. Cuando fuimos, ella al ver nuestra situación, pues nos dijo “yo tengo un apartamentico en el Vergel que está desocupado. Tiene una pieza, pero tiene su sala-comedor y cocinita. Váyanse para allá y estén tranquilos por el arriendo, yo por ahora no les pienso cobrar nada. Cuando ya estén más ubicados, en un mes o dos, pues ahí vamos arreglando”. Imagínese, cuando uno cree que está en lo más hondo, y llega la señora a ayudarnos. Y yo le voy a ser sincera, El Vergel es muy caliente, es un peligro, pero yo sólo pensaba en un lugar para meter la cabeza, para meter a mi mamá y los hijos. Sobre todo mi mamá, pues con lo de su enfermedad...uno piensa es en la vida de ellos y allá estamos por ahora.

En un contexto de carencias, la solidaridad es una herramienta potente que les permite a los habitantes de los sectores marginalizados, sobrellevar las situaciones propias de dichos contextos. Se puede leer como una forma en la que la comunidad misma autogestiona los mecanismos necesarios para hacer frente a las crisis del día a día, ya que son conscientes de la poca o ninguna presencia del Estado. En este caso, esas estrategias comunitarias surgidas desde y para la comunidad, se podrían comprender como una manera de hacer *ecología de saberes* (De Sousa: 2006), pues las redes surgen a partir de sus propias necesidades y su comprensión del entorno que les rodea, en contraposición a la *monocultura del saber* que sería representada por el Estado ausente, cuya visión hegemónica de la cuestión social está desconectada de las diversas realidades de la periferia.

Al respecto, resulta pertinente el planteamiento de Acero (2017), al exponer que, producto del fortalecimiento de vínculos, también son desplegadas diversas estrategias económicas, utilizadas por los habitantes de los asentamientos humanos de desarrollo incompleto, para afrontar el despojo y los procesos de marginalización y empobrecimiento que viven. Estas redes se presentan como posibilidades de *reexistencia*, en la medida en que permiten activar sus prácticas comunales de apoyo (p.98). Un claro ejemplo de ello lo expone María, cuando menciona la importancia de la Parroquia de uno de los barrios de la comuna, como punto de encuentro y de recomendaciones para acceder a alguna oferta laboral que permitiera la obtención de recursos económicos.

A través de mi hermana, que como ya le he comentado tenía muchos contactos en el barrio porque era líder allá, conocí al padre Julián, de una parroquia en el barrio Marroquín II, también en la misma comuna. Era como el sitio de encuentro para muchos de nosotros, sobre todo desplazados de otros pueblos y gente en mi misma situación, desplazada del campo y ahora sacada del barrio por las amenazas de las pandillas. Para diciembre tuvimos otra integración con el Padre, él nos dijo que le ayudáramos con una fundación que había para que organizáramos las novenas navideñas*

para los niños, yo fui con mi cuñada, la esposa de mi hermano y le ayudamos, y otras dos muchachas de ahí de la invasión, hicimos las novenas y sí, fue bueno... esa fundación ayudó con los aguinaldos, ellos nos dieron buenos refrigerios, o sea, por eso es que con el padre me distingo (...) y gracias a eso, cuando nos reunimos, hay algunas madres que están trabajando arreglando casas o locales, haciéndoles el aseo, o haciendo comidas, y nos dicen que se necesitan más trabajadoras en tal lado, o por ejemplo dicen “en el trabajo de mi hijo están necesitando para la construcción”, entonces hay mamás que se interesan para ver si sus hijos pueden trabajar de eso. También el padre Julián nos recomienda a un grupo que somos como de su confianza, para ir a casas de gente que él conoce a limpiarlas y arreglarlas. Así nos ganamos unos pesitos. Eso a mí me sirve porque con el cuidado de mi mamá y luego recibir a los niños en la tarde cuando salen de estudiar, yo no puedo trabajar tiempo completo.

Parte del surgimiento y consolidación de esas redes de apoyo también tiene que ver con la percepción del espacio y los significados que le van otorgando los mismos habitantes. Por ejemplo, la concepción alrededor de la parroquia como un lugar no solo destinado a actividades religiosas, sino también para congregar a la comunidad para su organización. Acero (2017) cita a D^o Certeau (2000) subraya el entramado que conforman *táctica y estrategia*. La parroquia fue pensada para jugar un rol específico en relación con las actividades religiosas, pero también es usada en el día a día para realizar, por ejemplo, reuniones de la Junta de Acción Comunal, para organizar quejas y reclamos, para proporcionar posibles alternativas laborales, talleres para madres cabeza de hogar o para planear eventos de movilización social en el barrio por la vida y el buen vivir (p. 95).

IV.6. La importancia del Trabajo Social en el rescate de las Historias de Vida.

Como se apreció en el apartado anterior, existe una distancia entre el Estado y los sectores de la ciudadanía impactados por el desplazamiento

intraurbano, que refuerza la percepción de un Estado ausente, lo cual permite interrogarse también acerca del lugar de los profesionales encargados de intervenir desde las políticas sociales. En consecuencia, el Trabajo Social, en tanto disciplina interventiva, está llamada a hacer frente a la *monocultura del saber* que establece visiones de la cuestión social desde el pensamiento dominante que escinde las experiencias locales del contexto general, desconociendo la pluralidad de saberes y experiencias, e instrumentalizando el ejercicio profesional.

En este sentido, trabajar con las distintas posibilidades que ofrece la Historia oral, como las Historias de vida, ofrece una posibilidad sumamente enriquecedora que permite “re-descubrir la trama de lo real sobre la óptica de los sujetos que la viven, a través del conocimiento de sus experiencias, valores, cultura” (Moljo: 2003: 14) y significados que le éstos le otorgan a estos elementos dentro de sus prácticas sociales cotidianas. Así que, el Trabajo Social, dada su cercanía con los sectores sociales en situación de vulnerabilidad, producto de su quehacer profesional, permite trasladar esas comprensiones desde el ámbito donde ocurren, hacia el escenario público, donde se discute y se decide el diseño de las políticas sociales que impactan directamente sobre estos sectores de la población. Es decir, representa una figura de mediación entre el mundo constituido por realidades diversas vivenciadas por los Otros y el mundo hegemónico. Por ello, se concuerda con el planteamiento realizado por Moljo, cuando subraya que recolectar las Historias de vida de los sectores excluidos, a partir de la descripción y el significado que estos mismos le otorgan a sus experiencias, así como comprender cómo organizan sus realidades, es imprescindible para el Trabajo Social, puesto que su campo de intervención se inscribe dentro de la relación sujeto, sociedad y su cotidiano, desde donde surgen las necesidades sobre las que se planea la intervención profesional. La adquisición de estos saberes excluidos por *la razón indolente*-hegemónica le permitirá al Trabajo Social “construir mediaciones teóricas, a través de las cuales poder enriquecer tanto la práctica profesional como la formación académica” (P. 15)

El Trabajo Social a través de sus prácticas permite repensar y replantear la intervención social ante los efectos del desplazamiento forzado intraurbano, no

sólo como una acción reparatoria relacionada con las demandas materiales (como la posibilidad de reubicación de las víctimas en albergues transitorios o vivienda, subsidios monetarios, y demás gestiones planteadas), sino también visibilizando y problematizando desde el aspecto psicosocial, el impacto en las subjetividades. Esto pudo apreciarse en las trayectorias de vida de María y Carlos, donde hay un daño emocional que repercute en la manera en la que se ven a sí mismos y al resto de la sociedad, en cómo conciben sus proyectos de vida dentro del contexto que los rodea, pues se asumen como sujetos sin posibilidades próximas de salir del círculo de pobreza, violencia y exclusión para lograr vivir en dignidad, que finalmente es lo que anhelan. Asimismo, esta situación da cuenta de un mundo que se constituye con ganadores y perdedores, y donde estos últimos se culpan a sí mismos por no pertenecer al estamento ganador, sumando así, a su problema de supervivencia, la representación devaluada de su propia imagen. (Malacalza et. al: 2012)

Este escenario exige asumir la tarea de rescatar las memorias y sus saberes, donde prevalezca la voz, los imaginarios, las representaciones de los sectores sociales marginados sistemáticamente, como herramienta válida para construir conocimiento sobre la problemática y alternativas para abordarla privilegiando el enfoque de derechos, a pesar de las tensiones entre el modelo neoliberal promovido enfáticamente por los últimos programas de gobierno en Colombia y el Estado social de derecho, que aún sobrevive en la carta constitucional.

CONCLUSIONES:

**LA REIVINDICACIÓN DE OTROS SABERES PARA LA GENERACIÓN DE UNA
POLÍTICA SOCIAL DEL DESPLAZAMIENTO INTRAURBANO EN LA CIUDAD
DE CALI.**

Existen elementos para pensar sobre características que de alguna manera hacen particular el desplazamiento intraurbano en Cali. Partiendo de la concepción sobre las Historias de Vida como una manifestación de rasgos colectivos, en las trayectorias de Carlos y María se pone en evidencia que existe al menos, una doble dimensión de la problemática, es decir, antes del desplazamiento intraurbano, la familia de Carlos, y María y su familia habían sufrido desplazamiento forzado por el conflicto armado desde zonas rurales del país hacia la ciudad de Cali, a donde llegaron a residir en el mismo sector, el asentamiento de desarrollo humano incompleto Brisas de comuneros, conocido como invasión.

En este sentido, se observa que estas trayectorias de vida han estado marcadas por la exclusión, pues sus dinámicas en las zonas rurales se desarrollaron en medio de la pobreza, la escasa o nula presencia del Estado garantizando educación, salud, vivienda y empleo y de la violencia ejercida por el paramilitarismo, guerrilla y ejército. También evidencian que las políticas públicas para el desplazamiento forzado interno en el marco del conflicto armado, no han sido suficientes para restituir derechos vulnerados a las víctimas, pues como se ve en estos casos, las víctimas llegaron a residir en un asentamiento de desarrollo humano incompleto, lo cual siguió perpetuando la exclusión, hasta que finalmente, dentro del contexto de violencia urbana presente en estos territorios, sufrieron un nuevos desplazamientos, esta vez intraurbanos.

Si se amplía la mirada, teniendo en cuenta el contexto histórico presentado al inicio de esta Tesis, en especial cuando se hace referencia al poblamiento del distrito de Aguablanca, conformado principalmente por migrantes de otras zonas rurales del Pacífico y Suroccidente colombiano, se puede decir que quienes son

impactados por el desplazamiento intraurbano han sufrido anteriormente otro tipo de desplazamiento rural o provienen de familias que previamente lo han vivenciado. Desplazamiento que se puede inscribir o no dentro de la violencia generada por el conflicto.

De acuerdo a la información proveída a través de las Historias de vida, complementada por las entrevistas a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, documentos proferidos por la Personería municipal y artículos de diferentes medios de comunicación, se puede establecer cierta sistematicidad en cuanto a los perpetradores del desplazamiento, pandillas de jóvenes ubicadas en barrios periféricos y vulnerables de la ciudad, que han sido cooptadas por bandas criminales -consideradas como la continuación del Paramilitarismo o su reinención- para ejercer control en los territorios y consolidar actividades relacionadas con el narcotráfico. Lo expuso Carlos como integrante de una de las pandillas de la zona, reconociendo que sus acciones estaban dirigidas por los Urabeños y lo ratificó María cuando da cuenta de cómo los encapuchados que la amenazaron para salir del asentamiento se identificaron como pertenecientes a estructuras paramilitares, los cuales enfatizaron el mensaje también desde lo simbólico, rayando la fachada de su casa con las siglas características de esta organización armada, A.U.C. lo cual representa una señal de intimidación hacia el resto de los habitantes del sector, dejando claro el dominio que ejercen. Son ellos quienes organizan la vida social en el lugar, representan un poder paralelo, lo que ratifica una vez más la fragilidad del Estado colombiano en cuanto a asegurar su presencia a través de la ejecución de programas que permitan condiciones de vida con dignidad.

Sin embargo, de manera paralela también se continúan cometiendo los delitos característicos de las pandillas antes de la incursión de las bandas criminales, tales como hurto, extorsión y sicariato, por lo que también se concluye que si bien hay elementos para pensar en la hipótesis sobre el desplazamiento forzado intraurbano como una transformación o escalada del conflicto armado en las ciudades, la discusión no se puede agotar en demostrar lo anterior para legitimar la intervención reparatoria hacia las víctimas de la problemática en Cali,

puesto que también se continúan experimentando los delitos acabados de mencionar y que guardan relación con el mundo de narcotráfico, como se expuso en el marco teórico, delitos que también son generadores de violencia.

La violencia, producto de la conjunción de este conjunto de elementos, ha propiciado los desplazamientos intraurbanos descritos, cuyos impactos en las dinámicas de vida de las personas afectadas son profundos y complejos, más aún cuando ha habido un desplazamiento forzado anterior, como ocurre con los casos expuestos, especialmente el de María. En esas historias nuevamente se hace presente la sensación de desarraigo, la pérdida de familiares víctimas de la violencia urbana, el quebrantamiento de los lazos familiares y comunitarios contruidos a pesar de las condiciones del contexto, o más bien, fortalecidas por éstas como intentos de hacer frente a esas realidades diarias y no menos importante, también la pérdida del patrimonio construido tiene un valor simbólico de gran magnitud, teniendo en cuenta el entorno de carencias en el que se logra construir una vivienda y considerarla como propia.

Asimismo, se puede concluir que existe un reconocimiento de la problemática desde la institucionalidad, expresado formalmente en la sentencia de la Corte Constitucional mencionada en el tercer capítulo de la Tesis, producto del entramado *concesión-conquista* en el que participan los sectores afectados y el Estado. Sin embargo, que las políticas públicas existentes para atender el desplazamiento forzado intraurbano estén disponibles sólo si se logra establecer relaciones entre este último con la situación de desplazamiento dentro de la ciudad –como queda manifiesto en el Auto expedido por la Corte,- no permite una cobertura adecuada ni un manejo integral en torno a la protección y restitución de derechos. Por lo tanto, si esta relación no se logra demostrar, las peticiones de atención quedan excluidas, lo que provoca la repetición del ciclo de violencia, exclusión y revictimización de las mismas poblaciones vulneradas sistemáticamente, ahora desde la institucionalidad.

Precisamente, lo antes dicho pone en evidencia que la manera más eficaz que encuentran las personas afectadas para hacer frente al desplazamiento

intraurbano, es a través de las redes de apoyo comunales, en este caso, centralizadas por instituciones no gubernamentales. De modo que, más que la escasa oferta institucional para atender a la población desplazada dentro de la ciudad, son las redes de apoyo barriales -como la parroquia, los hogares de vecinos y familiares, entendidas como formas de organización que parecen espontáneas- las que, en la práctica, se instituyen como alternativas para mitigar los impactos que el desplazamiento intraurbano genera en las dinámicas de vida de las personas afectadas. Es importante destacar que esas redes de apoyo se encuentran en los espacios receptores de la población desplazada, es decir, caracterizados por las mismas condiciones de pobreza, exclusión y vulnerabilidad que los asentamientos desde donde se generó el desplazamiento.

La política pública generada desde una perspectiva hegemónica no podría hacer visibles estos mecanismos de resistir y hacer frente a la problemática, por ello es imperativo el papel de los y las Trabajadoras Sociales en territorio –junto a otros profesionales-, a través de la cercanía que propicia el trabajo de campo con las voces, las vivencias e imaginarios de las víctimas del desplazamiento forzado intraurbano, tienen el acervo necesario para comprender ese tejido de resistencia y apoyo generado por vínculos solidarios, y que debería servir como base para generar políticas más inclusivas haciendo visible y fortaleciendo esas redes que ya existen.

Coincidiendo con Cruz (2008) se entiende que las políticas implican un modo de construir los problemas sociales, a la vez que contienen una orientación normativa general que da cuenta de la reproducción de la vida social, siendo una materialización de decisiones tomadas por diferentes actores en medio de un proceso dinámico y disputado. Esta particularidad permite afirmar el sentido político de las políticas sociales que pueden ser el resultado de un cambio en las reglas de juego, o bien lo contrario, un intento de preservarlas sin cambio.

Si la pretensión es cambiar el estado de cosas analizado, se impone entonces un trabajo de constante movilización y participación ciudadana, ejercida a través de los derechos consagrados en la Constitución política y de mecanismos

como la tutela, luchando por conquistar derechos a ser garantizados –de manera conflictiva- por el Estado neoliberal colombiano, cuyo modelo atenta contra los pilares del Estado social de Derecho. De nuevo, resulta central el planteamiento *concesión-conquista* que permita establecer puentes entre el Estado y la población víctima de la problemática, en donde el papel de las profesiones interventivas como el Trabajo social es fundamental en cuanto a proporcionar el conocimiento necesario para comprender el contexto y las características del desplazamiento forzado intraurbano en Cali y participar en la construcción de políticas pertinentes.

La política social para el desplazamiento intraurbano debe ser una construcción desde lo local, y por ello resulta fundamental el conocimiento de la problemática desde la perspectiva de los sectores vulnerados por la misma. Ellos, sus redes de apoyo, los profesionales que intervienen y conocen el contexto deben ser las voces autorizadas, las instituciones deben brindarles credibilidad y a partir de ello cimentar las bases de una política social pertinente e inclusiva.

Precisamente son estos elementos los que han estado ausentes desde el principio. El hecho de replicar para el desplazamiento intraurbano la misma ruta de atención dispuesta para el desplazamiento forzado rural como consecuencia del conflicto armado, muestra esa falta de perspectiva y comprensión del fenómeno en las ciudades, con todas las variables que ello implica, en especial lo concerniente a la violencia urbana, factor desde donde se posicionó el análisis sobre estos tipos de desplazamiento; puesto que al no probarse relación entre el desplazamiento intraurbano con el conflicto armado, las víctimas quedan por fuera de la ruta de atención, desestimando las diferentes dimensiones de la violencia urbana y su repercusión en el fenómeno tratado. Esto también acarrea la falta de un criterio consensuado sobre cómo caracterizar la problemática en la ciudad y cuál sería el papel específico de las entidades encargadas de proteger a la población vulnerable, garantizando la restitución de sus derechos. Esta indefinición produce como consecuencias, desinformación en las víctimas sobre los procesos a seguir tras la afectación, sumado a la revictimización, puesto que en lugar de presentar alternativas para su atención, se les termina cuestionando y

responsabilizándolos en parte, por su situación, como fue el caso de María. Asimismo, esta realidad denota ausencia de capacitación para abordar estos tipos de casos, y un accionar que parece desconocer la dimensión ética inherente a toda práctica socio-profesional. De modo que, el Trabajador Social, a partir de su conexión con la población vulnerada -que le permite entender sus necesidades desde conocimiento generado por el trabajo en el terreno,- puede liderar también procesos de capacitación y sensibilización haciéndolos extensivos a otros funcionarios encargados de las diferentes instancias de atención a las víctimas.

En este sentido, las políticas sociales deben visibilizar estas y otras experiencias del desplazamiento forzado intraurbano y las estrategias existentes, desplegadas por las personas afectadas y sus redes de apoyo dentro de las mismas comunidades, para plantear formas de intervención desde una perspectiva participativa donde los receptores de dichas políticas sean tomados como actores que participan en la transformación social, es decir, que atribuyen a los sujetos la potencia para construir soluciones, a partir del reconocimiento de un saber propio de los grupos humanos sobre las situaciones y los problemas con los que se enfrentan. Esta manera de comprender las relaciones orientadas a favorecer cambios sociales, procura que el quehacer experto se adapte al espacio relacional de los ciudadanos, y no al revés (Arenas: 2013). Asimismo, estas perspectivas resaltan la importancia de conocer la realidad social y reflexionar de manera crítica sobre ella, lo que al mismo tiempo conlleva al desarrollo de “una postura política para articular la dinámica de las poblaciones a la participación en apuestas de transformación, en el marco de opciones viables” (Moreno y Valencia: 2018: 11).

Para finalizar, concierne puntualizar que vivimos en una sociedad en la cual la radicalización de la violencia surge como contrapartida, de un mundo que enmudece ante la muerte y el sufrimiento de miles de personas. Frente a esta realidad, resulta imperativo desnaturalizar las intervenciones estatales “compensatorias y punitivas,” comprendiendo que los procesos nunca son lineales, y que otras formas de resistencia pueden ser construidas, si las políticas

sociales empiezan a ser pensadas en clave de protección y ampliación de derechos, como constructoras de subjetividades más autónomas, disputando el sentido hegemónico desde el cual se definen los problemas sociales.

Lejos de respuestas certeras, esta tesis pretende aportar a la construcción colectiva de preguntas que favorezcan intervenciones lúcidas, resignificando la dimensión política de la práctica profesional del Trabajo Social, y generando otros marcos de lectura frente al problema del desplazamiento forzado intraurbano, cuyo análisis sin dudas podrá ser enriquecido en nuevos estudios.

Anexo 1. Mapa Santiago de Cali por comunas.



Alcaldía de Cali. (s.f). Mapa comunas de Cali. Recuperado de:
<https://www.cali.gov.co/publico2/mapas/mapcomunasbaja.htm>

- Las comunas resaltadas, 13-14-15 y 21, conforman el Distrito de Aguablanca.
- En la comuna 15 se encuentra ubicado el asentamiento Brisas de Comuneros.

BIBLIOGRAFÍA

- Abramovich, v. (2006). Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo. *Revista de la CEPAL* 88, 30-55.
- ACNUR. (2014). *Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2014*. Obtenido de www.acnur.es
- Aguilar Gutierrez, A. (2007). Marco Teórico y Aspectos Generales Relativos al Fenómeno de Desplazamiento Interno Forzoso. *Eleuteria*, 2-45.
- Alcaldía de Medellín. (2010). *Análisis del contexto y la dinámica del desplazamiento forzado intraurbano en la ciudad de Medellín*. Medellín: Alcaldía de Medellín.
- Alcaldía de Santiago de Cali. (mayo de 2013). *Alcaldía de Santiago de Cali*. Obtenido de http://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/51642/cali_segunda_ciudad_con_mayor_poblacion_afrodescendiente_en_el_pas/
- Alonso C, e. a. (2007). *una mirada descriptiva a las comunas de Cali*. Santiago de Cali: Centro de investigación en economía y finanzas. Universidad Icesi.
- Alvarado, L. E. (2013). *Microtráfico y narcomenudeo: caracterización del problema de las drogas en pequeñas cantidades en Colombia*. Bogotá, D.C: Ministerio de Justicia y del Derecho – Dirección de política contra las drogas y actividades relacionadas.
- Ansaldi, W. G. (2012). De la colonia a la disolución de la dominación oligárquica. En *América Latina: la construcción del orden* (pág. 29). Buenos Aires: Ariel.
- Arenas, Miguel (2013). Un acercamiento sociológico a las formas de acción e intervención social. Acción social y acción social proyectada. *Papeles Del CEIC*, 97(2), 1-33. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76528252002>
- Arjona, A., y Checa, J.C. (1998) Las historias de vida como método de acercamiento a la realidad social. Almería: Gazeta de antropología.

- Aron, R. (1980). *Las etapas del pensamiento sociológico II: Émil Durkheim*. Madrid: Siglo veinte.
- Arquidiócesis, C. V. (1997). *Desplazados en Cali: entre el miedo y la pobreza: estudio probatorio informe preliminar*. Cali: Arquidiócesis de Cali.
- Aquín, N. (2003). Ensayos sobre ciudadanía, Reflexiones desde el trabajo social. Espacio ed, Buenos Aires.
- Atehortúa Arredondo, C. I. (2009). Límites para el concepto de desplazamiento forzado intraurbano: el papel de la acción de tutela y de la jurisprudencia para su construcción. *Dialogos* N°30.
- Atehortúa, C. F. (2013). La implementación de la política publica del desplazamiento. *Revista colombiana de derecho internacional*, N°22I, 121-145.
- Ávila Martinez, A. (2016). Bacrim, neoparamilitares y grupos post-desmovilización paramilitar. *Semana*, Recuperado de: www.semana.com.
- Bauman, Z. (2005). *Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias*. Buenos Aires: Paídos.
- Bunzl Sánchez, R. (2008). *¿Cuando cesa la condición de desplazado por la violencia en Colombia?* Medellín: Universidad de Antioquia.
- Caracol. (2012). *Caracol noticias*. Recuperado el 2013, de Acción social reportó un incremento del desplazamiento intraurbano.: www.caracol.com.co
- Caracol radio. (27 de Enero de 2010). Acción social reportó un incremento del desplazamiento intraurbano. *Caracol Radio*, pág. Recuperado de: www.caracol.com.co.
- Caracol Radio. (27 de Abril de 2016). Palmira y Cali están entre las 10 ciudades más peligrosas del mundo. *Caracol Radio*, pág. Recuperado de: www.caracol.com.co.
- Carballeda, A. (2002) La intervención en lo social. Exclusion e integración en los nuevos escenarios sociales. Ed Paidos, Buenos Aires.
- Carballeda, Alfredo (2007). Problemáticas sociales complejas y políticas públicas. *Revista CS*, 1(1), 261-272. Recuperado de: <https://doi.org/10.18046/recs.i1.409>
- Carlos. Historia de vida. Comunicación personal, 2014.

- Castro Lee, C. (. (2005). *En torno a la violencia en Colombia: una propuesta interdisciplinaria*. Cali: Universidad del Valle.
- Chárriez cordero, M. (2012). Historias de vida: Una metodología de investigación cualitativa. *Griot. Vol 5*, 50-67.
- Chiappe de Villa, M. L. (1999). La política de vivienda de interés social en Colombia en los noventa. *SERIE: financiamiento del desarrollo. CEPAL*.
- CODHES. (2013). *Desplazamiento forzado intraurbano y soluciones duraderas. Una aproximación desde los casos de Buenaventura, Tumaco y Soacha*. Bogotá: Antropos Ltda.
- CODHES. (s.f.). *Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento*. Recuperado el 2013, de <http://www.codhes.org/index.php/comision-de-seguimiento>
- Congreso de Colombia. (1997). *Ley 387 de 1997*. Bogotá, D.C.
- Congreso de Colombia. (1997). *Ley 387. Título I: Del desplazado y la responsabilidad del Estado*. Ibagué: www.secretariassenado.com.
- Congreso de Colombia. (1997). *Ley 418 de 1997*. Bogotá, D.C.
- Constitución política de Colombia. (2015). Capítulo 4. De la protección y acción de los derechos. Bogotá, D.C.
- Corte Constitucional. Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004. (2013). *AUTO 119 DE 2013*. Bogotá.
- Cruz, V. (2008) "La construcción de las políticas sociales en el neoliberalismo. El caso del Programa de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la Provincia de Buenos Aires." Tesis de Maestría en Trabajo Social. FTS UNLP. La Plata.
- DANE. (2007). *DANE*. Recuperado el 2013, de Colombia una nación multicultural. Su diversidad étnica: www.dane.gov.co/censo/files/presentaciones/grupos_etnicos.pdf
- DANE. (2010). *DANE*. Obtenido de Proyecciones nacionales y departamentales de población 2005-2020: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/7Proyecciones_poblacion.pdf

- Desarrollo-PNUD, P. d. (2011). *Desplazamiento forzado, tierras y territorios Agendas pendientes: la estabilización socioeconómica y la reparación*. Bogotá, D.C.: Recuperado de: www.acnur.com.
- Dirección de registro y gestión de información. (2013). *unidad para la atención y reparación integral a las víctimas. Respuesta al auto 052 de 2013*.
- Dirección de registro y gestión de información. (2013). *unidad para la atención y reparación integral a las víctimas. Respuesta al auto 052 de 2013*.
- Durán, A. (14 de Abril de 2014). *Razón Pública*. Recuperado el 2014, de www.razonpublica.com
- Dussel, E. (1994). *1492 : el encubrimiento del otro : hacia el origen del mito de la modernidad*. La paz: Recuperado de: www.biblioteca.clacso.edu.ar.
- El Espectador. (Mayo de 2013). Reconocen desplazamiento intraurbano a víctimas de bacrim. *El Espectador*, pág. Recuperado de www.elspectador.com.
- Equipo Psicosocial. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. (2010). *Comisión Intereclesial de Justicia y Paz*. Recuperado el 2014, de Los efectos psicosociales de la revictimización: <http://justiciaypazcolombia.com/Los-efectos-psicosociales-de-la>
- Esping-Anderson. G. (1993). Los tres mundos del Estado de Bienestar. Recuperado de: <https://es.scribd.com/document/185636820/Gosta-Esping-Anderson-Los-tres-mundos-del-estado-de-bienestar-Intro-y-cap-1-pdf>
- Fajardo M, D. (2014). Estudio sobre los orígenes del conflicto armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana. En *Comisión histórica del conflicto y sus víctimas*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Faleiros, V. (2000). Las funciones de la política social en el capitalismo. En: *La política social Hoy*. Elizabete Borgiani, Carlos Montaña (Comp). Cortez Ed, Sao Pablo, 43-70.
- Falla, Uva; Gómez, Sandra & Rodríguez, Ramiro (2011). La intervención en lo social y la construcción de un proyecto político del trabajo social. *Tabula Rasa*, (15), 195-219. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-24892011000200011&lang=pt

- Federación internacional de sociedades de la cruz roja y de la media luna roja. (2010). La violencia urbana. En *Informe Mundial sobre Desastres 2010 - Enfoque en el riesgo en zonas urbanas*. (pág. Capítulo 4.). Recuperado de: www.ifrc.org/es.
- Figuerola, H. H. (2014). Los abuelos de la memoria en Aguablanca (Cali, Colombia). Entre una ciudad agreste y un pueblo vuelto utopía. *Bioética*, 62-81.
- Fuentes, P y Cruz, V. comps. (2017) *La institución familiar en Trabajo Social: debates contemporáneos en la formación y el ejercicio profesional* 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Espacio Editorial.
- Fundacion Servicio Juvenil Bosconia Marcelino. (28 de Octubre de 2011). Bosconia MARcelino. Cali, Valle del Cauca, Colombia.
- García, N. (2006). La formación de asentamientos informales: un proceso gestado por diferentes actores sociales. *Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales.*, Universidad de Barcelona.
- García Villegas, M. (2017). El orden de la libertad. Ed. Fondo de cultura económica, Bogotá.
- Giddens. A. (1995). Modernidad e Identidad del Yo: El Yo y la Sociedad en la Época Contemporánea. Barcelona, Editorial Península.
- Gómez Izasa, M. C. (2006). La historia del Estado social de derecho. *Estudios de derecho*, 73-99.
- González Bolaños, J. M. (2012). Mundos populares entre el desplazamiento y el poblamiento. *memorias e interculturalidades en el distrito de Aguablanca de Cali*, 13-28.
- Guzmán C, G., Fals Borda, O., & Umaña Luna, E. (2005). *LA violencia en Colombia. Estudio de un proceso social*. Bogotá: Taurus.
- Hernandez Sandioka, E. (2004). *Tendencias historiográficas actuales: escribir historia hoy*. Madrid: Ediciones Akal.
- Iamamoto, M. (2003). *El servicio social en la contemporaneidad, trabajo y formación profesional*. Sao Pablo: Cortez Ed.

- INDEPAZ. (enero de 2017). *Indepaz.org*. Recuperado el 2017, de XII informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares 2016: recuperado de: <http://www.indepaz.org.co>
- Instituto popular de capacitación. (1998). Informe sobre la situación de violencia, derechos humanos y DIH en Antioquia. *Guerra, paz y derechos humanos en antioquia.*, 22.
- Kessler, G. (2011). *Crimen organizado en America Latina y el Caribe. Ejes de debate sobre narcotráfico, trafico de armas y de personas*. Recuperado el Abril de 2013, de Cepal: www.cepal.org
- Kruse, H. (1971). *la reconceptualizacion del servicio social en america latina* . Uruguay.
- Malacalza, S; Fuentes, P, y Cruz, V. -comps- (2012) *Claroscuros: Trabajo Social, capitalismo tardío y subjetividades*. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata. ISBN: 978-950-34-0716-5.
- Malacalza, S. (2009). El Trabajo Social y la construcción de estrategias de intervención en el escenario socio-histórico Latinoamericano en un mundo globalizado. *Palabras y cosas para el trabajo social. El lugar de las estrategias de intervención*. Santiago de Chile.
- Mantilla. S (2015). La revictimización como causal del silencio de la víctima. Revista de ciencias Forenses de Honduras. 3-12. Recuperado de: [https://www.academia.edu/33047657/Revictimizacion como causal de silencio de la victimizas](https://www.academia.edu/33047657/Revictimizacion_como_causal_de_silencio_de_la_victimizas)
- María. Historia de vida. comunicación personal (2014).
- Martínez, Antar (2014). Cambiar metáforas en la psicología social de la acción pública: de intervenir a involucrarse. *Athenea Digital*, 14(1), 3-28. Recuperado de: <https://doi.org10.5565/rev/athenead/v14n1.793>
- Martinez, S. (2016). El nacimiento de los Urabeños, según “Don Mario”. Recuperado el 2016, de”: www.semana.com
- Merton, R. (2002). *Teoría y estructuras sociales*. México, D.F.: Fondo de cultura económica.

- Miguez, D. (2008). *Delito y cultura. Los códigos de la ilegalidad en la juventud marginal urbana*. Buenos Aires: Biblos.
- Miranda, M. (2004). *De la caridad a la ciencia. Pragmatismo, interaccionismo simbólico y Trabajo Social*. . Mira Editores, S.A.
- Moljo, C. (2003). La Historia oral, como posibilidad de reconstrucción histórica, su relación con el Trabajo Social. Recuperado de:
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:J1ieSQCw144J:www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pela/pl-000057.pdf+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=us>
- Montaño, C. (2000). La política social: espacio de intersección laboral y objeto de reflexión del servicio social. En E. y. Borgiani, *La política social hoy* , 7-26. Sao Pablo: Cortez Ed.
- Moreno Camacho. M. & Molina Valencia. N. (2018).La intervención social como objeto de estudio: discursos, prácticas, problematizaciones y propuestas. Revista Atenea Digital. 1-29. Recuperado de:
<https://atheneadigital.net/article/view/v18-n3-moreno-molina>
- Organización de las Naciones Unidas (1985). Definición de víctima. Resolución 40/34; 1985. 12 p. Disponible en: <http://www.osce.org>
- Observatorio social. (2014). *Homicidios y pandillas juveniles en Santiago de Cali 2005-2009*. Cali: Recuperado de: www.cali.gov.co.
- Observatorio Social. (2016). *Informe anual (2015)de homicidios en Cali*. Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali. Secretaría de gobierno. Convivencia y seguridad.
- Osorio, L. E. (26 de julio de 2016). percepciones del desplazamiento intraurbano en cali por el asesor para el desplazamiento forzado en la región. (L. F. Riascos Sánchez, Entrevistador)
- Ospina Gómez, C., & Zapata hoyos, I. (2004). *Contexto e intereses del desplazamiento intraurbano en Medellín 2002-2003*. Medellín: Universidad de Antioquia, departamento de sociología.
- Ospina Gómez, C., & Zapata Hoyos, I. (2004). *Contexto e intereses del desplazamiento intraurbano en Medellín 2002-2003*. Medellín: Universidad de Antioquia. .
- Ospina, Y. (5 de junio de 2016). Informe exclusivo: Cali está en riesgo de tener varios 'Bronx'. *El País.com.co*, pág. Recuperado de. www.elpais.com.co.

- Palacios, M. (2012). *Violencia pública en Colombia 1958-2010*. Bogotá: Fonfo de cultura económica.
- Pastorini, A. (2000). ¿Quién mueve los hilos de las políticas sociales? Avances y límites de la categoría “concesión-conquista”. En B. E. (comp), *La política social hoy* (págs. 207-232). Sao Pablo: Cortez Ed.
- Personería de Cali. (2013). *Personería municipal de santiago de Cali*. Recuperado el 2014, de <http://www.personeriacali.gov.co/actualidad/noticias/662-personeria-de-cali-denuncia-desplazamiento-intraurbano-de-familias-en-el-barrio-el-vergel-por-amenazas-y-enfrentamientos-entre-pandillas#.V4PM2NLhDIU>
- Personería municipal de Santiago de Cali. (2015). *Informe sobre la situacion de violencia y seguridad en Santiago de Cali*. Santiago de Cali: Alcaldía municipal.
- Peña salinas Victor H (2006). La política comunitaria de Uribe Velez. Revista Derecho y realidad N°7. Facultad de derecho y ciencias sociales UPTC. 141-151.
- Plano, R. y. (2002). La Entrevista en la Historia de Vida. Algunas cuestiones metodológicas. *Observatorio memoria y practicas sociales en derechos humanos*, 2-22.
- Portilla Marcial, O. (2015). Política social: del Estado de Bienestar al Estado Neoliberal. *Espacios Públicos*. Vol 8., 100-116.
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD. (2014). *informe regional de desarrollo humano 2013-2014, Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: Diagnostico y propuestas para América Latina*. Recuperado de: www.undp.org.
- RCN. (31 de 3 de 2011). Colombia se mantiene como el segundo país con mayo desplazamiento en el mundo. *RCN radio*, pág. Recuperado de: www.rcnradio.com.
- Redacción de El País. (2013). *El País*. Recuperado el 2014, de www.elpais.com.co
- Redacción de El País. (2013). *Policía advierte que en Cali el microtráfico es disputado por 24 grupos*. Recuperado el 2014, de El País : www.elpais.com.co

- Redacción de El País. (2013). *Urabeños y rastros controlan pandillas en Cali*. Recuperado el 2014, de El País: www.elpais.com.co
- Reed H, M. (2011). *Bacrim: trampa conceptual*. Recuperado de: www.elcolombiano.com.
- Rivera, B. (2000). La modalidad de la historia de vida en la metodología cualitativa. *Paidea Puertorriqueña*. Vol 2, 1-17.
- Romero, R. O. (2014). *Desplazamiento forzado intraurbano y soluciones duraderas. Vol. II Bogotá, Cúcuta y Quibdó*. Bogotá: CODHES.
- Salazar Quiñones, N. (2011). Brisas de Comuneros, asentamiento afrodescendiente en Cali. Desde sus raíces hasta la actualidad. Tesis pregrado Lic. Ciencias sociales, Universidad del Valle, Cali. Recuperado de: <https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/4122>
- Sebe Bom Meihy, J. C. (1992). Definiendo la historia oral. *Revista historias* 30.
- Semana. (2010). Aumentó el desplazamiento intraurbano en Medellín en un 72 por ciento. *Semana*, Recuperado de: www.semana.com.
- Tamayo, J. J. (2011). Boaventura de Sousa Santos: hacia una sociología de las ausencias y las emergencias. *Utopía y praxis latinoamericana*, 41-49.
- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2014). *Retornos y reubicaciones: hacia la reparación integral a víctimas del desplazamiento forzado*. Bogotá.
- Unidad para la atención y reparación integral de las víctimas. (2015). *mi.unidadvictimas*. Recuperado el 2016, de mi.unidadvictimas.gov.co
- Uribe Castro, H. (2011). Los asentamientos ilegales en Colombia: las contradicciones de la economía-mundo capitalista en la sociedad global. *Latinoamérica. Revista de estudios Latinoamericanos*, N° 53, 169-200.
- Urrea Giraldo, F., & Murillo Cruz, F. (1999). Dinámica del poblamiento y algunas características de los asentamientos populares con población afrocolombiana en el oriente de Cali. *Desplazados, migraciones internas y reestructuraciones territoriales*. Bogotá: Centro de estudios sociales- CES-. Facultad de ciencias humanas, Universidad Nacional.
- Valencia, A. (11 de octubre de 2016). desplazamiento intraurbano en Cali. (L. F. Riascos, Entrevistador)

- Vanegas Muñoz, G. (1998). *Cali tras el rostro oculto de las violencias*. Cali: Universidad del Valle.
- Vargas Silva, L. E. (2013). *Auto 119 de 2013*. Corte Constitucional.
- Vieira, E. (2000). Política social, política económica y método. En B. E. (comp), *La política social hoy* (págs. 27-42). Sao Pablo: Cortez Ed.
- Villar Borda, L. (2007). Estado de derecho y Estado social de derecho. *Derecho del Estado N°20*, 93.
- Weber, M. (1979). La política. En *el político y el científico*. Madrid: trad. F. Rubio Llorente, Alianza, 5ª ed.
- Yasbek, M. (2000). Políticas sociales y asistenciales. Estrategias contradictorias de gestión estatal de la pobreza de las clases subalternas. En: *La política social Hoy*. Elizabete Borgiani, Carlos Montaña (Comp). Cortez Ed, Sao Pablo, 119-148.